

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Vigésima Quinta Reunión del Comité de Expertos
Del 16 al 20 de marzo de 2015
Washington, DC

OEA/Ser.L.
SG/MESICIC/doc.433/14 rev. 4
20 Marzo 2015
Original: inglés

ANTIGUA Y BARBUDA

INFORME FINAL

(Aprobado en la sesión plenaria del 20 de marzo de 2015)

SUMARIO

Teniéndose en cuenta que Antigua y Barbuda no se encontraba vinculada al MESICIC cuando se desarrolló la Primera Ronda del Mecanismo, el presente informe contiene el análisis integral de la implementación en dicho país de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción seleccionadas por el Comité de Expertos del MESICIC para la Primera Ronda de Análisis, así como para la Cuarta Ronda.

Las disposiciones seleccionadas para la Primera Ronda son las previstas en el Artículo III, párrafo 1 de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Normas de conducta: conflictos de intereses, preservación de recursos, obligación de denunciar); Artículo III, párrafo 2 (Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de las normas de conducta); Artículo III, párrafo 4 (Declaración de ingresos, activos y pasivos); Artículo III, párrafo 9 (Órganos de control superior); Artículo III, párrafo 11 (Participación de la sociedad civil); Artículo XIV (Asistencia y Cooperación) y Artículo XVIII (Autoridades Centrales).

A su vez, para la Cuarta Ronda se seleccionó el Artículo III, párrafo 9, correspondiente a “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”.

El análisis se efectuó dentro del marco de la Convención, el Documento de Buenos Aires, el Reglamento del Comité y las metodologías adoptadas por el mismo para la realización de las visitas *in situ* y para la Cuarta Ronda, incluidos los criterios allí establecidos para orientar el análisis sobre tratamiento igualitario para todos los Estados parte, equivalencia funcional, y el propósito tanto de la Convención como del MESICIC de promover, facilitar y fortalecer la cooperación entre los Estados Parte en la prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción.

Para llevar a cabo el análisis se contó con la respuesta de Antigua y Barbuda al cuestionario; con la información recogida por la Secretaría Técnica; y con una nueva e importante fuente de información, como lo fue la visita *in situ* realizada entre el 7 y el 9 de octubre de 2014 por los miembros del subgrupo de análisis de Antigua y Barbuda, integrado por las Bahamas y Chile, con el apoyo de la Secretaría Técnica, con ocasión de la cual se pudo precisar, aclarar y complementar la información suministrada por Antigua y Barbuda y escuchar opiniones de organizaciones de la sociedad civil, lo cual contribuyó a que el Comité contara con información objetiva y completa sobre dichos temas.

El análisis de las disposiciones de la Convención seleccionadas para la Primera y Cuarta Rondas se orientó, de acuerdo con lo previsto en la metodología para la Cuarta Ronda con respecto a los Estados no vinculados al MESICIC en la Primera Ronda, a determinar si Antigua y Barbuda cuenta con un marco jurídico en cada uno de los temas y órganos de control superior analizados, si éste es adecuado para los propósitos de la Convención y si existen resultados objetivos; y teniendo en cuenta lo observado se formularon las recomendaciones pertinentes.

PRIMERA RONDA

Con respecto a la revisión de las normas de conducta y a los mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento, entre las recomendaciones formuladas a Antigua y Barbuda se encuentran las siguientes: reglamentar la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 y la Ley de Prevención de la Corrupción de 2004 a fin de crear e implementar mecanismos y pautas para determinar, en casos concretos, si quien desempeña la función pública se encuentra en una situación de conflicto de intereses y, al mismo tiempo, adoptar las medidas necesarias para proteger el interés público, tales como la separación de la persona de su cargo público, el retiro de su participación oficial en el asunto, la renuncia a los intereses privados

objeto del conflicto o la anulación de las decisiones adoptadas por la persona en dicho cargo; y establecer una obligación expresa que exija a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.

En materia de revisión de los sistemas para la declaración de ingresos, activos y pasivos, entre las recomendaciones formuladas se encuentran las siguientes: Considerar el establecimiento de sanciones administrativas para quienes incumplan la obligación de presentar una declaración de ingresos, activos y pasivos; o consignen información incompleta, inexacta o falsa; así como para quienes, tras solicitud al efecto, no le presenten a la Comisión de Integridad la información adicional dentro de un plazo predeterminado; las mencionadas sanciones pueden incluir la retención salarial y, para aquellos que hayan dejado el servicio público, multas e inhabilitaciones para ocupar cargos públicos hasta tanto se presente la declaración final de activos; y dotar a la Comisión de Integridad de los auditores e investigadores necesarios para asistirle en la adecuada verificación de la exactitud de las declaraciones de ingresos, activos y pasivos presentadas en virtud de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004.

Respecto de los mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción, entre las recomendaciones efectuadas se encuentran las siguientes: considerar la revisión de la disposición prevista en el artículo 7(b) de la Ley de Libertad de la Información de 2004 que permite que el ministro responsable de la información pública exima a una autoridad pública o a una función de una autoridad pública de la aplicación de la mencionada norma legal; asegurar que las autoridades públicas que aún no lo han hecho cumplan lo dispuesto en el art. 9 de la Ley de Libertad de la Información de 2004 y designen a sus respectivos oficiales de información; fortalecer la Oficina del Comisionado de Información asegurándose de que cuente con los recursos humanos, financieros y tecnológicos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones, teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos; y compilar y difundir una guía clara y simple con información práctica el ejercicio efectivo de derechos según la Ley de Libertad de la Información de 2004, conforme lo exigido por el art. 8(1) de dicha norma legal.

En lo relativo a asistencia recíproca, cooperación técnica mutua y autoridades centrales, se formularon las siguientes recomendaciones: elaborar e implementar un programa integral de capacitación y difusión para los funcionarios y autoridades competentes de forma de que tomen conocimiento y puedan aplicar las disposiciones de la Convención y de otros tratados firmados por Antigua y Barbuda en relación con la asistencia recíproca en la investigación o enjuiciamiento de actos de corrupción; y considerar la posibilidad de ratificar la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia Penal y participar activamente en la Reunión de Ministros de Justicia u Otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA) y en su Grupo de Trabajo sobre Cooperación Jurídica en materia Penal.

Asimismo, con base en análisis y aportes que figuran en el informe, se formularon, entre otras, las siguientes recomendaciones generales: diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación para los servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su pleno conocimiento así como su adecuado manejo y aplicación; y seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando corresponda, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular.

CUARTA RONDA

Los órganos de control superior de Antigua y Barbuda que se analizaron en el presente informe son los siguientes: la Comisión de Integridad, la Comisión del Servicio Público (PSC), la Procuraduría General, la Oficina del Director del Ministerio Público (DPP) y la Oficina del Director de Auditorías (ODA).

Entre las recomendaciones formuladas y sometidas a la consideración de Antigua y Barbuda en relación con los mencionados órganos se encuentran las siguientes.

Proporcionar a la Comisión de Integridad, a la Procuraduría General, a la Oficina del Director del Ministerio Público y a la Oficina del Director de Auditoría la estructura correspondiente, así como los recursos presupuestarios y humanos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones, dentro de los recursos disponibles.

Respecto de la Comisión de Integridad, asegurarse de que cuente con independencia presupuestaria; considerar otorgarle, con sujeción a la Constitución del país y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, competencia para imponer sanciones administrativas por incumplimientos de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004, además de conservar los resultados de dichas sanciones que permitan una evaluación integral de su efectividad; y considerar la modificación de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 a efectos de que exija que la Comisión de Integridad presente también informes de sus investigaciones a la correspondiente cámara parlamentaria, comisión de servicio, junta u otra autoridad a efectos de que puedan tomar las medidas disciplinarias adecuadas y comunicar el resultado a dicha comisión.

En lo relativo a la Comisión del Servicio Público, modificar su reglamento, de acuerdo con los principios fundamentales del sistema jurídico del país, a efectos de que no pueda impedirse la incoación de procesos disciplinarios en contra de un funcionario público absuelto de cargos penales respecto de un presunto acto de inconducta implícito en dichos cargos; considerar el establecimiento de normas claras relativas a la facultad discrecional de los Secretarios Permanentes para decidir cuándo denunciar ante la Comisión del Servicio Público un asunto de carácter disciplinario o penal, así como mecanismos de control superior para asegurar el cumplimiento; y fijar un plazo razonable para la conclusión de las investigaciones disciplinarias y para su presentación ante la Comisión del Servicio Público a efectos de que esta última emita su decisión al respecto.

Con respecto a la Procuraduría General, tomar las medidas necesarias para establecer la unidad de anticorrupción en su seno y examinar el marco jurídico vigente en la materia a fin de asegurarse de que dicha unidad funcione en forma coordinada con los órganos de control superior existentes, como la Oficina del Director del Ministerio Público y la Comisión de Integridad; y considerar la imposición de una obligación legal a la Procuraduría General a fin de que rinda cuentas y publique informes anuales, con divulgación de sus actividades y de los resultados obtenidos, así como el nivel de desempeño interno de la institución y sus objetivos, desafíos y logros.

Con respecto a la Oficina del Director del Ministerio Público (DPP), adoptar las medidas necesarias para preservar su autonomía; adoptar mecanismos de coordinación con otros órganos; asegurar una mayor independencia presupuestaria; asignarle la cantidad suficiente de fiscales y de personal de apoyo, además de asegurarse de que los fiscales reciban capacitación periódica en cuanto a los mecanismos de judicialización de actos de corrupción; implementar un sistema de seguimiento de los casos de corrupción iniciados por la DPP que le permita determinar cómo van tramitándose y cuáles son los resultados obtenidos; elaborar y publicar datos estadísticos que permitan establecer claramente los casos judicializados por la DPP que se encuentran específicamente relacionados con actos de corrupción, así como sus resultados, a efectos de individualizar desafíos y recomendar, cuando corresponda, medidas correctivas; y crear y mantener actualizado un sitio en internet de la Oficina del Director del Ministerio Público con información de sus actividades, desafíos y resultados del procesamiento judicial de actos de corrupción que tramite.

Con respecto a la ODA, considerar otorgar a la Oficina del Director de Auditorías la obligación legal de comunicar irregularidades, tales como actividades fraudulentas, a las autoridades que correspondan; adoptar las medidas necesarias para garantizar que el Comité de Cuentas Públicas (PAC) se reúna en forma periódica y considerar la revisión de las órdenes permanentes del Parlamento y del reglamento del PAC a fin de asegurar que los informes de la ODA presentados al Parlamento se aborden sin demoras a efectos de permitir acciones correctivas expeditivas; establecer mecanismos para asegurar que las autoridades y órganos sujetos al control de la ODA cumplan efectivamente las recomendaciones formuladas en sus informes de auditoría; y adoptar un sistema de seguimiento de aquellas conductas que se detecten durante las auditorías efectuadas por la Oficina del Director de Auditorías que puedan constituir actos de corrupción y que dicho órgano comunique a los entes competentes a efectos de su investigación y de la aplicación de las medidas correspondientes, lo cual le permitirá conocer la forma en la que se tramitan sus conclusiones y los resultados de las mismas, además de hacer pública dicha información cuando corresponda.

COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN

INFORME RELATIVO A LA IMPLEMENTACIÓN EN ANTIGUA Y BARBUDA DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN LA PRIMERA Y CUARTA RONDAS¹

INTRODUCCIÓN

1. Contenido del informe

[1] El presente informe presenta, en primer lugar, una revisión integral de la implementación en Antigua y Barbuda de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción seleccionadas por el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la misma (MESICIC) para la Primera Ronda de Análisis. Las disposiciones seleccionadas para la Primera Ronda son las indicadas en el artículo III, párrafo 1 (normas de conducta: conflictos de intereses, preservación de los recursos públicos, obligación de informar), párrafo 2 (Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de las normas de conducta), párrafo 4 (sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos), párrafo 9 (órganos de control superior), párrafo 11 (participación de la sociedad civil), y en los artículos XIV (asistencia y cooperación) y XVIII (autoridades centrales).²

[2] En segundo lugar el informe presenta un análisis de la implementación de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción seleccionada por el Comité de Expertos del MESICIC para la Cuarta Ronda de Análisis. La disposición seleccionada consta en el párrafo 9 del artículo III de la Convención relativo a los “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”.

2. Ratificación de la Convención y vinculación con el Mecanismo

[3] De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, Antigua y Barbuda ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción el día 13 de enero de 2004 y depositó el instrumento respectivo de ratificación el día 23 de febrero de ese mismo año.

[4] Asimismo, Antigua y Barbuda suscribió la Declaración sobre el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción el 9 de diciembre de 2010.

I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA Y DE LA VISITA *IN SITU*

¹ El presente informe fue aprobado por el Comité, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3, g) y 25 del Reglamento y Normas de Procedimiento, en la sesión plenaria celebrada el día 20 de marzo de 2015, en el marco de su Vigésima Quinta Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 16 al 20 de marzo de 2015.

² Teniéndose en cuenta que Antigua y Barbuda no se encontraba vinculada al MESICIC cuando se desarrolló la Primera Ronda del MESICIC, el Capítulo XII de la metodología para el análisis de la implementación de las disposiciones de la Convención seleccionadas en el marco de la Cuarta Ronda y para el seguimiento de las recomendaciones formuladas en las rondas anteriores (documento SG/MESICIC/doc. 289/11 rev. 2) prevé que “a los Estados que no se encontraban vinculados al Mecanismo cuando se desarrolló la Primera Ronda de Análisis, se les aplicará la metodología adoptada por el Comité para dicha Ronda [(SG/MESICIC/doc.21/02)] en lo que respecta al análisis de las disposiciones de la Convención que fueron seleccionadas para la misma, salvo en lo que corresponda a sus órganos de control superior, que serán analizados con base en la metodología adoptada por el Comité para la Cuarta Ronda, teniendo en cuenta que el Comité acordó en su Decimoctava Reunión que dichos órganos serán analizados de manera integral”.

1. Respuesta de Antigua y Barbuda

[5] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida de Antigua y Barbuda en todo el proceso de análisis y, en especial, de la Procuraduría General y del Ministerio de Asuntos Jurídicos, así como de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas y Lavado de Dinero (ONDCP), la cual se hizo evidente, entre otros aspectos, en su respuesta al cuestionario y en la disponibilidad que siempre mostró para aclarar o completar el contenido de la misma, al igual que en el apoyo para la realización de la visita *in situ* a la que se hace referencia en el párrafo siguiente del presente informe. Antigua y Barbuda envió, junto con su respuesta, las disposiciones y documentos que estimó pertinentes, que se encuentran disponibles en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_atg.htm

[6] Asimismo, el Comité deja constancia de que el Estado analizado otorgó su anuencia para la práctica de la visita *in situ* de conformidad con lo previsto en la disposición 5 de la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*.³ Dicha visita se realizó del 7 al 9 de octubre de 2014 por los representantes de Bahamas y Chile, en su calidad de integrantes del subgrupo de análisis preliminar, contando para ello con el apoyo de la Secretaría Técnica del MESICIC. La información obtenida en dicha visita se incluye en los apartados correspondientes del presente informe y su agenda de reuniones se anexa al mismo, de conformidad con lo previsto en la disposición 34 de la citada *Metodología*.

[7] El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por Antigua y Barbuda hasta el 9 de octubre de 2014, fecha en la que concluyó la mencionada visita *in situ*, así como la que fuera aportada y le fuera solicitada por la Secretaría y por los integrantes del subgrupo de análisis para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con el *Reglamento y Normas de Procedimiento; la Metodología para el Análisis de la Implementación de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción Seleccionada en la Cuarta Ronda*; y la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*. Dicha información se encuentra disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic_docs_en.htm.

2. Documentos e información recibidos de organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores

[8] El Comité no recibió, dentro del plazo fijado por el Comité en el calendario, documentos de organizaciones de la sociedad civil de conformidad con lo previsto en el artículo 34, inciso b), del *Reglamento* del Comité.

[9] No obstante, en ocasión de la visita *in situ* a Antigua y Barbuda, se recabó información de organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, así como de asociaciones profesionales, que fueron invitadas a participar en reuniones con tal fin, de conformidad con lo previsto en la disposición 27 de la *Metodología para la Realización de las Visitas in Situ*, cuya lista de invitados se incluye en la agenda de dicha visita *in situ*, que se anexa al presente informe. Esta información se refleja en los apartados correspondientes del mismo, en lo que resulta pertinente para sus propósitos

II. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN POR EL ESTADO PARTE DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA LA PRIMERA Y CUARTA RONDAS

A) ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA LA PRIMERA RONDA

³ Documento SG/MESICIC/doc.276/11 rev. 2, disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/met_onsite.pdf

1. Marco legal e institucional ⁴

[10] Antigua y Barbuda es un estado independiente y soberano compuesto de dos islas. Es miembro del Commonwealth de Naciones y obtuvo su independencia de Gran Bretaña el 1 de noviembre de 1981.

[11] Antigua y Barbuda es, además, miembro de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) y de la Comunidad y el Mercado Común del Caribe (CARICOM).

[12] La Constitución es la ley suprema de Antigua y Barbuda; y prevalece en todos los casos en que una norma legal sea incompatible con ella. En materia de incompatibilidad, serán nulas aquellas disposiciones de una ley que sean contrarias a la Constitución.

[13] El Gobierno consta de tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sus funciones y operación se realizan según el principio de la separación de poderes, el cual está consagrado en la Constitución del país.

[14] Su Majestad ejerce la autoridad ejecutiva, la cual a su vez radica en el Gobernador General de Antigua y Barbuda, quien desempeña su cargo durante el período discrecional que determine la Reina y funge como su representante en el país. El Gobernador General ejerce sus funciones con asesoramiento del gabinete o de uno de los ministros que actúa según la autoridad general del gabinete, salvo que la Constitución u otras leyes contengan disposiciones en otro sentido que exijan que el Gobernador General actúe conforme a su propia discreción.

[15] Una de las muchas funciones del Gobernador General es designar al Primer Ministro del país como Jefe de Gobierno. El Primer Ministro debe ser miembro de la cámara baja y generalmente es el líder del partido político que posee el apoyo de la mayoría en ella. Entre sus funciones se encuentra la de mantener plenamente informado al Gobernador General del desarrollo de los asuntos gubernamentales o de proporcionarle dicha información cuando este último se la solicite.

[16] En el Parlamento el poder legislativo está compuesto por Su Majestad, por el senado y por la cámara de representantes. El Gobernador General designa a quince senadores para que sesionen en el Senado; diez son nombrados por recomendación del Primer Ministro, cuatro a instancias del líder de la oposición y uno por recomendación del Consejo de Barbuda. Los senadores dejan sus puestos cuando se produce la disolución del Parlamento o en los supuestos previstos en el artículo 31, inciso 1, de la Constitución.

[17] La Cámara de Representantes está compuesta por los legisladores seleccionados por un proceso electoral e incluye a su presidente, quien por ocupar dicho cargo es de por sí miembro de dicha cámara. Asimismo, si el Procurador General (*Attorney General*) no es un legislador electo, será miembro de la Cámara Baja por el hecho de ocupar o actuar en dicho puesto, aunque carecerá de derecho de voto.

[18] Las funciones legislativas del Parlamento lo facultan para elaborar leyes para la paz, el orden y el buen gobierno del país. En general las leyes emanadas del Parlamento se promulgan por mayoría simple de ambas cámaras, salvo que se trate de una norma que procure la modificación de la Constitución o que afecte los derechos constitucionales de los ciudadanos de Antigua y Barbuda, que en ambas instancias debe sancionarse mediante dos tercios de la mayoría y, en el caso de los derechos de los ciudadanos debe promulgarse por vía de referendo con no menos de dos tercios de los votos emitidos.

⁴ Respuesta de Antigua y Barbuda al Cuestionario en el marco de la Cuarta Ronda, pág. 1. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_que_resp_track.pdf

[19] La legislación de Antigua y Barbuda se basa en el *common law* británico. La estructura del poder judicial se rige por el principio de los precedentes (*stare decisi*). Existen en el país seis (6) *Magisterial Courts* (juzgados de primera instancia) en tres (3) distritos judiciales de primera instancia. Se trata de tribunales inferiores y no llevan registros formales de sus actuaciones. Los *Magisterial Courts* tienen la competencia civil y penal que le confiere la ley según el Capítulo 255 del *Magistrates Code of Procedure* (código procesal de tribunales de primera instancia) y sus modificatorias.

[20] La Suprema Corte de Justicia está compuesta por tres Altos Tribunales de Justicia (*High Courts of Justice*) y por el Tribunal de Apelaciones del Caribe Oriental, todos los cuales llevan registros formales de sus actuaciones. Las apelaciones de los Altos Tribunales y de los *Magistrates Courts* se presentan ante el Tribunal de Apelaciones del Caribe Oriental de conformidad con lo previsto en el capítulo 143 de la Ley de la Suprema Corte del Caribe Oriental.

[21] Un único juez superior (*Puisne Judge*) sesiona en el Alto Tribunal y entiende en causas civiles y penales. La Corte Suprema del Caribe Oriental está formada por tres (3) jueces de apelación. Los jueces y magistrados de apelación son designados por la Comisión de Servicios Legales y Judiciales, la cual atiende a las islas de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS).

[22] El Tribunal de Apelaciones de Última Instancia (*Final Court of Appeal*) es el Comité Judicial del Consejo Privado (*Judicial Committee of the Privy Council*) de Su Majestad, situado en Londres, Inglaterra.

[23] De conformidad con el principio de separación de poderes, el poder judicial ejerce sus funciones sin interferencia de los otros poderes del estado.

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN)

1.1. CONFLICTOS DE INTERESES

1.1.1. Existencia de disposiciones en el marco jurídico y/o de otras medidas y de mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

[24] Antigua y Barbuda cuenta con una serie de disposiciones en materia de normas de conducta, entre las que se destacan las mencionadas a continuación.

[25] - Disposiciones constitucionales, tales como las de los artículos 30 a 39, que establecen, respectivamente, las inhabilitaciones para ser designado senador o elegido como miembro de la Cámara de Representantes. Entre las circunstancias de inhabilitación se encuentran las siguientes: ocupar o desempeñarse en un puesto público o de juez de la Suprema Corte u Ombudsman, o ser integrante de la Comisión de Delimitación de Circunscripciones (*Constituencies Boundaries Commission*), de la de Servicios Judiciales y Legales, de la de Servicio Público o de la de Servicio Policial (arts. 30(1)(g) y 39(1)(g)); haber sido condenado, tras una acusación formal, por un tribunal competente por hurto, fraude o cualquier otro delito de conducta deshonesta dentro de un período de diez años inmediatamente anterior a la fecha de su designación como senador o elección como miembro de la Cámara de Representantes y i) no haya apelado dicha condena o ii) la haya apelado pero sin que se le otorgue y iii) no haya obtenido un indulto por el correspondiente delito (arts. 30(1)(h) y 39(1)(h)). Los artículos 30(1)(b) y 39(1)(b) disponen, respectivamente, que una persona quedará inhabilitada para su designación como senador si es miembro de la Cámara Baja y no podrá ser elegida representante si ocupa el puesto de senador o de miembro temporario del Senado.

[26] - Disposiciones legales que se aplican a quienes ocupan cargos públicos,⁵ tales como lo dispuesto en las letras d, e y f del Código de Conducta del Segundo Anexo de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004,⁶ la cual, entre otros elementos, prohíbe que quien ocupa un cargo público: 1) permita conflictos entre los intereses privados y los deberes públicos o influencias indebidas en su conducta en el desempeño de sus obligaciones públicas; 2) permita que la gestión de sus intereses privados interfiera en el desempeño adecuado de sus deberes públicos; todo conflicto entre sus intereses privados y sus obligaciones públicas se resolverá a favor de estas últimas y 3) utilice su influencia oficial para apoyar arreglos o contratos, actuales o propuestos, o cualquier otra materia en la que posea intereses.

[27] El Código de Conducta prohíbe, en su letra i), que durante su mandato la persona que desempeñe un cargo público adquiera o sea socio o accionista, director o gerente de una firma o empresa que tenga o haya tenido contratos con el gobierno o con la entidad pública de la que es o era integrante o empleado, aunque la presente disposición no se aplicará cuando dicha persona declare públicamente dicha sociedad, tenencia accionaria o interés de que se trate.

[28] - Disposiciones regulatorias, como las del Reglamento del Servicio Público (*Civil Service Regulations*) de 1993,⁷ en sus párrafos 42 a 54, que prevé, entre otros elementos, que los trabajos e inversiones privadas no deben entrar en conflicto con los deberes del empleado público. El párrafo 42(1) dispone que un empleado podrá desempeñarse en una junta o comité público únicamente si cuenta con la aprobación previa de la Comisión del Servicio Público. Si se obtiene dicha aprobación, todo honorario correspondiente a tareas realizadas por el empleado en el curso de su horario laboral de la administración pública se entregará al ente de Ingresos Públicos (*Government Revenue*) (párrafo 42(3)).

[29] El párrafo 43 del Reglamento del Servicio Público permite que un funcionario público realice trabajo privado si: a) la tarea no se realiza durante el horario laboral, b) la tarea no implica un descrédito para el funcionario ni para el gobierno ni impide, obstaculiza o afecta en alguna forma sus deberes y c) la tarea no implica que el funcionario público utilice su cargo oficial para obtener un beneficio privado. El párrafo 43(4) exige que todo funcionario, tras su designación y en toda ocasión con posterioridad a ella, comunique a la Comisión del Servicio Público los trabajos que realice en forma privada y, si aquella considera que se configura una contravención reglamentaria, podrá ordenarle que cese la actividad laboral

⁵ Conforme lo prevén sus artículos 2 y 3, la Ley de Integridad en la Función Pública se aplica a todos los servidores públicos, los cuales se detallan en el primer anexo de dicha norma legal y entre los cuales se encuentran los siguientes: “1. Miembro de la Comisión y Secretario de la Comisión; 2. Miembros de la Cámara de Representantes; 3. Miembros del Senado; 4. Presidente del Senado; 5. Presidente de la Cámara de Representantes; 6. Secretarios Parlamentarios; 7. Secretario del Gabinete; 8. Miembros del Consejo de Barbuda; 9. Miembros de la Comisión Electoral; 10. Secretario Financiero y Secretario Financiero Adjunto; 11. Director de Presupuesto y Vicedirector de Presupuesto; 12. Secretarios Permanentes y Prosecretarios Principales; 13. Jefes y Subjefes de Misiones Diplomáticas; 14. Procurador Fiscal; 15. Secretario del Parlamento; 16. Oficial Principal de Establecimientos; 17. Contador General y Contador General Adjunto; 18. Gerentes, Jefes y Subjefes de Departamentos y Divisiones; 19. Comandante y Subcomandante de la Fuerza de Defensa; 20. Comisionado y Subcomisionado de la Fuerza de Policía; 21. Oficiales de Policía a partir del rango de Inspector; 22. Jefe de Inmigración, Subjefe de Inmigración y Oficiales Principales de Inmigración; 23. Superintendente de Prisiones y Oficial Principal; 24. Suboficiales y oficiales técnicos de la Fuerza de Defensa de Antigua y Barbuda; 25. Contralor de Aduanas, Contralor Adjunto de Aduanas y Oficiales Principales de Aduanas; 26. Comisionado de Administración Tributaria, Comisionados Adjuntos, Oficiales Principales de la Administración Tributaria y Auditores de la Administración Tributaria; 27. Oficiales Jurídicos empleados por el gobierno de Antigua y Barbuda; 28. Director del Ministerio Público (Director of Public Prosecutions); 29. Jueces de primera instancia (Magistrates); 30. Comisionado de Asuntos Laborales y Comisionado Adjunto de Asuntos Laborales; 31. Oficiales Técnicos en Jefe de los Ministerios; 32. Miembros de la Comisión del Servicio Público; 33. Miembros de la Comisión de Servicios Policiacos; 34. Miembros de la Junta de Apelaciones del Servicio Público; 35. Presidente, Vicepresidente y Secretario de las Juntas u órganos rectores de los órganos reglamentarios; 36. Ejecutivos principales y ejecutivos principales adjuntos (o como se los denomine) de los órganos reglamentarios; 37. Jefes y Subjefes de División de los órganos reglamentarios; 38. Miembros de la Junta de Licitaciones; 39. Oficiales de Cumplimiento de Normas Tributarias; 40. Director de Auditoría y Subdirector de Auditoría; 41. Miembros de la Junta de Apelación Tributaria; 42. Oficiales de Evaluación de Bienes y 43. Inspectores Principales de Casinos”.

⁶ Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ant_int_pub_lif_act_04.pdf

⁷ Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ant_Civil_Service_Regulations_of_1993.pdf

privada o imponerle las condiciones necesarias para garantizar que no dicho trabajo no constituya una contravención al reglamento.

[30] El párrafo 44 del Reglamento del Servicio Público de 1993 prevé que si la Comisión del Servicio Público determina que la inversión privada de un funcionario interfiere o entra en conflicto con sus deberes públicos podrá ordenarle que se deshaga de la misma.

[31] Antigua y Barbuda cuenta con mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de las mencionadas normas de conducta, entre los que pueden señalarse los consignados a continuación.

[32] – La Ley de Prevención de la Corrupción de 2004,⁸ que en su artículo 3, incisos 1(e) y (f) dispone que constituirá un delito permitir que los intereses privados de la persona entren en conflicto con sus obligaciones públicas o influyan indebidamente en su conducta durante el desempeño de sus funciones de empleado público (art. 3(1)(3)); o utilice indebidamente para beneficio propio o de terceros información clasificada o confidencial obtenida en el curso de la función pública (art. 3(1)(f)).

[33] Según el artículo 8(1) de la Ley de Prevención de la Corrupción, quien cometa los mencionados delitos será pasible, tras su condena por acusación formal, de una multa no superior a los cien mil dólares del Caribe oriental⁹ y de una pena de prisión por un plazo que no supere los cinco años o, además de la sanción indicada precedentemente, el tribunal podrá realizar uno cualquiera o todos los actos consignados a continuación: i) ordenar al condenado que pague a la entidad pública, en la forma especificada por el tribunal, la suma o valor del bien, beneficio o ventaja que hubiera recibido; ii) abandonar su derecho a reclamar toda pensión o gratificación no contributiva a la que habría tenido derecho; iii) declarar extinguido todo derecho de que sea titular en un sistema de pensión no contributiva y iv) declararlo inhábil para ocupar un cargo público durante un período no superior a los siete años a partir de la fecha de la condena por el delito de que se trate.

[34] – El artículo 21 de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 dispone que todo funcionario público respetará el Código de Conducta contenido en el segundo anexo de la ley y que el funcionario público que lo vulnere cometerá un delito pasible, tras condena sumaria, de una multa no superior a los cincuenta mil dólares del Caribe oriental¹⁰ o a un plazo de prisión no superior a los tres años o a ambas sanciones (multa y prisión).

[35] En este sentido la Comisión de Integridad,¹¹ constituida en virtud del artículo 4(1) de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 cuenta, entre otras atribuciones, con la facultad de recibir denuncias e investigar incumplimientos del mencionado Código de Conducta, además de realizar investigaciones de delitos tipificados en la Ley de Prevención de la Corrupción de 2004 (artículos 12(1)(b), (d) y (e) y 22, 23, 24 y 25 Ley de Integridad en la Función Pública de 2004).

[36] – La Comisión del Servicio Público,¹² establecida en virtud del artículo 99(1) de la Constitución cuenta, entre otras atribuciones, con la facultad de ejercer el control disciplinario de las personas que ocupen o desempeñen cargos públicos, además de poder destituirlos (artículo 100(1) de la Constitución).

1.1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas y de los mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

⁸ Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ant_prev_corr_act.pdf

⁹ 1 dólar estadounidense = aproximadamente 2,7 dólares del Caribe oriental (al 17 de octubre de 2014).

¹⁰ 1 dólar estadounidense = aproximadamente 2,7 dólares del Caribe oriental (al 17 de octubre de 2014).

¹¹ Este órgano de control superior se analizará en más detalle en el Capítulo II (B) del presente informe.

¹² Este órgano de control superior se analizará en más detalle en el Capítulo II (B) del presente informe.

[37] Las disposiciones constitucionales, legales y regulatorias en materia de normas de conducta dirigidas a la prevención de conflictos de intereses y de los mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento examinadas por el Comité con la información que tuvo a su disposición constituyen en su conjunto un grupo de medidas pertinentes para la promoción de los fines de la Convención.

[38] No obstante, el Comité considera apropiado formular determinadas observaciones sobre la conveniencia de elaborar, fortalecer y perfeccionar ciertas disposiciones relativas a las mencionadas normas y mecanismos.

[39] En primer lugar, conforme se señaló en la sección precedente, el código de conducta de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 prohíbe que durante su mandato la persona que desempeñe un cargo público adquiera o sea socio o accionista, director o gerente de una firma o empresa que tenga o haya tenido contratos con el gobierno o con la entidad pública de la que es o era integrante o empleado. No obstante, esa disposición no se aplica cuando dicha persona declare públicamente dicha sociedad, tenencia accionaria o interés de que se trate.

[40] No existen al respecto normas ni pautas vigentes que definan lo que se considera una “declaración pública”. ¿Se trata únicamente de una divulgación ante la Comisión de Integridad o al público en general? Además, el Comité opina que una declaración pública por sí sola no sería suficiente para evitar los posibles conflictos de intereses en estas situaciones, y que debiese existir un registro de declarantes, así como que en el formulario de la declaración pública se deje expresa constancia de porcentaje de participación societaria que se tiene.

[41] Asimismo, el Comité es de la opinión de que los reglamentos serían útiles para brindarle a la Comisión de Integridad pautas relativas a los mecanismos para determinar, en casos reales, si un funcionario público tiene algún conflicto de intereses y, de ser el caso, tomar a la brevedad las medidas necesarias para proteger el interés público y hacer cumplir las sanciones prescritas, como la separación del cargo, el retiro de su participación oficial en el asunto, la entrega de los intereses privados en conflicto o la nulidad de las decisiones tomadas por la persona que ocupaba el puesto en cuestión.

[42] En vista de lo anterior el Comité formulará una recomendación (véase la recomendación “a” en la sección 1.1.4 del capítulo II “A” del presente informe).¹³

[43] En segundo lugar el Comité observa, por ejemplo, que con excepción de las normas previstas en la Constitución y en el Código de Conducta de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 no existen normas más específicas y detalladas para evitar conflictos de intereses que sean de aplicación a los altos funcionarios gubernamentales.

[44] En este sentido, y dado que las normas y mecanismos de prevención de conflictos de interés son importantes para la consolidación de la confianza de los ciudadanos y de la integridad de las instituciones oficiales y del proceso de toma de decisiones públicas, en especial en su niveles más altos, el Comité estima que sería beneficioso que Antigua y Barbuda considerara la posibilidad de establecer normas específicas sobre conflictos de intereses que sean más estrictas para los funcionarios públicos que se desempeñan en ciertas áreas de la administración estatal en las cuales dichos conflictos podrían resultar más lesivos para el estado y afectar la percepción de la ciudadanía en materia de integridad pública. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase recomendación “b” en la sección 1.1.4 del capítulo II “A” del presente informe).

¹³ El país analizado expresó su solicitud de asistencia de la OEA y de otros Estados Parte del MESICIC para cumplir con esta recomendación.

[45] En tercer lugar el Comité observa que, tras el período de servicio público, no existen normas expresas para evitar conflictos de intereses que resulten aplicables a todos los empleados públicos en general,¹⁴ como sería el caso de una disposición que prohibiera la participación de ex funcionarios públicos en entidades con las cuales se encontraban asociados recientemente o en las que hubieran realizado algún tipo de intervención en virtud de su competencia. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase recomendación “c” en la sección 1.1.4 del capítulo II “A” del presente informe).¹⁵

[46] En cuarto lugar, el Comité nota asimismo la ausencia de mecanismos preventivos aplicables a todos los servidores públicos que permitan la detección de conflictos de interés previamente al ejercicio de la función pública y, de corresponder, la adopción de las medidas correctivas apropiadas. Lo anterior destaca la importancia de la creación o fortalecimiento de dichos mecanismos a efectos de facilitar que los órganos correspondientes, como las Comisiones de Servicios, realicen sus funciones preventivas y se aseguren de que no se efectúen nombramientos violatorios de la normativa vigente en materia de inhabilitación e incompatibilidad con la función pública. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase recomendación “d” en la sección 1.1.4 del capítulo II “A” del presente informe).

[47] En quinto lugar, el Comité observa que no existen disposiciones para que mecanismos adecuados promuevan o proporcionen asesoría y orientación en materia de ética, probidad y transparencia; difundan el Código de Conducta vigente y respondan las consultas de los servidores públicos sobre posibles conflictos de intereses ni tomen medidas para remediar las situaciones que se detecten relativas a tales conflictos. El Comité señala que ello podría lograrse, por ejemplo, mediante la implementación de un sistema de excusaciones y recusaciones. El Comité formulará una recomendación al respecto (véanse las recomendaciones “e” y “f” en la sección 1.1.4 del capítulo II “A” del presente informe).¹⁶

[48] Por último, el Comité estima que resulta importante que se organicen habitualmente programas para difundir las normas de conducta entre los empleados públicos, además de brindarles capacitación relativa a ellas, incluida la normativa aplicable a los conflictos de intereses, así como programas de entrenamiento y actualización sobre dichas normas. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación general “a” en el capítulo II “A” del presente informe).

1.1.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas y de los mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

[49] Antigua y Barbuda manifiesta que los resultados no se encuentran disponibles.¹⁷ Teniendo en cuenta que el Comité carece de información adicional que pueda permitirle realizar una evaluación integral de los resultados de las normas y mecanismos indicados precedentemente, efectuará recomendaciones al respecto (véanse las recomendaciones generales “b” y “c” en el capítulo II “A” de presente informe).

1.1.4. Conclusiones y recomendaciones

¹⁴ El artículo 1 of de la Convención Interamericana contra la Corrupción prevé que se entenderá por “*Funcionario público*”, “*Oficial Gubernamental*” o “*Servidor público*”, cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos.

¹⁵ El país analizado expresó su solicitud de asistencia de la OEA y de otros Estados Parte del MESICIC para cumplir con esta recomendación.

¹⁶ Al respecto, Antigua y Barbuda informó que se está estableciendo la Oficina Anticorrupción, que realizará, junto con la Comisión de Integridad, actividades de investigación, difusión, implementación y sensibilización de funcionarios y jerarcas públicos en relación con conflictos de intereses, y para asesorarlos sobre la manera de prevenir potenciales conflictos de intereses.

¹⁷ Respuesta de Antigua y Barbuda al Cuestionario en el marco de la Cuarta Ronda, pág. 14.

[50] **Antigua y Barbuda ha considerado y adoptado medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento, de acuerdo con lo expresado en la sección 1.1 del Capítulo II (A) de este informe.**

[51] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que Antigua y Barbuda considere las siguientes recomendaciones.

- a) Reglamentar la Ley de Integridad en el Función Pública de 2004 y la Ley de Prevención de la Corrupción de 2004 a fin de crear e implementar mecanismos y pautas para determinar, en casos concretos, si quien desempeña la función pública se encuentra en una situación de conflicto de intereses y, al mismo tiempo, adoptar las medidas necesarias para proteger el interés público, tales como la separación de la persona de su cargo público, el retiro de su participación oficial en el asunto, la renuncia a los intereses privados objeto del conflicto o la anulación de las decisiones adoptadas por la persona en dicho cargo (véase el punto 1.1.2 del capítulo II “A” del presente informe).
- b) Establecer normativas más específicas y estrictas en materia de conflictos de intereses en el caso de servidores públicos que, dado que se desempeñan en determinadas áreas de la administración gubernamental, resultarían más lesivas para el estado y, por razón de su conducta antiética, afectarían la percepción que tiene la ciudadanía respecto de los funcionarios públicos de Antigua y Barbuda (véase el punto 1.1.2 del capítulo II “A” del presente informe).
- c) Establecer restricciones adecuadas para quienes se retiran del servicio público, tales como la prohibición de que intervenga como representante de un interés privado en asuntos en los que haya gestionado durante el desempeño de sus funciones oficiales, o restricciones para tratar con el órgano gubernamental en el que se desempeñó, durante un período razonable (véase el punto 1.1.2 del capítulo II “A” del presente informe).
- d) Crear o fortalecer mecanismos que aseguren que no se realice nombramiento alguno que vulnere las normas vigentes en materia de inhabilitaciones e incompatibilidades en el servicio público (véase el punto 1.1.2 del capítulo II “A” del presente informe).
- e) Elaborar e implementar mecanismos que permitan que la Comisión de Integridad u otra entidad correspondiente promuevan la capacitación y orientación en materia de ética, además de difundir el código de conducta vigente, responder las consultas de los funcionarios públicos relativas a posibles instancias de conflictos de intereses (véase el punto 1.1.2 del capítulo II “A” del presente informe).
- f) Establecer un sistema de excusaciones y recusaciones para remediar expeditivamente toda situación en la que se detecte la existencia de un conflicto de intereses potencial (véase el punto 1.1.2 del capítulo II “A” del presente informe).

1.2. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA ASEGURAR LA PRESERVACIÓN Y EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

1.2.1. Existencia de disposiciones en el marco jurídico y/o de otras medidas y de mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

[52] Antigua y Barbuda cuenta con un conjunto de disposiciones relativas a las normas de conducta referidas, entre las que cabe destacar las siguientes.

[53] –Disposiciones constitucionales, como las del artículo 90, que prevén que todos los ingresos y fondos recaudados o recibidos por Antigua y Barbuda serán depositados en un Fondo Consolidado. En este sentido el artículo 91 dispone que no podrán efectuarse retiros de dicho fondo salvo en la forma autorizada por las normas legales o constitucionales y de conformidad con una ley de asignaciones o una ley sancionada de acuerdo con el artículo 93 de la Constitución. Asimismo, el artículo 92 establece que el ministro que en el momento sea responsable de las finanzas encargará la elaboración y presentación ante la Cámara de Representantes antes del inicio de cada ejercicio financiero, o a más tardar noventa días después de dicho inicio, de estimados de los ingresos y gastos de Antigua y Barbuda correspondientes a dicho ejercicio y, tras su aprobación por la mencionada cámara, se le presentará a ésta un proyecto de ley de asignaciones que dispondrá que se tomen del Fondo Consolidado las sumas correspondientes a los fines especificados en ella.

[54] – Disposiciones legales, como las del artículo 8(1) de la Ley de Administración Financiera de 2006, que indica que un oficial contable¹⁸ en el desempeño de su función pública y como funcionario público con obligación rendición de cuentas ante la Cámara, mediante el Comité de Cuentas Públicas, será responsable, entre otros actos, del control y contabilización precisa de fondos públicos, salvo los destinados a fines públicos, que reciba el ministerio, departamento o servicio en el que desempeñe su cargo, así como el control y contabilización precisa del desembolso de fondos públicos, salvo los destinados a fines públicos, que reciba el ministerio, departamento o servicio en el que desempeñe su cargo, de conformidad con la presente ley y normas reglamentarias, con toda otra ley y normas reglamentarias y con las instrucciones del Tesoro.

[55] El artículo 8(5) de la Ley de Administración Financiera de 2006 dispone que el oficial contable debe rendir cuentas del desempeño de las responsabilidades que le imponen la ley, las normas reglamentarias y las instrucciones del Tesoro, así como toda otra ley o normativa relativas a la administración financiera, debiendo actuar con diligencia y honestidad y con sujeción a las sanciones disciplinarias dispuestas en la legislación aplicable en el caso de no hacerlo.

[56] El artículo 10(1) de la Ley de Administración Financiera de 2006 dispone asimismo que “*todo funcionario público, distinto de un oficial contable o del funcionario público a que se refiere el artículo 9 de la ley, que en el desempeño de sus responsabilidades obtenga la posesión o el control de (a) dineros públicos que sabe o tiene motivos para creer que deben ser percibidos o recibidos por el estado o (b) sellos o títulos valores de propiedad estatal que deben entregarse o quedar en manos del estado, sin demora alguna deberá entregar dichos dineros, sellos o títulos valores al oficial contable encargado o responsable de aquéllos, o al delegado de éste, o al Contador General*”.

[57] De conformidad con el artículo 10(2) el funcionario público, oficial contable o delegado de este último a que se refiere el inciso 1 debe rendir cuentas del desempeño de las responsabilidades indicadas en dicho inciso, realizándolas con diligencia y honestidad; en el caso de no hacerlo será objeto de las sanciones disciplinarias dispuestas en la legislación aplicable.

[58] –Disposiciones legales, como las del párrafo h) del código de conducta del segundo anexo de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 que prohíbe que quien desempeñe un cargo público

¹⁸ El artículo 21 de la Ley de Administración Financiera de 2006 define “oficial contable” en los siguientes términos: “*se trata de un funcionario público designado para desempeñarse como oficial contable en virtud del artículo 8(1), e incluirá al oficial contable interino*”.

utilice o permita el uso de bienes (incluido el dinero), equipamiento, insumos o servicios de índole pública para fines distintos de los aprobados oficialmente.

[59] Antigua y Barbuda cuenta asimismo con mecanismos para el efectivo cumplimiento de las mencionadas normas, entre los que cabe destacar los siguientes.

[60] – El artículo 97 de la Constitución que prevé el cargo de Director de Auditoría ¹⁹ El cual deberá indicar su satisfacción de que los fondos que fueron asignados por el Parlamento y desembolsados se aplicaron a los fines destinados y que las erogaciones se ajustan a la autoridad que las rige. Al menos una vez por año el director tiene la obligación de auditar y presentar informes relativos a las cuentas de todos los funcionarios y autoridades gubernamentales, de las de los tribunales del país (incluidas las cuentas de la Suprema Corte llevadas en Antigua y Barbuda), las de todas las comisiones establecidas por la Constitución y las del Secretario (*Clerk*) de la Cámara de Representantes y del Secretario del Senado, además de presentar los informes de las mencionadas auditorías al ministro que en ese momento sea responsable de las finanzas el cual, tras recibir dicho informe, lo presentará ante la Cámara dentro de un plazo de siete días del inicio de la siguiente reunión de la misma.

[61] Además, el artículo 98 de la Constitución dispone el nombramiento de un Comité de Cuentas Públicas que, entre otras obligaciones, debe informar al Parlamento todo gasto excesivo o no autorizado de fondos públicos, así como los motivos de dicho gasto y las medidas que considere necesarias para asegurar la erogación adecuada del mismo.

[62] –La Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 dispone en su artículo 21 que todo servidor público debe respetar el Código de Conducta previsto en el segundo anexo de la ley y que, si lo incumpliera, estaría cometiendo un ilícito condenable sumariamente que lo hace pasible de una multa no superior a los cincuenta mil dólares del Caribe oriental ²⁰ o de un período en prisión no superior a los tres años, o ambas sanciones (multa y prisión).

[63] En este sentido la Comisión de Integridad,²¹ establecida en virtud del artículo 4(1) de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004, cuenta, entre otras atribuciones, con la facultad de recibir denuncias e investigar incumplimientos del mencionado código de conducta.

1.2.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas y de los mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

[64] Las disposiciones examinadas por el Comité en base a la información que tuvo a su disposición y previstas en la Constitución y en la legislación, relativas a las normas y mecanismos para el aseguramiento de la preservación y el uso adecuado de los recursos públicos, constituyen, en su conjunto, un grupo de medidas pertinentes para la promoción de los fines de la Convención.

[65] No obstante lo anterior, el Comité estima pertinente reiterar las consideraciones expresadas en la sección 1.1.2 del literal “A” del capítulo II de este informe, en cuanto a la conveniencia de que el Estado analizado considere diseñar e implementar campañas de difusión dirigidas a la totalidad de los servidores públicos sobre la existencia, naturaleza y alcance, en este caso particular, de las disposiciones contenidas en el Código de Conducta referido anteriormente, en cuanto a la obligación que tienen de asegurar tanto la preservación como el uso adecuado de los recursos que se les asignan en el desempeño de sus funciones (véase la recomendación general “a” en el capítulo II “A” del presente informe).

¹⁹ Este órgano de control superior se analizará en mayor detalle en el Capítulo II (b) del presente informe. Véase también: Ley de la Oficina del Director de Auditorías de 2014

²⁰ 1 dólar estadounidense = aproximadamente 2,7 dólares del Caribe oriental (al 17 de octubre de 2014).

²¹ Este órgano de control superior se analizará en más detalle en el Capítulo II (B) del presente informe.

1.2.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas y de los mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

[66] Antigua y Barbuda manifiesta que los resultados no se encuentran disponibles.²² Teniendo en cuenta que el Comité carece de información adicional que pueda permitirle realizar una evaluación integral de los resultados de las normas y mecanismos indicados precedentemente, efectuará sus recomendaciones al respecto (véanse las recomendaciones generales “b” y “c” en el capítulo II “A” de presente informe).

1.2.4. Conclusiones y recomendaciones

[67] **Antigua y Barbuda ha considerado y adoptado medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer normas de conducta orientadas a asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, de acuerdo con lo expresado en la sección 1.2 del Capítulo II “A” de este informe.**

[68] No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que el marco jurídico y resultados relativos a la Oficina del Director de Auditorías se examinarán en forma integral en el Capítulo II “B” del presente informe, el Comité efectuará las observaciones pertinentes y las recomendaciones específicas sobre dicha oficina en la sección correspondiente.

1.3. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS RELATIVOS A MEDIDAS Y SISTEMAS QUE EXIJAN A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS INFORMAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES SOBRE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LOS QUE TENGAN CONOCIMIENTO

1.3.1. Existencia de disposiciones en el marco jurídico y/o de otras medidas y de mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

[69] Antigua y Barbuda cuenta con un conjunto de disposiciones relativas a las mencionadas normas de conducta y mecanismos, entre las que cabe destacar las siguientes.

[70] – La Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 dispone en su artículo 22(1) que quien tenga fundamentos razonables para creer que un funcionario público se encuentra en una situación de incumplimiento del Código de Conducta podrá presentar una denuncia por escrito a la Comisión en la que dejará constancia de los detalles de dicho incumplimiento, incluidos los siguientes a) el período en el cual se cometió el incumplimiento y b) los nombres y domicilios de las personas que lo cometieron.

[71] En este sentido el artículo 22(2) de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 exige que la persona que efectúe la denuncia según el inciso (1) deberá presentarle a la Comisión: a) elementos de prueba que justifiquen la denuncia, incluida prueba documental y declaraciones juradas y b) todo otro particular prescrito por la normativa.

[72] Asimismo, de conformidad con el artículo 22 (3) de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 el denunciante en virtud del presente inciso no será pasible de acciones civiles ni penales siempre que pruebe que efectuó la denuncia de buena fe.

[73] –La Ley de Libertad de la Información de 2004 dispone en su artículo 47(1) que una persona podrá divulgar al Comisionado de Información o a cualquier otra autoridad información relativa al ilícito

²² Respuesta de Antigua y Barbuda al Cuestionario en el marco de la Cuarta Ronda, pág. 17.

cometido por una autoridad pública relativo, entre otros, a los siguientes actos: “(...) b) comisión de un delito penal; c) falta de cumplimiento de una obligación legal; d) error judicial; e) corrupción, actuación deshonesto o mala administración grave; f) abuso de autoridad o abandono del desempeño de deberes oficiales; (...) h) uso no autorizado de fondos públicos; dicha persona no será pasible de acciones judiciales ni de sanciones laborales si la información se divulgó de buena fe y con la convicción razonable de que era veraz”.

[74] Asimismo, el artículo 47(2) de la Ley de Libertad de la Información de 2004 dispone que la persona que de conformidad con el inciso (1) divulgue información en forma maliciosa o sin contar con una convicción razonable de su veracidad cometerá un delito y, tras condena por proceso sumario, será pasible de una multa no superior a los cincuenta mil dólares del Caribe oriental ²³ o a un plazo de prisión no superior a los dos años o a ambas sanciones (multa y prisión)

1.3.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas y de los mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

[75] Las normas y mecanismos en relación con las medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública que ha examinado el Comité, con base en la información que ha tenido a su disposición, son pertinentes para la promoción de los fines de la Convención.

[76] Sin embargo, el Comité estima adecuado formular ciertas observaciones sobre la conveniencia de complementar y elaborar determinadas disposiciones legales referidas a las normas y mecanismos mencionados precedentemente.

[77] En primer lugar, el Comité observa que no existe una obligación expresa que le exija a los funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación “a” en la sección 1.3.4 del capítulo II “A” del presente informe).

[78] En segundo lugar, y en aras promover la efectividad del régimen relativo a dicha obligación, el Comité considera conveniente que el mismo podría verse fortalecido a través de la inclusión de medidas que faciliten su cumplimiento mediante el empleo de formatos y de medios informáticos y de comunicación que sirvan para alentar a los servidores públicos a formular tales denuncias, así como la adopción de aquellas que ofrezcan garantías a los denunciantes frente a las amenazas, retaliaciones o represalias de las que puedan ser objeto como consecuencia del cumplimiento de este deber. Al respecto, el Comité formulará recomendaciones (véanse las recomendaciones generales “b” y “c” en la sección 1.3.4 del capítulo II “A” de presente informe).

[79] Finalmente, el Comité estima pertinente reiterar las consideraciones expresadas en las secciones 1.1.2 y 1.2.2 del literal “A” del capítulo II de este informe, en cuanto a la conveniencia de que el Estado analizado considere diseñar e implementar campañas de difusión y capacitación dirigidas a la totalidad de los servidores públicos sobre la existencia, naturaleza y alcance, en este caso particular, de las disposiciones contenidas en la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 y la Ley de Libertad de Información de 2004, en cuanto a los mecanismos existentes para que los funcionarios públicos puedan informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción de los que tengan conocimiento (véase la recomendación general “a” en el capítulo II “A” del presente informe).

²³ 1 dólar estadounidense = aproximadamente 2,7 dólares del Caribe oriental (al 17 de octubre de 2014).

1.3.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas y de los mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

[80] Antigua y Barbuda manifiesta que los resultados no se hallan disponibles.²⁴ Teniendo en cuenta que el Comité carece de información adicional que pueda permitirle realizar una evaluación integral de los resultados de las normas y mecanismos indicados precedentemente, efectuará sus recomendaciones al respecto (véanse las recomendaciones generales “b” y “c” en el capítulo II “A” de presente informe)

1.3.4. Conclusiones y recomendaciones

[81] **Antigua y Barbuda ha considerado y adoptado medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer normas de conducta y mecanismos correspondientes a medidas y sistemas que exigen que los funcionarios públicos informen a las autoridades competentes sobre actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento, de acuerdo con lo expresado en la sección 1.3 del Capítulo II “A” de este informe.**

[82] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que Antigua y Barbuda considere las siguientes recomendaciones.

- a) Establecer una obligación expresa que exija a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento (véase la sección 1.3.2. del Capítulo II “A” del presente informe).
- b) Adoptar las medidas necesarias tendientes a facilitar el cumplimiento de la obligación de denunciar mediante el empleo de formatos y de medios informáticos y de comunicación que sirvan para alentar a los servidores públicos a formular tales denuncias y que ayuden a simplificar su presentación (véase la sección 1.3.2 del Capítulo II “A” del presente informe).
- c) Adoptar las medidas necesarias que ofrezcan garantías a los funcionarios públicos que denuncien actos de corrupción frente a las amenazas, retaliaciones o represalias de las que puedan ser objeto como consecuencia del cumplimiento de este deber (véase la sección 1.3.2 del Capítulo II “A” del presente informe).

2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN)

2.1. Existencia de disposiciones en el marco jurídico y/o de otras medidas y de mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

[83] Antigua y Barbuda cuenta con un conjunto de disposiciones relativas a los mencionados sistemas, entre las que cabe destacar las siguientes.

[84] - Disposiciones legales aplicables a los funcionarios públicos,²⁵ tales como las previstas en el artículo 16(1) de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004, que exige que toda persona que ocupe un cargo público presente a la Comisión de Integridad una declaración que revista las formalidades indicadas en el tercer anexo, en la que consten a) sus ingresos, activos y pasivos;²⁶ b) sus puestos públicos y privados, c) los activos de sus hijos mayores de 18 años y de familiares, cuando hubieran sido

²⁴ Respuesta de Antigua y Barbuda al Cuestionario en el marco de la Cuarta Ronda, pág. 19.

²⁵ Véase nota al pie número 5.

²⁶ De conformidad con el artículo 19 de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 los ingresos, activos y pasivos de un servidor público incluyen los adquiridos, poseídos o incurridos por terceros en calidad de mandatarios o representantes de aquél.

adquiridos en forma total o parcial con sus ingresos, d) los activos de su cónyuge y de sus hijos menores de 18 años, e) todo obsequio recibido durante el desempeño de sus funciones públicas, así como toda otra información que deba presentarse conforme lo indicado en el formulario 2 del tercer anexo de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004.

[85] El artículo 16(2) de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 le encarga a la Comisión de Integridad la tarea de examinar las declaraciones presentadas a efectos de asegurar que cumplan con las disposiciones de dicha ley. Si, tras el mencionado examen, la Comisión opina que resulta necesario u oportuno solicitar más información a fin de determinar su precisión, podrá pedirle al servidor público que, dentro de un plazo determinado, presente los demás documentos e información que se exijan.²⁷ Si después del examen de la declaración la Comisión de Integridad queda satisfecha con la información presentada expedirá el certificado indicado en el formulario 3 del anexo tres de la mencionada ley.²⁸

[86] Según el artículo 17, incisos 1 y 2 de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004, los funcionarios públicos deben presentar su declaración dentro de los tres meses a partir de la fecha de inicio de las funciones y, posteriormente, el 31 de marzo de cada año o con anterioridad a esta fecha. Asimismo, y según el artículo 17(3) de la mencionada ley, una vez producido el cese de su función pública el servidor público deberá presentar una declaración al término de un período de seis meses a partir de la fecha en que cese sus funciones.

[87] El artículo 18 de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 regula los requisitos para la divulgación de bienes en fideicomiso y de fideicomisos ciegos en las declaraciones. El artículo 18(1) dispone que cuando un funcionario público tenga bienes en fideicomiso en nombre de un tercero deberá indicarlo en su declaración, aunque no estará obligado a divulgar los términos del fideicomiso. Por otra parte, el artículo 18(2) prevé que el funcionario público que posea activos en un fideicomiso ciego deberá presentarle a la Comisión de Integridad una copia de la escritura de fideicomiso.

[88] Las declaraciones que se presenten revestirán el carácter de secretas y confidenciales y no se harán públicas salvo mediante una orden judicial en relación con procesos judiciales en virtud de la Ley de Integridad en la Función Pública, de la Ley de Prevención de la Corrupción o de la Ley de Perjurio.²⁹

[89] El Director del Ministerio Público (*Director of Public Prosecutions*) podrá solicitar a instancia de parte al juez de medidas provisionales (*judge in chambers*) que dicte una orden por la cual le indique al presidente de la Comisión de Integridad que libere documentos para que sean examinados por dicho director cuando tenga motivos suficientes para creer que se ha cometido uno de los delitos tipificados en la Ley de Prevención de la Corrupción de 2004.³⁰

[90] La Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 prevé sanciones para quienes incumplan sus disposiciones relativas a las declaraciones de ingresos, activos y pasivos. De conformidad con el artículo 20(3) de dicha ley, la persona que, sin causa razonable, no presente una declaración a la Comisión de Integridad cometerá un delito pasible, tras condena sumaria, de una multa no superior a los cien mil dólares del Caribe oriental³¹ o a un plazo de prisión no superior a los doce meses.

[91] Asimismo, el artículo 20(1) dispone que si la persona que tiene la obligación de presentar la declaración no lo hiciera, la Comisión de Integridad publicará ese hecho en la Gaceta (*Gazette*) y enviará un informe a fin de que se tomen las medidas correspondientes a) al Gobernador General, en el caso del

²⁷ Art. 16(3) de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004.

²⁸ Art. 16(4) de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004.

²⁹ Art. 14 de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004.

³⁰ Art. 15 de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004.

³¹ 1 dólar estadounidense = aproximadamente 2,7 dólares del Caribe oriental (al 17 de octubre de 2014).

Presidente del Senado y del de la Cámara de Representantes; b) al Presidente del Senado, en el caso de un senador; c) al Presidente de la Cámara de Representantes, en el caso de un miembro de dicha Cámara; d) a la comisión correspondiente, en el caso de una persona designada por una Comisión de Servicio o e) a la persona o autoridad facultadas para realizar el nombramiento del cargo, en el caso de una persona que, por nombramiento, desempeñe su cargo en un órgano reglamentario.

[92] Por último, el artículo 32(1) de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 dispone que toda persona que a), sin motivos razonables no presente a la Comisión de Integridad la declaración o los detalles ulteriores sobre la misma que debe presentar de conformidad con dicha ley o b) efectúe intencionalmente una declaración que contenga algún detalle sustancial falso cometerá un delito y, tras una condena por proceso sumario, será pasible de una multa no superior a los cincuenta mil dólares del Caribe oriental³² o de una pena de prisión durante un período no superior a los tres años, o de ambas sanciones (multa y prisión).

2.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[93] Las normas en materia de sistemas de declaración de ingresos, activos y pasivos examinadas por el Comité con la información que tuvo a su disposición son pertinentes para la promoción de los fines de la Convención.

[94] Sin embargo, el Comité estima adecuado formular ciertas observaciones sobre la conveniencia de complementar y elaborar determinadas disposiciones legales referidas a las normas y mecanismos mencionados precedentemente.

[95] En primer lugar el Comité considera que los artículos 14 y 15 de la Ley de Integridad Pública de 2004 disponen que la declaración de ingresos, activos y pasivos sea secreta y confidencial, además de prohibir su divulgación no autorizada.

[96] Dado que la Convención hace referencia expresa a los sistemas para hacer públicas dichas declaraciones “cuando corresponda”, el Comité estima que Antigua y Barbuda, de conformidad con los principios fundamentales de su sistema jurídico, debería considerar la modificación de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 a efectos de regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos pertinentes en materia de publicidad de las mencionadas declaraciones (véase a recomendación “a” de la sección 2.4 del presente informe).

[97] En segundo lugar, durante la visita *in situ* los representantes de la Comisión de Integridad informaron que las declaraciones de ingresos, activos y pasivos se presentan en forma impresa. A fin de facilitar su presentación y la labor de examinación de su contenido realizada por la Comisión de Integridad, el Comité estima que Antigua y Barbuda debería considerar la puesta a disposición de medios electrónicos para la elaboración de la declaración y para su presentación a la mencionada comisión. El Comité elaborará una recomendación al respecto (véase la recomendación “b” de la sección 2.4 del presente informe).

[98] En tercer lugar la Ley de Integridad en la Función Pública no contiene disposición explícita alguna que exija que los órganos y entidades correspondientes le proporcionen a la Comisión de Integridad una lista actualizada de quienes son considerados “servidores públicos” según el primer anexo de la mencionada ley. Asimismo, Antigua y Barbuda podría considerar la fijación de sanciones para aquellos que, mediando solicitud de la Comisión de Integridad de presentación de dicha lista, incumplan o

³² 1 dólar estadounidense = aproximadamente 2,7 dólares del Caribe oriental (al 17 de octubre de 2014).

se demoren en el cumplimiento de tal obligación. El Comité elaborará una recomendación al respecto (véase la recomendaciones “c” y “d” de la sección 2.4 del Capítulo II “A” del presente informe).

[99] En cuarto lugar el Comité observa que la única sanción prevista en la ley para quienes incumplan la obligación de presentar su declaración de activos o que la presenten con información falsa en algún detalle relevante es de carácter penal. El Comité estima que es importante que Antigua y Barbuda considere la imposición de sanciones administrativas para quienes incumplan la obligación de declarar sus ingresos, activos y pasivos; o consignen información incompleta, inexacta o falsa; así como para quienes no presenten a la Comisión de Integridad la información adicional dentro del plazo determinado cuando así se les solicite; dichas sanciones podrían incluir retenciones salariales y, en el caso de personas que ya hayan dejado el servicio público, multas e inhabilitaciones para ocupar cargos públicos hasta que se presente la declaración definitiva de activos (véase la recomendación “e” de la sección 2.4 del Capítulo II “A” del presente informe).

[100] En quinto lugar, y de conformidad con lo dispuesto por la “Ley Modelo de la OEA sobre Declaración de Intereses, Ingresos Activos y Pasivos de Quienes Desempeñan Funciones Públicas”,³³ el Comité estima que resulta importante que, en forma anual, Antigua y Barbuda considere el establecimiento de criterios para la selección, dentro del universo de obligados, de declaraciones de ingresos, activos y pasivos que sean verificadas y examinadas a los efectos consignados en la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004. El Comité estima asimismo que dichos criterios deben ser objetivos y que deben guiarse por normas de imparcialidad, así como que todo cambio debe explicarse en el informe anual dispuesto en el artículo 29(1) de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 (véase la recomendación “f” de la sección 2.4 del Capítulo II “A” del presente informe).

[101] El Comité estima que Antigua y Barbuda podría considerar solicitar que el declarante proporcione aún más información para cubrir ciertos asuntos adicionales en materia informativa que podrían resultar de utilidad para la prevención de conflictos de intereses, tales como los previstos en la “Ley Modelo de la OEA sobre Declaración de Intereses, Ingresos Activos y Pasivos de Quienes Desempeñan Funciones Públicas”. Entre ellos se encuentra el detalle de la participación en juntas de directores, consejos de administración y vigilancia, consejos asesores, o cualquier cuerpo colegiado, sea remunerado u honorario, la identificación de todos los cargos públicos o posiciones ocupadas por el declarante en los dos años inmediatamente anteriores a la declaración, sean remunerados u honorarios, y el desempeño como director, empleado, consultor o representante de cualquier emprendimiento comercial o sin fines de lucro, debiendo especificarse al contratante del funcionario público (véase la recomendación “g” de la sección 2.4 del Capítulo II “A” del presente informe).

2.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[102] Con información proporcionada durante la visita *in situ* se compiló la siguiente información relativa a resultados en esta área.

[103] Durante la visita *in situ* los representantes de la Comisión de Integridad informaron no contar con los recursos humanos (auditores e investigadores) necesarios para asistirle en la adecuada verificación de la exactitud de las declaraciones presentadas en virtud de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004.

[104] Explicaron asimismo que entre 350 y 400 servidores públicos tienen la obligación de presentar declaraciones de ingresos, activos y pasivos. Los representantes informaron que el índice de cumplimiento era levemente superior al 50% y que la Comisión de Integridad no había encontrado

³³ Disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/law_declaration.htm

discrepancias en las declaraciones presentadas hasta el momento. No obstante, el Comité no recibió información detallada de dichos resultados.

[105] Los representantes de la Comisión de Integridad informaron que debido a la falta de recursos no habían publicado en la Gaceta los nombres de quienes habían incumplido la obligación de presentar su declaración, conforme lo exige el artículo 20(1) de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004. Además, la Comisión de Integridad informó que no se proporciona a los servidores públicos capacitación alguna en cuanto a la forma de presentar correctamente sus declaraciones.

[106] Con base en la información señalada precedentemente el Comité estima, en primer lugar, que si los miembros de la Comisión de Integridad no cuentan con los recursos humanos y la experiencia técnica para asistirlos les será muy difícil realizar un examen adecuado y detallado de las declaraciones de ingresos, activos y pasivos, lo que quizás explique por qué la Comisión no encontró discrepancias en las declaraciones que se le presentaron desde su creación. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación “h” de la sección 2.4 del Capítulo II “A” del presente informe).

[107] En segundo lugar el Comité cree que el país analizado debería considerar la realización de campañas de sensibilización y de programas de capacitación y difusión dirigidos a los servidores públicos a quienes la Ley de Integridad de la Función Pública de 2004 les impone la obligación de presentar declaraciones. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación “i” de la sección 2.4 del Capítulo II “A” del presente informe).

[108] Por otro lado, el Comité estima que el país analizado debería considerar hacer cumplir las normas existentes de la Ley de Integridad de la Función Pública de 2004 respecto de quienes incumplan su obligación de presentar una declaración de activos dentro del plazo prescrito o lo hagan en forma extemporánea y/o provean información incompleta, imprecisa o falsa, publicando sus nombres en la Gaceta, además de tomar las medidas necesarias para la aplicación efectiva y expeditiva de las sanciones penales y/o administrativas vigentes. El Comité formulará recomendaciones al respecto (véanse las recomendaciones “j” y “k” de la sección 2.4 del Capítulo II “A” del presente informe).

[109] Por último, además de lo señalado precedentemente, el Comité no cuenta con otra información que haya sido procesada de forma tal de permitirle realizar una evaluación integral de los resultados de las normas y mecanismos en la materia. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación “l” de la sección 2.4 del Capítulo II “A” del presente informe).

2.4. Conclusiones y recomendaciones

[110] Antigua y Barbuda ha considerado y adoptado medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda, de acuerdo con lo expresado en la sección 2 del Capítulo II “A” de este informe.

[111] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que Antigua y Barbuda considere las siguientes recomendaciones.

- a) Considerar modificar la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 con vistas a reglamentar las condiciones, procedimientos y demás aspectos pertinentes relativos a la publicidad de las declaraciones de activos, ingresos y pasivos de acuerdo con los principios fundamentales del Sistema jurídico del país (véase el punto 2.2 del Capítulo II “A” del presente informe).

- b) Facilitar medios electrónicos para completar la declaración de ingresos, activos y pasivos, así como para presentarla a la Comisión de Integridad (véase el punto 2.2 del Capítulo II “A” del presente informe)
- c) Considerar hacer obligatorio que diversas instituciones, organismos, entidades y órganos reglamentarios, cuando medie una solicitud de la Comisión de Integridad al efecto, o por lo menos anualmente, presenten una lista de los obligados a presentar declaraciones de ingresos, activos y pasivos, de conformidad con lo dispuesto en el primer anexo de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 (véase el punto 2.2 del Capítulo II “A” del presente informe).
- d) Considerar el establecimiento de las sanciones correspondientes a las diversas instituciones, organismos, entidades y órganos reglamentarios en el caso de incumplimiento o de demora en el cumplimiento de la presentación de la lista de los obligados a presentar declaraciones de ingresos, activos y pasivos a la Comisión de Integridad (véase el punto 2.2 del Capítulo II “A” del presente informe).
- e) Considerar el establecimiento de sanciones administrativas para quienes incumplan la obligación de presentar una declaración de ingresos, activos y pasivos; o consignen información incompleta, inexacta o falsa; así como para quienes, tras solicitud al efecto, no le presenten a la Comisión de Integridad la información adicional dentro de un plazo predeterminado; las mencionadas sanciones pueden incluir la retención salarial y, para aquellos que hayan dejado el servicio público, multas e inhabilitaciones para ocupar cargos públicos hasta tanto se presente la declaración final de activos (véase el 2.2 del Capítulo II “A” del presente informe).
- f) Determinar criterios objetivos e imparciales para la selección anual, de entre el universo de obligados, declaraciones de ingresos, activos y pasivos para su verificación y examen a los efectos previstos en la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004; así como explicar todo cambio de criterio en el informe anual dispuesto en el artículo 29(1) de dicha norma legal (véase el punto 2.4 del Capítulo II “A” del presente informe).
- g) Considerar ampliar la información que se solicita a los declarantes a fin de que incluya algunos elementos adicionales que puedan ser de utilidad para evitar conflictos de intereses, tales como su participación en juntas de directores, consejos de administración y vigilancia, consejos asesores, o cualquier cuerpo colegiado, sea remunerado u honorario, la identificación de todos los cargos públicos o posiciones ocupadas por el declarante en los dos años inmediatamente anteriores a la declaración, sean remunerados u honorarios, y el desempeño como director, empleado, consultor o representante de cualquier emprendimiento comercial o sin fines de lucro, debiendo especificarse al contratante del funcionario público (véase el punto 2.2 del Capítulo II “A” del presente informe).
- h) Dotar a la Comisión de Integridad de los auditores e investigadores necesarios para asistirle en la adecuada verificación de la exactitud de las declaraciones de ingresos, activos y pasivos presentadas en virtud de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 (véase el punto 2.3 del Capítulo II “A” del presente informe).
- i) Considerar la realización de campañas de sensibilización y de programas de capacitación dirigidos a los servidores públicos a quienes la Ley de Integridad de la Función Pública

de 2004 les impone la obligación de presentar declaraciones (véase el punto 2.3 del Capítulo II “A” del presente informe).

- j) Publicar en la Gaceta los nombres de quienes han incumplido la obligación de presentar su declaración de ingresos, activos y pasivos conforme lo exige el artículo 20(1) de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 (véase el punto 2.3 del Capítulo II “A” del presente informe).
- k) Tomar las medidas necesarias para la aplicación efectiva y expeditiva de las sanciones penales y/o administrativas vigentes a quienes incumplan su obligación de presentar la declaración de activos dentro del plazo prescrito o que lo hagan en forma extemporánea y/o consignen información incompleta, inexacta o falsa (véase el punto 2.3 del Capítulo II “A” del presente informe).
- l) Mantener y publicar resultados que reflejen la labor de la Comisión de Integridad en materia de verificación de la exactitud de las declaraciones de ingresos, activos y pasivos, así como de la información sobre la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 a efectos de individualizar los desafíos y recomendar medidas correctivas (véase el punto 2.3 del Capítulo II “A” del presente informe).

3. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11, DE LA CONVENCIÓN)

3.1. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN EN GENERAL

3.1.1. Existencia de disposiciones en el marco jurídico y/o de otras medidas

[112] Antigua y Barbuda tiene en vigencia un conjunto de disposiciones constitucionales que consagran principios individuales, derechos y garantías que permiten, facilitan y protegen la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en las acciones dirigidas a la lucha contra la corrupción, tales como el derecho a la Función, a la libertad, a la seguridad de la persona y a la protección legal,³⁴ así como a la libertad de conciencia, de expresión (incluida la libertad de prensa) y de reunión y asociación pacíficas.³⁵ Cabe mencionar que los artículos 12 y 13 de la Constitución protegen en forma expresa, respectivamente, la libertad de expresión (incluida la de prensa) y la de reunión y asociación.

3.1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[113] Según la información que tuvo a su disposición el Comité observa que la Constitución de Antigua y Barbuda contiene disposiciones para la protección y promoción de libertades y derechos fundamentales de la persona, lo cual es una base importante que permite que la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales operen de manera libre e independiente, lo cual coadyuva a la prevención de la corrupción.

[114] Si bien en sus respuestas al cuestionario³⁶ Antigua y Barbuda manifiesta que no cuenta con un marco jurídico vigente para estimular a la sociedad civil y a las organizaciones gubernamentales a

³⁴ Artículo 3(a) de la Constitución.

³⁵ Artículo 3(b) de la Constitución.

³⁶ Respuesta de Antigua y Barbuda al Cuestionario en el marco de la Cuarta Ronda, pág. 24.

participar en los esfuerzos destinados a la prevención de la corrupción, destaca la existencia de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 y de la Ley de Libertad de la Información de 2004.

[115] No obstante, y teniendo presentes las categorías a las que se refiere la metodología para el examen del artículo III, inciso 11, de la Convención,³⁷ para cada una de las secciones correspondientes el Comité presentará algunas observaciones y elaborará diversas recomendaciones específicas en la materia.

3.1.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[116] Dado que el país analizado no proporcionó información sobre los resultados en este ámbito no resulta posible efectuar una evaluación integral.

3.2. MECANISMOS PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

3.2.1. Existencia de disposiciones en el marco jurídico y/o de otras medidas

[117] Antigua y Barbuda cuenta con un conjunto de disposiciones relativas a los mecanismos mencionados, entre las que cabe destacar las siguientes.

[118] – El artículo 6(1) de la Ley de Libertad de la Información de 2004 dispone que entre los amplios objetivos del artículo 12 de la Constitución³⁸ toda persona tiene derecho y es libre de recibir y difundir información e ideas sin interferencia. El propósito principal de la mencionada ley es brindarle un efecto máximo al derecho a la información en manos de autoridades públicas³⁹ (con las únicas excepciones que sean razonablemente justificables en una sociedad democrática o que sean específicamente previstas en la legislación)⁴⁰, así como mejorar la buena gobernanza mediante el conocimiento, la transparencia y la rendición de cuentas.

[119] El artículo 10(1) de la Ley de Libertad de la Información de 2004 exige que, de manera accesible y mediante una actualización anual, toda autoridad pública publique y difunda información básica, como una descripción suficientemente detallada de su estructura, funciones, deberes y finanzas, detalles pertinentes de los servicios que le proporcione directamente al público, además de los mecanismos de trámite de solicitudes o quejas directas.⁴¹

[120] El artículo 15(1) de la Ley de Libertad de la Información de 2004 prevé el derecho general de toda persona a obtener acceso a la información cuando así lo solicite. Para lograr dicho acceso deberá

³⁷ Metodología para el Examen de la Implementación de las Disposiciones de la Convención seleccionadas en el marco de la Primera Ronda, Capítulo V, D, (SG/MESICIC/doc.21/02).

³⁸ El artículo 12 de la Constitución garantiza el derecho a la libertad de expresión, incluido el derecho a la libertad de prensa.

³⁹ El artículo 3 de la ley define “autoridad pública”, figura que incluye “(a) al gobierno; (b) a los ministerios del gobierno y los departamentos, divisiones o unidades de aquéllos, cualquiera sea su denominación; (c) al Consejo de Barbuda creado en virtud del artículo 123 de la Constitución y la Ley de Gobierno Local de Barbuda; (d) a un órgano i) establecido por la Constitución o por cualquier otra ley o con arreglo a ellas; ii) que sea de propiedad o se halle bajo el control del gobierno o se encuentre sustancialmente financiado por éste con fondos públicos; iii) que desempeñe alguna función que le fuera atribuida por ley o por acción ejecutiva, o una función pública conferida por el gobierno, únicamente dentro del ámbito de dicha función, y (e) todo otro órgano que desempeñe una función pública designada por el ministro mediante orden al efecto publicada en la Gaceta”.

⁴⁰ El artículo 7 excluye expresamente del ámbito de aplicación de la citada ley: “(a) las comisiones de investigación o los procedimientos y conclusiones de aquéllas que se constituyan con arreglo a la Ley de Comisiones de Investigación; (b) las autoridades públicas o las funciones de las mismas determinadas por el ministro mediante orden al efecto, que estará sujeta a una resolución de negativa de la Cámara de Representantes; (c) los tribunales, o los titulares de un puesto judicial o de otro cargo relativo a un tribunal que actúe en calidad de tal; o (d) una secretaría judicial u otro cargo en un tribunal y el personal que se desempeñe en ambos en su calidad de miembros de dicho personal en lo que respecta a asuntos relativos a la administración del tribunal”.

⁴¹ La lista completa de requisitos puede consultarse en los artículos 10(1) (a) a (h) de la Ley de Libertad de la Información.

presentar una solicitud por escrito a un funcionario de alto nivel o al oficial de información de una autoridad pública o entidad privada.⁴² La solicitud deberá contener detalles suficientes como para facilitar la determinación, tras una diligencia razonable, de que la autoridad posee (o no) los registros que contienen la información en cuestión.⁴³ Si bien el motivo de la solicitud de acceso a la información es intrascendente,⁴⁴ podrá exigirse que el solicitante abone un arancel razonable, el cual no podrá ser superior al costo de la búsqueda, preparación y comunicación de la información.⁴⁵ No procederá el pago de un arancel en el caso de información personal ni de pedidos de interés público.⁴⁶

[121] Asimismo, el artículo 18(1) dispone que el funcionario de la autoridad pública debe responder dentro de los 20 días hábiles de la recepción de la solicitud, si ha sido aprobada y se han abonado los aranceles correspondientes.⁴⁷ Dicho plazo podrá prorrogarse por un máximo de 40 días mediante comunicación por escrito cursada dentro del período inicial de 20 días si la solicitud implicara gran cantidad de documentos o exigiera una búsqueda en gran cantidad de registros y si el cumplimiento de la solicitud generara una interferencia irrazonable en las operaciones de la autoridad pública.⁴⁸

[122] El artículo 19(1) de la Ley de Libertad de la Información establece que la respuesta a una solicitud de acceso a la información debe efectuarse por escrito y consignar lo siguiente: “(a) el arancel aplicable, de corresponder, de conformidad con el artículo 20, relativo a cualquier parte de la solicitud que se otorgue, y la forma en que se comunicará la información; (b) las razones adecuadas del rechazo en relación con las partes de la solicitud no otorgadas con sujeción únicamente a la Parte IV; (c) en lo relativo a la denegatoria de indicar si el ente público posee registros que contienen la información pertinente, el hecho del rechazo y los motivos adecuados del mismo; y (d) el derecho de apelar ante el Comisionado o ante un órgano de revisión judicial a los que pueda acceder el solicitante”.

[123] La Parte IV (arts. 24 a 34) de la Ley de Libertad de la Información de 2004 reconoce expresamente excepciones al derecho general de acceso a la información, tales como la revelación de información de un tercero que sea una persona física;⁴⁹ información protegida por el secreto profesional que no puede ser producida en procesos judiciales;⁵⁰ información comercial y confidencial;⁵¹ información que probablemente podría poner en peligro la vida, salud o seguridad de la persona;⁵² operaciones de las fuerzas del orden público;⁵³ defensa y seguridad nacional;⁵⁴ intereses económicos públicos;⁵⁵ y formulación de políticas y operaciones de autoridades públicas.⁵⁶

[124] En cuanto a los mecanismos responsables de la implementación y seguimiento de la Ley de Libertad de la Información de 2004 cabe notar lo siguiente.

⁴² Ley de Libertad de la Información, artículo 17(1).

⁴³ *Ibid.*, art. 17(1).

⁴⁴ *Ibid.*, art. 17(4).

⁴⁵ *Ibid.*, art. 20(1).

⁴⁶ *Ibid.*, art. 20(2).

⁴⁷ No obstante, el art. 18(2) de la Ley de Libertad de la Información dispone que si la solicitud de información se refiere a información que razonablemente se considere necesaria para salvaguardar la vida o la libertad de una persona, el funcionario deberá proporcionarla dentro de un plazo de 48 horas.

⁴⁸ *Ibid.*, art. 18(3).

⁴⁹ *Ibid.*, art. 26.

⁵⁰ *Ibid.*, art. 27.

⁵¹ *Ibid.*, art. 28.

⁵² *Ibid.*, art. 29.

⁵³ *Ibid.*, art. 30.

⁵⁴ *Ibid.*, art. 31.

⁵⁵ *Ibid.*, art. 32.

⁵⁶ *Ibid.*, art. 33.

[125] El art. 9(1) de dicha ley dispone que toda autoridad pública debe designar a uno de sus funcionarios para que se desempeñe como oficial de información y asegurarse de que el público tenga un fácil acceso a él. El art. 9(2) establece que el oficial de información es responsable de actuar como el contacto central dentro de la autoridad pública para recibir solicitudes de información y ayudar a quienes buscan obtenerla, además de recibir quejas sobre el desempeño de la autoridad pública en materia de la entrega de información de acuerdo con lo previsto en la ley. Es responsable de fomentar dentro de la autoridad pública las mejores prácticas posibles en relación con el mantenimiento, archivo y eliminación de registros.

[126] El art. 35(1) de la ley dispone el nombramiento de un Comisionado de Información (*information commissioner*) quien, actuando en forma independiente,⁵⁷ tendrá entre otros deberes el de hacer un seguimiento del cumplimiento de las autoridades públicas de sus obligaciones así como la presentación de informes al respecto, además de remitir a las autoridades correspondientes aquellos casos que razonablemente revelen pruebas de delitos penales.⁵⁸

[127] Según el art. 41 de la ley quien haya presentado una solicitud de información podrá pedir por escrito al comisionado que expida una decisión en la que indique que la autoridad pública ha incumplido alguna de las obligaciones que le impone la Parte III de la norma legal, incluidas las siguientes (a) rehusarse a indicar si posee la información en cuestión o a comunicarla, lo cual es contrario al art. 16; (b) no responder a una solicitud de información dentro de los plazos consignados en el art. 18; (c) no proporcionar una comunicación escrita de su respuesta a una solicitud de información según lo dispuesto en el art. 19; (d) no transmitir la información de manera inmediata, lo cual vulnera el art. 19(3); (e) cobrar un arancel excesivo, en contravención del art. 20; o no comunicar la información en la forma solicitada, infringiendo el art. 21.

[128] El Comisionado de Información tiene 30 días para tomar su decisión respecto de una solicitud presentada según el art. 41, tras haberle dado al reclamante y a la correspondiente autoridad pública o ente privado la oportunidad de presentar sus opiniones por escrito.⁵⁹ El comisionado puede desestimar la solicitud o solicitar a la autoridad pública o ente privado que tomen las medidas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones que les impone la ley.⁶⁰ En todos los casos deberá entregarse al reclamante y a la autoridad pública una copia de la decisión, acompañada de información sobre el derecho de las partes de someterla a revisión.⁶¹ Dentro de un plazo de 28 días el reclamante o la correspondiente autoridad pública podrán solicitarle al Alto Tribunal (*High Court*) que realice una revisión de la decisión del Comisionado de Información.⁶² El ente público tendrá la carga de probar que actuó en consonancia con las obligaciones que le impone la Parte III de la ley.⁶³

[129] Los arts. 43 y 44, respectivamente, le confieren al Comisionado de Información la facultad de implementar sus decisiones en forma directa y de investigar todo incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley.

[130] Por último, el art. 48 prevé que quien vulnere alguna de las disposiciones del inciso (1)⁶⁴ cometerá un delito y, tras condena por proceso sumario, será pasible de una multa que no superará la

⁵⁷ *Ibid.*, art. 38.

⁵⁸ *Ibid.*, art. 37.

⁵⁹ *Ibid.*, art. 42(1).

⁶⁰ *Ibid.*, arts. 42(4) (a) y (b).

⁶¹ *Ibid.*, art. 42(5).

⁶² *Ibid.*, art. 45(1).

⁶³ *Ibid.*, art. 45(2).

⁶⁴ Entre ellas se encuentran las siguientes: (a) obstaculización del acceso a un registro en contravención de las disposiciones de la Parte III de la Ley de Libertad de la Información de 2004; (b) obstaculización del desempeño del deber de una autoridad pública dispuesto en la Parte III de dicha ley, (c) interferencia en la labor del Comisionado; (d) destrucción, daño, retiro o alteración de

suma de cinco mil dólares del Caribe oriental⁶⁵ o sometido a una pena de prisión no superior a los dos años, o ambas.

3.2.2. Adecuación del marco legal y/o de otras medidas

[131] Las leyes relativas a los mecanismos para el acceso a la información que ha analizado el Comité con base en la información que ha tenido a su disposición, son pertinentes para la promoción de los fines de la Convención.

[132] Sin embargo, el Comité estima adecuado formular ciertas observaciones sobre la conveniencia de complementar y elaborar determinadas disposiciones legales referidas a las normas y mecanismos mencionados precedentemente.

[133] En primer lugar, el Comité expresa su preocupación respecto de la disposición prevista en el art. 7 (b) que permite que, con sujeción a una resolución negativa de la Cámara de Representantes, el ministro responsable de la información pública exima a una autoridad pública o a una función de una autoridad pública de la aplicación de la Ley de Libertad de la Información de 2004. El Comité opina que, a diferencia del caso de la exención de documentos, la exención aplicable a órganos gubernamentales podría socavar el mecanismo al eliminar completamente la posibilidad de revisión o apelación de una decisión de denegatoria de acceso a la información. El Comité cree que sería adecuado que Antigua y Barbuda considere la revisión de la mencionada disposición y formulará una recomendación al respecto (véase recomendación “a” de la sección 3.2.4 del Capítulo II “A” del presente informe).

[134] En segundo lugar el Comité estima que Antigua y Barbuda debería considerar el dictado de normas que aclararan aún más las excepciones al derecho general de acceso a la información pública previsto en la Parte IV de la Ley de Libertad de la Información de 2004, sin ampliar dichas excepciones. Por ejemplo, el art. 31 de la citada ley prevé una excepción al derecho de acceso a la información pública si causara o pudiera causar un perjuicio grave a la defensa o seguridad nacional. No obstante, no se brinda una definición más amplia de lo que se incluye en las nociones de “defensa” y “seguridad nacional”. El Comité estima que sin pautas claras podrían rechazarse muchas solicitudes sobre la base de una interpretación laxa de esos y otros términos. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase recomendación “b” en la sección 3.2.4 del Capítulo II “A” del presente informe).

[135] En tercer lugar, durante la visita *in situ* el Comisionado de Información informó que, a pesar de sus esfuerzos al efecto, únicamente un 25% de las autoridades públicas habían designado a sus respectivos oficiales de información conforme lo exigido por el art. 9 de la Ley de Libertad de la Información de 2004. El Comité estima que el hecho de que cerca del 75% de las autoridades públicas no cuenten con oficiales de información debilita la ejecución de la ley. Dado que, según la mencionada ley estos oficiales no son solo contactos centrales para recibir solicitudes de información, sino que también son responsables de promover, en el seno de la autoridad pública, las mejores prácticas posibles relativas al mantenimiento, archivo y eliminación de registros. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación “c” en la sección 3.2.4 del Capítulo II “A” del presente informe).

[136] En cuarto lugar, además del problema indicado precedentemente, el Comisionado de Información destacó las muchas dificultades que encontró para la implementación plena de la Ley de Libertad de la Información de 2004 desde que asumió su cargo en agosto de 2012. Una de ellas es la necesidad de que las autoridades públicas lleven sus registros en forma diligente. Otra es la falta de presupuesto y de

un registro con la intención de evitar la divulgación de la información que contiene o (e) incumplimiento de una decisión u orden del Comisionado dictadas con arreglo a los artículos 42 o 43 de la citada norma legal.

⁶⁵ 1 dólar estadounidense = aproximadamente 2,7 dólares del Caribe oriental (al 17 de octubre de 2014).

personal en sus oficinas. El presupuesto nacional no prevé una asignación específica para la Oficina del Comisionado de Información, sino que la ubica bajo la égida del Ministerio de Información.

[137] En materia de personal el Comisionado de Información indicó que su oficina cuenta únicamente con dos empleados (un empleado ejecutivo y un secretario administrativo, el cual comparte con la Comisión de Integridad). Señaló asimismo la necesidad de reforma de la Ley de Libertad de la Información de 2004 a efectos de incluir en su oficina, entre otros, los siguientes puestos: un secretario, un secretario de audiencias, un analista de apelaciones y un analista superior de apelaciones. En su opinión de esta forma se fortalecería la capacidad de su oficina para ejecutar las importantes funciones previstas en la citada ley.

[138] En vista de lo anterior el Comité formulará recomendaciones (véanse las recomendaciones “d” y “e” en la sección 3.2.4 del Capítulo II “A” del presente informe).

[139] En quinto lugar el Comité señala que el art. 8(1) de la Ley de Libertad de la Información de 2004 exige que, a la brevedad posible, el Comisionado de Información elabore una guía sencilla y clara con información práctica que facilite el efectivo ejercicio de derechos de conformidad con la norma legal, además de difundir dicha guía en forma amplia y accesible. Asimismo, el art. 11(a) impone al Comisionado la obligación de publicar una guía sobre criterios mínimos y mejores prácticas correspondientes al deber de publicación de información que el art. 10 de la mencionada ley le atribuye a las autoridades públicas.

[140] No obstante, durante la visita *in situ* el Comisionado de Información señaló que las guías se encontraban aún en proceso de elaboración. El Comité formulará recomendaciones al respecto (véanse las recomendaciones “f” y “g” de la sección 3.2.4 del Capítulo II “A” del presente informe).

[141] En sexto lugar el Comité estima que es importante que se realicen rutinariamente programas de capacitación y concientización sobre los derechos y obligaciones relativos a acceso a la información previstos en la Ley de Libertad de la Información de 2004 a efectos de difundirlos entre el público en general e instruir a los funcionarios públicos en la materia. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación “h” en la sección 3.2.4 del Capítulo II “A” del presente informe).

[142] Respecto de este tema, durante la visita *in situ* el representante del Comité Directivo del Congreso de Medios de Antigua y Barbuda presentó una serie de observaciones.⁶⁶ Entre ellas se encuentran las siguientes.

[143] *“La promulgación de leyes puede considerarse como el primer paso en el logro de la apertura y de la reducción de la brecha entre el gobierno y la sociedad civil.*

[144] *De lo cual se desprende la pregunta: ¿cuál es el mayor alcance que ha logrado esta legislación sancionada hace diez años?*

[145] *Si bien la respuesta puede variar según a quién se formule la pregunta, una cosa sí resulta clara: tras diez años de la sanción de la Ley de Libertad de la Información nuestro país no ha dado muestra alguna de haber avanzado más allá de su promulgación y del establecimiento del marco jurídico para los actos.*

[146] *Las campañas de educación y concientización del público han sido muy limitadas. Las salas de redacción de los medios de comunicación, y hablo con la experiencia y conocimientos adquiridos en mi*

⁶⁶ http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_fre_info.pdf

calidad de trabajador de los medios, no han logrado obtener información mediante esa vía, al menos ese ha sido el caso de los periodistas que conozco y con los que me he comunicado antes de la reunión de hoy.

[147] *Sin embargo, me atrevo a decir que los medios, los particulares o los grupos de acción ciudadana han sido más propositivos en la búsqueda de información sobre el proceso decisorio que exigen. Si no se presiona a las autoridades las barreras continuarán existiendo.*

[148] *Ahora bien, ¿cómo es que los particulares podrían ser propositivos si no tienen certeza de los derechos que existen en virtud de la citada ley?*

[149] *Por ese motivo creo que existe la necesidad de sensibilizar al público y de crear una conciencia de la existencia de la ley mediante lugares en donde pueda comunicárseles lo que ofrece la norma legal y puntos de acceso para la recepción de solicitudes y la entrega de documentos.*

[150] *Ese objetivo puede lograrse mediante los sistemas de bibliotecas públicas y de centros comunitarios que actuarían como intermediarios de los servicios que se ofrecen en la Oficina del Comisionado de Asuntos de la Información la cual, debo agregar, carece de personal suficiente conforme lo indicado por el Sr. Comisionado Alister Thomas (quien se encuentra aquí presente el día de hoy).*

[151] *La presunción general es que los ciudadanos pueden utilizar el material publicado en los medios y en Internet. No obstante, reitero que existe la necesidad de examinar en forma más detallada los requisitos relativos a aquellos que puedan ser analfabetos o cuya primera lengua sea distinta del idioma oficial*

[152] *En otras palabras, las medidas prácticas para proporcionar acceso a la información deberían estar más integradas a los sistemas nacionales de información y adaptarse a fin de encuadrarse en las características de búsqueda de información de la ciudadanía (...).*

[153] En séptimo lugar el Comité señala que el art. 20(3) de la Ley de Libertad de la Información de 2004 autoriza al ministro responsable de la información pública a que, tras consultas con el Comisionado de Información, elabore normas que establezcan los aranceles que se cobrarán, la forma en que se calcularán, el no cobro de aranceles en casos específicos y toda otra cuestión arancelaria. No obstante, aunque la ley entró en vigor en 2004, dichas normas aún no se han dictado. Teniendo en cuenta la importancia de que los aranceles que se cobren, de existir, sean razonables y se fijen claramente según criterios objetivos, el Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación “i” de la sección 3.2.4 del Capítulo II “A” del presente informe).

[154] Por último, el Comité señala que no existe un formato estándar para las solicitudes de información, lo cual podría resultar útil para quienes deseen presentarlas. Asimismo el Comité estima que podría recurrirse a la tecnología para facilitar la presentación de solicitudes de acceso a la información pública así como para su respuesta. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación “j” en la sección 3.2.4 del Capítulo II “A” del presente informe).

3.2.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[155] Dado que el país analizado no proporcionó información sobre los resultados en este ámbito no resulta posible efectuar una evaluación integral.

[156] No obstante, el Comité señala que el art. 14 de la Ley de Libertad de la Información de 2004 exige que en todos los ejercicios económicos los oficiales de información presenten un informe de las actividades de la autoridad pública con arreglo a dicha ley o en promoción de su cumplimiento, que incluirá información sobre (a) la cantidad de solicitudes de información recibidas y su aceptación total o parcial, o su rechazo; (b) la frecuencia con la que se rechazaron, en todo o en parte, las solicitudes de información y las disposiciones de la citada ley esgrimidas a esos efectos; (c) las apelaciones a las denegatorias de comunicación de información; (d) los aranceles cobrados por las solicitudes de información y (e) sus actividades con arreglo a los artículos 10 y 12.

[157] Asimismo, el art. 39(1) de la Ley de Libertad de la Información de 2004 exige que, dentro de un plazo de tres meses a partir de la finalización del ejercicio económico, el Comisionado en Asuntos de Información elabore y entregue al ministro responsable de la información pública un informe de las operaciones de la oficina de dicho comisionado durante el ejercicio económico anterior, así como toda otra información que el ministro solicite por escrito.

[158] Durante la visita *in situ* el Comisionado en Asuntos de Información indicó que los informes de los dos ejercicios previos se encontraban en fase de finalización y se presentarían tras su conclusión. No obstante, el Comisionado mencionó que sus impresiones iniciales eran que muchas autoridades oficiales denegaban inicialmente el acceso a la información pública y que se lo concedía únicamente tras la incoación de un proceso de apelación al efecto.

[159] En vista de lo anterior el Comité formulará una recomendación a efectos de que Antigua y Barbuda considere mantener y publicar resultados de la implementación de la Ley de Libertad de la Información de 2004, incluida la información exigida por su artículo 14 así como como el tiempo promedio que se toma cada autoridad pública para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, a fin de identificar desafíos y recomendar medidas correctivas (véase la recomendación “k” en la sección 3.2.4 del Capítulo II “A” del presente informe).

3.2.4. Conclusiones y recomendaciones

[160] **Antigua y Barbuda ha considerado y adoptado medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer mecanismos de acceso a la información, de acuerdo con lo expresado en la sección 3.2 del Capítulo II “A” de este informe.**

[161] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que Antigua y Barbuda considere las siguientes recomendaciones.

- a) Considere la revisión de la disposición prevista en el artículo 7(b) de la Ley de Libertad de la Información de 2004 que permite que el ministro responsable de la información pública exima a una autoridad pública o a una función de una autoridad pública de la aplicación de la mencionada normal legal (véase el punto 3.2.2 del Capítulo II “A” del presente informe).
- b) Dicte normas para aclarar aún más las excepciones al derecho general de acceso a la información pública de la Parte IV de la Ley de Libertad de la Información de 2004, sin ampliarlas (véase el punto 3.2.2 del Capítulo II “A” del presente informe).
- c) Asegurar que las autoridades públicas que aún no lo han hecho cumplan lo dispuesto en el art. 9 de la Ley de Libertad de la Información de 2004 y designen a sus respectivos oficiales de información (véase el punto 3.2.2 del Capítulo II “A” del presente informe).

- d) Establecer políticas, mecanismos y/o procedimientos, de observancia general, para la administración, organización y conservación de la información y documentos en poder o bajo el control de las instituciones públicas (véase el punto 3.2.2 del Capítulo II “A” del presente informe).
- e) Fortalecer la oficina del Comisionado en Asuntos de Información asegurándose de que cuente con los recursos humanos, financieros, informáticos y tecnológicos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones, teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos (véase el punto 3.2.2 del Capítulo II “A” del presente informe).
- f) Compilar y difundir una guía clara y simple con información práctica del ejercicio efectivo de derechos según la Ley de Libertad de la Información, conforme lo exigido por el art. 8(1) de dicha norma legal (véase el punto 3.2.2 del Capítulo II “A” del presente informe).
- g) Elaborar y publicar una guía sobre criterios mínimos y mejores prácticas correspondientes al deber de publicación de información que el art. 10 de la Ley de Libertad de la Información de 2004 le atribuye a las autoridades públicas, conforme lo exigido por el art. 11(a) de dicha ley (véase el punto 3.2.2 del Capítulo II “A” del presente informe).
- h) Implementar programas de capacitación, difusión y concientización sobre los mecanismos para el acceso a la información a efectos de facilitar su entendimiento por parte de los servidores públicos y de la ciudadanía (véase el punto 3.2.2 del Capítulo II “A” del presente informe).
- i) Dictar las normas previstas en el art. 20(3) de la Ley de Libertad de la Información de 2004 en materia de los aranceles, de existir, que se cobrarán por el acceso a la información pública, asegurándose de que se fijen en forma clara y razonable sobre la base de criterios objetivos (véase el punto 3.2.2 del Capítulo II “A” del presente informe).
- j) Elaborar un formulario o una plantilla estándar para la presentación de solicitudes de acceso a la información pública, además de optimizar el uso de la tecnología disponible a fin de facilitar dicho acceso (véase el punto 3.2.2 del Capítulo II “A” del presente informe).
- k) Mantener y publicar resultados de la implementación de la Ley de Libertad de la Información de 2004, incluida la información exigida por su artículo 14 así como el tiempo promedio que se toma cada autoridad pública para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, a fin de identificar desafíos y recomendar medidas correctivas (véase el punto 3.2.3 del Capítulo II “A” del presente informe).

3.3. MECANISMOS DE CONSULTA

3.3.1. Existencia de disposiciones en el marco jurídico y/o de otras medidas

[162] En su respuesta al cuestionario,⁶⁷ Antigua y Barbuda manifiesta que no existen mecanismos específicos de consulta.

⁶⁷ Respuesta de Antigua y Barbuda al Cuestionario en el marco de la Cuarta Ronda, pág. 30.

3.3.2. Adecuación del marco jurídico y/o de las otras medidas

[163] En vista de lo anterior el Comité formulará recomendaciones al respecto (véanse las recomendaciones “a” y “b” de la sección 3.3.4 del Capítulo II “A” del presente informe).

3.3.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[164] Teniendo en cuenta que el país analizado no proporcionó información sobre estos mecanismos que habría permitido que el Comité realizase una evaluación integral de los resultados de los citados mecanismos, el Comité formulará recomendaciones al respecto (véanse las recomendaciones generales “b” y “c” del Capítulo II “A” del presente informe).

3.3.4. Conclusiones y recomendaciones

[165] **Antigua y Barbuda aún no ha considerado ni adoptado medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer mecanismos de consulta con la sociedad civil y con organizaciones no gubernamentales, de acuerdo con lo expresado en la sección 3.3 del Capítulo II “A” de este informe.**

[166] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que Antigua y Barbuda considere las siguientes recomendaciones.

- a) Elaborar mecanismos de consulta que permitan a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales emitir opiniones y propuestas que puedan ser tomadas en cuenta para la prevención, detección, investigación y sanción de la corrupción (véase el punto 3.3.2 del Capítulo II “A” del presente informe).
- b) Elaborar y poner en práctica programas para publicitar los mecanismos de consulta y, cuando corresponda, proporcionar la capacitación y los instrumentos necesarios para su implementación efectiva (véase el punto 3.3.2 del Capítulo II “A” del presente informe).

3.4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

3.4.1. Existencia de disposiciones en el marco jurídico y/o de otras medidas

[167] Antigua y Barbuda no proporcionó información sobre dichos mecanismos en su respuesta al cuestionario⁶⁸ y tampoco se recibió esta información durante la visita *in situ*.

3.4.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[168] En vista de lo anterior el Comité formulará recomendaciones al respecto (véanse las recomendaciones generales “a” y “b” de la sección 3.4.4 del Capítulo II “A” del presente informe).

3.4.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[169] Teniendo en cuenta que el país analizado no proporcionó información sobre los mencionados mecanismos que habría permitido que el Comité realizara una evaluación integral de los resultados de los mismos, formulará recomendaciones al respecto (véanse las recomendaciones generales “b” y “c” del Capítulo II “A” del presente informe).

⁶⁸ *Ibíd.*, pág. 31.

3.4.4. Conclusiones y recomendaciones

[170] **Antigua y Barbuda aún no ha considerado ni adoptado medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en la administración pública, de acuerdo con lo expresado en la sección 3.4 del Capítulo II “A” de este informe.**

[171] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que Antigua y Barbuda considere las siguientes recomendaciones:

- a) Elaborar criterios y procedimientos que, teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico interno del país, establezcan, mantengan y fortalezcan mecanismos de incentivación de la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los procesos de aprobación de decisiones y políticas públicas en el marco de las acciones de prevención de la corrupción (véase el punto 3.4.2 del Capítulo II “A” del presente informe).
- b) Elaborar y poner en práctica programas específicos para publicitar los mecanismos de incentivación de la participación en la administración pública (véase el punto 3.4.2 del Capítulo II “A” del presente informe).

3.5. MECANISMOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL SEGUIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

3.5.1. Existencia de disposiciones en el marco jurídico y/o de otras medidas

[172] Antigua y Barbuda no proporcionó información sobre dichos mecanismos en su respuesta al cuestionario⁶⁹ y tampoco se recibió esta información durante la visita *in situ*.

3.5.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[173] En vista de lo anterior el Comité formulará recomendaciones al respecto (véanse las recomendaciones “a” y “b” de la sección 3.5.4 del Capítulo II “A” del presente informe).

3.5.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[174] Teniendo en cuenta que el país analizado no proporcionó información sobre estos mecanismos que habría permitido que el Comité realizase una evaluación integral de los resultados de los citados mecanismos, formulará recomendaciones al respecto (véanse las recomendaciones generales “b” y “c” del Capítulo II “A” del presente informe).

3.5.4. Conclusiones y recomendaciones

[175] **Antigua y Barbuda aún no ha considerado ni adoptado medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer mecanismos que alienten la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en el seguimiento de la administración pública, de acuerdo con lo expresado en la sección 3.5 del Capítulo II “A” de este informe.**

[176] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que Antigua y Barbuda considere las siguientes recomendaciones.

⁶⁹ *Ibid.*, pág. 31.

- a) Elaborar criterios y procedimientos que, teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico interno del país, creen, mantengan y fortalezcan mecanismos de incentivación de la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en el seguimiento de la administración pública en el marco de las acciones de prevención de la corrupción mediante la promoción de nuevas formas de control social, tales como los comités de fiscalización comunitaria que supervisen actividades u obras públicas (véase el punto 3.5.2 del Capítulo II “A” del presente informe).
- b) Elaborar e implementar programas específicos para publicitar los mecanismos de incentivación de la participación en el seguimiento de la administración pública (véase el punto 3.5.2 del Capítulo II “A” del presente informe)

4. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)

4.1. ASISTENCIA RECÍPROCA

4.1.1. Existencia de disposiciones en el marco jurídico y/o de otras medidas

[177] – Antigua y Barbuda cuenta con un conjunto de disposiciones y medidas relativas a los mecanismos citados, entre las que cabe destacar la Ley de Asistencia Recíproca en Materia Penal de 1993.⁷⁰ Dicha norma legal “(...) prevé disposiciones relativas al sistema de asistencia recíproca en materia penal dentro del Commonwealth y a efectos de facilitar su operación en Antigua y Barbuda, además de prever la asistencia recíproca en materia penal entre Antigua y Barbuda y otros países de fuera del Commonwealth”.

[178] Los tipos de asistencia que pueden brindarse en virtud de la mencionada ley incluyen la relativa a la obtención de pruebas, la identificación y localización de personas, el traslado de documentos, el rastreo de bienes, la transferencia de prisioneros, así como la obtención y solicitud de asistencia correspondientes a órdenes de medidas restrictivas, de decomiso y de confiscación.

[179] La Parte IV de la mencionada ley prevé su extensión a países distintos de los del *Commonwealth*. Los artículos 29 y 30 disponen lo siguiente: “29. En esta Parte el término “país” se aplicará a países distintos de los incluidos en la definición de “país del Commonwealth” del artículo 3(1); “tratado” incluirá convenciones, protocolos, acuerdos o arreglos. 30. (1) Las normas podrán contener disposiciones para dar efecto a un tratado establecido en dichas normas y relativo a la asistencia bilateral recíproca en materia penal entre Antigua y Barbuda y uno de los países individualizados en las normas. (2) A esos efectos las normas podrán establecer específicamente que esta ley se aplique a dicho país así individualizado como si se tratara de un país del Commonwealth, con sujeción a las limitaciones, condiciones, excepciones o restricciones, si las hubiere, que pudieran disponerse, o extender la aplicación de cualquier otra norma legal conforme lo previsto en el artículo 36(2) en relación con el país especificado y se aplicarán en consecuencia la presente ley o cualquier otra ley, según corresponda”.

[180] Además, el anexo de la Ley de Asistencia Recíproca en materia Penal de 1993 establece, entre otros elementos, los requisitos generales para las solicitudes de asistencia a países del Commonwealth. El artículo 1 del anexo dispone que “una solicitud de asistencia según la ley efectuada por un país del Commonwealth deberá especificar la asistencia solicitada, individualizar a la persona, organismo o autoridad que inició la solicitud, el plazo dentro del cual el país desea que se dé cumplimiento a la solicitud, si la solicitud implicaría el viaje de alguna persona de Antigua y Barbuda al país, detalles de

⁷⁰ Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ant_mla_act_93.pdf

las dietas y gastos de alojamiento a los que ella tendría derecho, así como toda otra información que tenga disponible la autoridad central del país y que pueda facilitar el cumplimiento de la solicitud”.

[181] – Antigua y Barbuda cuenta con un tratado de asistencia jurídica mutua con Estados Unidos que se encuentra vigente,⁷¹ el cual prevé la asistencia recíproca en materia de investigación, enjuiciamiento y prevención de delitos penales y en materia de procesos relativos a cuestiones penales..

[182] – En febrero de 2008 Antigua y Barbuda firmó un memorando de entendimiento con la Secretaría General de la OEA a efectos de participar en la Red Hemisférica de Intercambio de Información para la Asistencia Judicial Mutua en materia Penal y Extradición.⁷²

4.1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[183] Las disposiciones citadas en la sección precedente pueden ayudar al logro de los objetivos de la Convención en materia de promoción y facilitación de la asistencia recíproca entre los estados parte, además de cumplir los fines específicos de la Convención relativos a la investigación y enjuiciamiento de actos de corrupción, siempre que se utilicen a esos efectos.

[184] En su respuesta al cuestionario⁷³ y con ocasión de la visita *in situ*, el Estado analizado puso de presente que únicamente ha recibido seis solicitudes de asistencia mutua relativas a delitos de corrupción, las cuales han sido completadas. Sin embargo, ninguna de las solicitudes fueron formuladas con base en la Convención. Por ello, el Comité desea resaltar la importancia de que las previsiones con las que cuenta Antigua y Barbuda en materia de asistencia recíproca, al igual que la propia Convención, se apliquen a casos concretos de actos de corrupción, lo cual presupone un conocimiento adecuado de sus disposiciones por parte de quienes tienen competencias para su aplicación. Lo anterior no sólo como estado requerido, sino también y especialmente, como estado requirente de asistencia mutua penal de otros Estados. Teniendo en cuenta lo anterior el Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación “a” de la sección 4.1.4 del Capítulo II “A” del presente informe).

[185] Asimismo, el Comité estima que Antigua y Barbuda debería considerar la ratificación de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia Penal y participar activamente en la Reunión de Ministros de Justicia u Otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA y al Grupo de Trabajo sobre Cooperación Jurídica en materia Penal (véase la recomendación “b” de la sección 4.1.4 del Capítulo II “A” del presente informe).

4.1.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[186] Aparte de la información a la que se alude en el artículo 4.1.2, el país analizado no proporcionó información adicional de los resultados en esta área, lo cual impidió un examen integral de la materia. En consecuencia el Comité formulará las recomendaciones correspondientes (véanse las recomendaciones “b” y “c” del Capítulo II “A” del presente informe).

[187] En este sentido, el Comité considera importante que Antigua y Barbuda elabore e implemente un programa de información que permita a sus autoridades hacer un seguimiento permanente de las solicitudes de asistencia recíproca referidas a actos de corrupción y, en particular, a aquellos contemplados en la Convención (ver recomendación “c” en la sección 4.1.4 del Capítulo II (A) de este informe).

⁷¹ Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ant_mla_ratification_US_and_Antigua_2000.pdf

⁷² Texto del Memorando de Entendimiento disponible en: <http://www.oas.org/dil/AgreementsPDF/37-2009.PDF>. Para más información sobre la Red Hemisférica de Intercambio de Información para la Asistencia Judicial Mutua en materia Penal y Extradición de la OEA consultar: <http://www.oas.org/Juridico/mla/index.html>

⁷³ Respuesta de Antigua y Barbuda al Cuestionario en el marco de la Cuarta Ronda, págs. 35 y 38.

4.1.4. Conclusiones y recomendaciones

[188] **Antigua y Barbuda ha considerado y adoptado ciertas medidas relativas a la asistencia mutua, de acuerdo con lo previsto en el artículo XIV de la Convención y descritas y examinadas en la sección 4.1 del Capítulo II “A” de este informe.**

[189] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que Antigua y Barbuda considere las siguientes recomendaciones.

- a) Elaborar e implementar un programa integral de capacitación y difusión para los funcionarios y autoridades competentes de forma de que tomen conocimiento y puedan aplicar las disposiciones de la Convención y de otros tratados firmados por Antigua y Barbuda en relación con la asistencia recíproca en la investigación y enjuiciamiento de actos de corrupción (véase el punto 4.1.2 del Capítulo II “A” del presente informe)
- b) Considerar la posibilidad de ratificar la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia Penal y participar activamente en la Reunión de Ministros de Justicia u Otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA) y al Grupo de Trabajo sobre Cooperación Jurídica en materia Penal (véase el punto 4.1.2 del Capítulo II “A” del presente informe).
- c) Elaborar e implementar un programa de información que permita que las autoridades de Antigua y Barbuda hagan un seguimiento permanente de las solicitudes de asistencia recíproca referidas a actos de corrupción y, en particular, a aquellos contemplados en la Convención (ver recomendación “c” en la sección 4.1.4 del Capítulo II (A) de este informe).

4.2. COOPERACIÓN TÉCNICA MUTUA

4.2.1. Existencia de un marco jurídico y/o de otras medidas

[190] En su respuesta al cuestionario,⁷⁴ Antigua y Barbuda indica que *“La Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas y Lavado de Dinero (ONDCP) es el grupo de expertos en la materia. La corrupción constituye un delito determinante del lavado de dinero. La ONDCP es miembro de Egmont con el carácter de autoridad competente y tiene autorización para interactuar con otras autoridades competentes de conformidad con el artículo 12 de la Ley de la ONDCP de 2003”*.

[191] Antigua y Barbuda aclaró adicionalmente que la ONDCP tramita las solicitudes de asistencia, incluso con respecto a actos de corrupción. No obstante, es la policía la que investiga los actos de corrupción y la DPP la que enjuicia este tipo de delitos. Adicionalmente, como ya se indicó antes, la corrupción constituye un delito determinante del lavado de dinero de acuerdo con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. En este sentido, cualquier delito para el cual se haya presentado un cargo por supuestas conductas (incluido el delito de corrupción) de las cuales se hayan derivado directa o indirectamente productos de actos delictivos de \$50,000 (dólares del Caribe oriental) o más se considera un delito de lavado de dinero (sección 3 de la Ley de Enmienda de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2013).

⁷⁴ *Ibíd.*, pág. 36.

[192] Informa asimismo que no se han efectuado solicitudes de cooperación técnica en virtud de la Convención.⁷⁵

4.2.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[193] El Comité, con base en la información que tuvo a su disposición, así como de lo expresado en la respuesta del Estado analizado al cuestionario en el sentido de que el Gobierno no ha formulado ni recibió de otros Estados Parte solicitudes relativas a la cooperación técnica mutua a que se refiere la Convención, formulará una recomendación a Antigua y Barbuda tendiente a considerar determinar y priorizar áreas específicas en las que crea que necesita la cooperación técnica de otros Estados Parte para fortalecer sus capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción y alienta a los demás Estados Parte a que redoblen esfuerzos para intercambiar cooperación técnica con Antigua y Barbuda sobre las formas y medios más efectivos para cumplir con los propósitos de la Convención (ver recomendación “a” en la sección 4.2.4 del Capítulo II (A) de este informe).

[194] De igual manera y con la misma finalidad de fortalecer las capacidades del Estado analizado de prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción, el Comité estima conveniente que Antigua y Barbuda considere desarrollar, con el apoyo de agencias de cooperación u organismos internacionales, programas y/o proyectos de cooperación técnica sobre los aspectos a los que se refiere la Convención y, en este sentido, formulará una recomendación (ver recomendación “b” en la sección 4.2.4 del Capítulo II (A) de este informe).

4.2.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[195] Teniendo en cuenta lo expresado en las dos secciones anteriores, el Estado analizado no suministra información sobre los resultados en este campo, por lo tanto, no es posible hacer una valoración integral al respecto. Consecuentemente, el Comité formulará las recomendaciones correspondientes (véanse las recomendaciones generales “b” y “c” del Capítulo II (A) de este informe).

4.2.4. Conclusiones y recomendaciones

[196] **Antigua y Barbuda ha considerado y adoptado medidas relativas a la cooperación técnica mutua con arreglo al Capítulo XIV de la Convención y de acuerdo con lo descrito y examinado en la sección 4.2 del Capítulo II “A” de este informe.**

[197] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que Antigua y Barbuda considere las siguientes recomendaciones.

- a) Identificar y priorizar áreas específicas en las cuales Antigua y Barbuda estima que necesita cooperación técnica de otros estados partes a fin de fortalecer su capacidad para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción (véase la sección 4.2.2 del Capítulo II (A) del presente informe).
- b) Desarrollar, con el apoyo de agencias de cooperación u organismos internacionales, programas y/o proyectos de cooperación técnica sobre los aspectos a los que se refiere la Convención (véase la sección 4.2.2 del Capítulo II (A) del presente informe).

5. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)

5.1. Existencia de disposiciones en el marco jurídico y/o de otras medidas

⁷⁵ *Ibíd.*, pág. 36.

[198] En su respuesta al cuestionario⁷⁶ Antigua y Barbuda ha indicado que en virtud de la Ley de Asistencia Mutua en Materia Penal de 1993 la autoridad central en la materia es el Procurador General, quien es el ministro responsable de los asuntos jurídicos.

[199] La respuesta indica asimismo que *“las solicitudes de asistencia enviadas a la autoridad central se remiten para su trámite al Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas y Lavado de Dinero (ONDCP), la cual elabora también cartas de solicitud que somete a la aprobación de dicha autoridad central”*.⁷⁷

5.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[200] El hecho de que Antigua y Barbuda haya designado al Procurador General y Ministro de Asuntos Jurídicos como autoridad encargada de presentar y recibir las solicitudes de asistencia judicial mutua es un paso adelante en la implementación de la Convención, debido a la importancia atribuida al cumplimiento de las obligaciones que se le han asignado.

[201] No obstante, la Secretaría General de la OEA no ha recibido notificación formal de la designación de la autoridad central para canalizar tanto la asistencia recíproca como la cooperación técnica mutua previstas en el marco de la Convención, lo cual facilitaría la comunicación y coordinación con las autoridades centrales de otros Estados Parte, para dichos propósitos. El Comité formulará una recomendación sobre este punto (véase la recomendación en la sección 5.4 del Capítulo II (A) de este informe).

5.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[202] Véase la sección 4.1.3.

5.4. Conclusiones y recomendaciones

[203] **Antigua y Barbuda ha considerado y adoptado ciertas medidas relativas a la designación de las autoridades centrales a las que se refiere el artículo XVIII de la Convención, tal como se describe y analiza en la sección 5 del Capítulo II (A) de este informe.**

[204] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que Antigua y Barbuda considere la siguiente recomendación.

- Informar a la Secretaría General de la OEA la designación de autoridades centrales, conforme a las formalidades previstas para ello (ver sección 5.2 del Capítulo II (A) de este informe).⁷⁸

6. RECOMENDACIONES GENERALES

[205] Con base en el análisis y los aportes realizados a lo largo de este informe, el Comité sugiere que Antigua y Barbuda considere las siguientes recomendaciones generales.

- a) Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos

⁷⁶ *Ibid.*, pág. 37.

⁷⁷ *Ibid.*, pág. 38.

⁷⁸ El Formulario para la Designación de Autoridades Centrales de la Convenciones Interamericanas se encuentra disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/OAS_form_designacion_autoridad_central.doc

considerados en el literal “A” del capítulo II de este informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.

- b) Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el literal “A” del capítulo II de este informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que estuvieran disponibles para la selección indicada por parte del Estado analizado, que ha sido publicado por la Secretaría Técnica del Comité, en página de Internet de la OEA, así como información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendación 6 “c” siguiente.
- c) Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en el literal “A” del capítulo II de este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo.

7. SEGUIMIENTO

[206] El Comité considerará los informes periódicos de Antigua y Barbuda sobre los avances en la implementación de las anteriores recomendaciones, en el marco de las reuniones plenarias del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento.

[207] Asimismo, el Comité analizará los avances en la implementación de las recomendaciones formuladas en el presente informe, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 31 y, siempre y cuando corresponda, 32 del Reglamento.

B) ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA LA CUARTA RONDA

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA CONVENCIÓN))

[208] Antigua y Barbuda cuenta con un conjunto de órganos de control superior ⁷⁹ con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas, entre los que cabe destacar los siguientes: la Comisión de Integridad, la Comisión del Servicio Público, la Procuraduría General (*Office of the Attorney General*); la Oficina del Director del Ministerio Público (*Office of the Director of Public Prosecutions*) y la Oficina del Director de Auditoría.

⁷⁹ La Metodología aprobada para la Cuarta Ronda de Análisis (documento SG/MESICIC/doc.289/11 rev.2) establece, en su Sección IV, al referirse al artículo III, párrafo 9 de la Convención (sobre órganos de control superior), lo siguiente: “*En relación con la disposición anterior, se analizará si las medidas consideradas por los Estados Parte al respecto están ‘destinadas a crear, mantener y fortalecer’ órganos de control superior con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas, tal como lo prevé el artículo III, párrafo 9 de la Convención.- Para lo anterior, en primer lugar, se tomará nota de los órganos de control superior del respectivo país, pertinentes para los propósitos de la citada disposición de la Convención de prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas.- En segundo lugar, teniendo en cuenta que en los Estados que integran el MESICIC existen numerosos órganos de control superior que tienen asignados los propósitos antes aludidos, cada país seleccionará 4 o 5 de dichos órganos, teniendo en cuenta su importancia institucional y que las funciones asignadas a los mismos cubran uno o varios de los propósitos de prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas que generen responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; y penal*”.

[209] A continuación se hace una breve descripción de los propósitos y funciones de los cinco órganos seleccionados por Antigua y Barbuda que serán analizados en el presente informe.

[210] La Comisión de Integridad se constituyó con arreglo al artículo 4 de la Ley de Integridad Pública de 2004.⁸⁰ Es responsable de recibir las declaraciones de quienes ocupan cargos públicos específicos, además de determinar la probidad, integridad y rendición de cuentas en su función pública y en cuestiones afines, tales como la investigación de denuncias por la vulneración de la Ley de Prevención de la Corrupción de 2014.⁸¹

[211] Entre otras funciones, la Comisión de Integridad tiene la facultad de presentar cargos en contra de funcionarios públicos por no presentación de sus declaraciones y en contra de todo aquel que incumpla el código de conducta previsto en el segundo anexo de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004. Además, dicha comisión puede remitir asuntos al Director del Ministerio Público a efectos de que se tomen las medidas correspondientes.

[212] La Comisión del Servicio Público, establecida por el artículo 99 de la Constitución, es responsable del nombramiento, promoción, transferencia, confirmación y remoción de quienes desempeñen u ocupen cargos públicos que se hallen dentro de su ámbito de competencia, además de ejercer el control disciplinario de los mismos.

[213] La Procuraduría General, establecida por el artículo 82 de la Constitución, es responsable de asegurarse de que el marco jurídico y administrativo de Antigua y Barbuda controle, combata y erradique la corrupción.

[214] La Oficina del Director del Ministerio Público, establecida por el artículo 87 de la Constitución, es responsable de todos los enjuiciamientos penales en Antigua y Barbuda.

[215] La Oficina del Director de Auditoría, establecida por el artículo 97 de la Constitución, es responsable de auditar los estados financieros de los ministerios, departamentos, juntas reglamentarias y órganos similares del gobierno.

1. LA COMISIÓN DE INTEGRIDAD

1.1 Existencia de un marco regulatorio y/o de otras medidas

[216] La Comisión de Integridad posee en su marco jurídico una serie de disposiciones y otras medidas relativas, entre otros aspectos, a los siguientes:

[217] Con respecto a los objetivos y alcance de sus funciones, el artículo 12(1) de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 dispone que entre las actividades de la Comisión se encontrarán las siguientes: recepción y retención de todas las declaraciones presentadas en virtud de la mencionada ley; la recepción e investigación de las denuncias relativas al incumplimiento o vulneración de las disposiciones de la citada ley o de la Ley de Prevención de la Corrupción de 2004; la realización de investigaciones que considere necesarias a fin de verificar o determinar la exactitud de las declaraciones presentadas con arreglo a lo dispuesto por la mencionada ley; la investigación de delitos de corrupción de acuerdo con la Ley de Prevención de la Corrupción de 2004 si estima que existen fundamentos para realizarla; el análisis de prácticas y procedimientos de las empresas públicas y departamentos del gobierno a fin de determinar si existen actos de corrupción, además de brindarles asesoramiento relativo a los cambios en las prácticas o procedimientos que puedan ser necesarios para eliminar dichos actos.

⁸⁰ Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ant_int_pub_lif_act_04.pdf

⁸¹ Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ant_prev_corr_act.pdf

[218] El artículo 12(2) de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 establece asimismo que en el desempeño de sus funciones la Comisión y su personal no estarán sujetos al control ni a la dirección de otra persona o autoridad. El artículo 13(1) de dicha norma legal dispone la Comisión tendrá las mismas facultades, derechos y privilegios que las comisiones de investigación (*commissions of inquiry*) designadas con arreglo a la Ley de Comisiones de Investigación, tales como la citación de testigos, las solicitudes de producción de libros, planes y documentos, así como el interrogatorio bajo juramento de testigos y de partes.

[219] La Comisión de Integridad está integrada por tres (3) comisionados, un presidente y otros dos miembros, a saber, un abogado que se haya desempeñado en el Commonwealth durante al menos 10 años, y un contador público que también cuente con por lo menos 10 años de experiencia profesional y sea conocidamente respetado en la comunidad.⁸² No podrán integrar la Comisión quienes: a) sean miembros de la Cámara de Representantes o del Senado; b) sean funcionarios públicos (salvo que ocupen en cargo de miembros de la Comisión); c) hayan sido funcionarios públicos o hayan ocupado un puesto público durante los tres años anteriores a su designación; d) hayan ocupado un puesto en un partido político en cualquier momento durante el período de cinco años anteriores a su designación; o e) tengan alguna otra causal de inhabilitación para desempeñarse como miembro de la Cámara de Representantes o del Senado.⁸³

[220] Los miembros de la Comisión son designados de oficio por el Gobernador General. Ocupan sus cargos durante un plazo que no supera los tres años y pueden ser designados nuevamente.⁸⁴ Las vacantes en la Comisión se producirán al término del período de designación de cada uno de sus integrantes; o ante la ausencia del comisionado durante tres reuniones consecutivas de la Comisión, salvo que haya contado con la autorización del Gobernador General; o si el comisionado acepta ser candidato en las elecciones de miembros de la Cámara de Representantes o es designado senador; o si se lo nombra para ocupar un cargo público; o ante su renuncia o separación del cargo.⁸⁵ El Gobernador General será el único que podrá separar del cargo a un comisionado tras la recomendación al efecto dictada por un tribunal seleccionado por él. La separación del cargo de un comisionado se deberá a su incapacidad de ejercer sus funciones o a su mala conducta.⁸⁶

[221] El artículo 30 de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 contiene disposiciones relativas a la Secretaría y al personal de la Comisión. De acuerdo con lo allí previsto, deberá proporcionarse a la Comisión el personal adecuado para el pronto y eficiente desempeño de sus funciones.⁸⁷ Se tratará de funcionarios públicos designados por la Comisión del Servicio Público.⁸⁸ Antes de asumir sus funciones la persona designada en virtud del artículo 30 o autorizada a desempeñar funciones según la citada ley deberá prestar juramento de fiel desempeño del puesto y de confidencialidad ante el presidente mediante la firma del formulario 1 del tercer anexo de dicha ley.⁸⁹ Asimismo, la Comisión está facultada para designar a los auditores que sean necesarios para examinar y verificar la exactitud de las declaraciones presentadas con arreglo a la citada ley o de las denuncias de irregularidades

⁸² Artículos 4(2) y (4) de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004.

⁸³ Artículo 5 de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004.

⁸⁴ Artículos 4(3) y (6) de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004.

⁸⁵ Artículo 8 de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004.

⁸⁶ Artículo 9 de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004.

⁸⁷ Artículo 30(3) de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004.

⁸⁸ Artículo 30(4) de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004. No obstante, el secretario es designado por el Gobernador general con arreglo a los términos y condiciones que este último determine [Artículo 30(1)].

⁸⁹ Artículo 30(5) de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004. Se aplica el mismo requisito a los integrantes de la Comisión de Integridad, quienes deben prestar y suscribir dicho juramento ante el Gobernador General [Artículo 4(5)].

financieras que surjan de un incumplimiento del código de conducta previsto en el segundo anexo de la norma legal.⁹⁰

[222] Durante la visita *in situ* los representantes de la Comisión de Integridad informaron que contaban únicamente con dos miembros del personal, además de un secretario y de un empleado subalterno. En la información adicional proporcionada en la respuesta al cuestionario⁹¹ el país analizado señaló asimismo que *“se suponía que se iba a anunciar un puesto para miembros de la Comisión de nivel superior, con realización de entrevistas en base a las cuales se efectuaría la selección. No obstante, en la actualidad la Comisión depende del Ministerio de Asuntos Jurídicos en lo relativo a la contratación de personal para ella.”*

[223] Con respecto a la existencia de procedimientos documentados para el desempeño de sus labores, el país analizado, en la información adicional proporcionada en la respuesta al cuestionario, manifiesta lo siguiente:⁹² *“La Comisión de Integridad carece de manuales correspondientes a las funciones de su personal, aunque cuando se designa a un empleado nuevo se le entrega una nota en la que constan sus funciones laborales. Debido a la falta de fondos y de recursos humanos dichas notas se redactan de forma tal de no consignar únicamente las funciones particulares del nuevo empleado sino para permitir también flexibilidad en el desempeño de las actividades diarias de la Comisión.”*

[224] Con respecto a su presupuesto, el artículo 27 de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 dispone que los fondos de la Comisión serán los que le asigne el Parlamento. Asimismo, el artículo 31 señala que todos los gastos incurridos por la Comisión a efectos de la aplicación de la mencionada ley se imputarán al Fondo Consolidado.

[225] En la información proporcionada en la respuesta al cuestionario el país analizado indica lo siguiente con respecto al presupuesto (o a la falta del mismo):⁹³ *“Como se ha señalado precedentemente la Comisión de Integridad, en su calidad de organismo autónomo, no ha recibido presupuesto alguno desde su constitución en 2006 para el desempeño de sus funciones como órgano de control superior. Desde ese año ha elaborado anualmente un presupuesto que le presenta todos los años al ministro. El Parlamento debería haber asignado fondos a la Comisión, sobre la base de un presupuesto preparado, a partir de su creación en 2006 a fin de permitirle una independencia absoluta del ministerio. De esa forma la Comisión podría mantenerse y, de ser necesario, se elaboraría otro presupuesto para la asignación de fondos a ella.”*

[226] Con respecto a los mecanismos de coordinación el artículo 25 de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 dispone que al término de una investigación sobre el incumplimiento del código de conducta previsto en ella la Comisión de Integridad deberá remitir el informe al Gobernador General y, si opina que las pruebas que tiene ante sí ameritan que el Director del Ministerio Público tome medidas en contra de la persona en cuestión, deberá remitirle también un ejemplar de dicho informe. Asimismo, el artículo 20(1) de la mencionada norma legal dispone que si la persona que tiene la obligación legal de presentar a la Comisión de Integridad una declaración de ingresos, activos y pasivos no lo hiciera, la Comisión enviará un informe a las siguientes autoridades a fin de que tomen las medidas correspondientes a) al Gobernador General, en el caso del presidente del senado y del de la cámara de representantes; b) al presidente del senado, en el caso de un senador; c) al presidente de la cámara de representantes, en el caso de un miembro de dicha cámara; d) a la comisión correspondiente, en el caso de una persona designada por una Comisión de Servicio o e) a la persona o autoridad facultadas para realizar

⁹⁰ Artículo 12(1) (e) de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004.

⁹¹ Respuesta de Antigua y Barbuda al cuestionario en el marco de la Cuarta Ronda, pág. 51. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_que_resp_track.pdf

⁹² Respuesta de Antigua y Barbuda al cuestionario en el marco de la Cuarta Ronda, pág. 53.

⁹³ Respuesta de Antigua y Barbuda al cuestionario en el marco de la Cuarta Ronda, pág. 51.

el nombramiento del cargo, en el caso de una persona que, por nombramiento, desempeñe su cargo en un órgano reglamentario.

[227] En materia de transparencia y rendición de cuentas el artículo 28 de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 dispone que la Comisión llevará una contabilidad adecuada de todas las sumas que se le asignen, así como de sus activos y pasivos. Dichas cuentas serán auditadas anualmente por el Director de Auditoría o por un auditor nombrado por el Gobernador General.

[228] Asimismo, el artículo 29 de la mencionada ley prevé que la Comisión elabore y presente anualmente al ministro responsable de la cartera de justicia y asuntos jurídicos, el 30 de junio o con anterioridad a dicha fecha, un informe de sus actividades correspondientes al año precedente, así como sus cuentas auditadas. Se presentará a la Cámara de Representantes un ejemplar de dicho informe, junto con el informe del auditor, durante la sesión posterior a la recepción del mismo.

[229] A efectos de mantener a la ciudadanía informada de sus actividades la Comisión de Integridad cuenta con un sitio en Internet,⁹⁴ el cual incluye su información de contacto, la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 y los formularios contenidos en dicha norma legal.

1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas.

[230] La Comisión de Integridad cuenta con un conjunto de disposiciones y/o de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales se describen en forma sucinta en la sección 1.1. No obstante, el Comité considera adecuado formular algunas observaciones con respecto a dichas disposiciones y/o medidas.

[231] En primer lugar el Comité nota el importante papel de la Comisión de Integridad en hacer frente a la corrupción en Antigua y Barbuda con arreglo a la Ley de Integridad en la Función Pública y a la Ley de Prevención de la Corrupción, ambas de 2004. Según se indicara en la sección 1.1, este órgano de control superior es responsable de la recepción, revisión e investigación de las declaraciones de ingresos, activos y pasivos que están obligados a presentar los funcionarios públicos, y de la recepción e investigación de denuncias de actos de corrupción realizados por servidores públicos, según lo dispuesto en la Ley de Prevención de la Corrupción de 2004, y de los incumplimientos del Código de Conducta previsto en la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004.

[232] Teniendo en cuenta que las normas de conducta de Antigua y Barbuda dirigidas a la prevención de conflictos de intereses y los mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento, así como sus sistemas de declaración de ingresos, activos y pasivos se examinan en mayor detalle en las secciones 1.1 y 2 del Capítulo II (A), respectivamente, el presente análisis se concentrará en las otras funciones de la Comisión de Integridad relativas a la lucha contra la corrupción y a la promoción de la integridad de los funcionarios públicos.

[233] En primer lugar, el Comité señala que a pesar de que este órgano de control superior se constituyó en 2006 para desempeñar importantes funciones de lucha contra la corrupción en Antigua y Barbuda, carece de presupuesto y de un personal adecuado. Esta situación fue destacada durante la visita *in situ* y expresada en los siguientes términos en la información adicional proporcionada en la respuesta al cuestionario.⁹⁵

[234] *“Al no existir financiamiento hay dificultades tales como la falta de recursos humanos y de otra índole. La oficina cuenta únicamente con un secretario y un empleado subalterno, lo cual no resulta*

⁹⁴ <http://integritycommission.gov.ag/>

⁹⁵ Respuesta de Antigua y Barbuda al cuestionario en el marco de la Cuarta Ronda, pág. 61.

suficiente y no lo será si dicha oficina debe funcionar de acuerdo al mandato de la Ley [de Integridad en la Función Pública]. Asimismo, la Comisión debería contar con personal suficiente para enviar a los ministerios a fin de sensibilizar a las personas y comunicar al público las funciones que posee”.

[235] Durante la visita *in situ* los representantes de la Comisión de Integridad informaron que desde 2006 dicho órgano elabora un presupuesto anual que presenta la Ministro de Justicia y Asuntos Jurídicos todos los años. Según señalan, el Parlamento debería haber asignado fondos a la Comisión desde su creación en 2006 sobre la base de un presupuesto elaborado a fin de permitirle una absoluta independencia de dicho ministerio. No obstante, eso no ha ocurrido, lo cual continúa afectando el pleno funcionamiento de la Comisión debido a la falta de financiamiento. También indicaron que el espacio y distribución de las oficinas de la Comisión no es propicio, dado que es posible que otras personas en el edificio escuchen conversaciones y deliberaciones privadas.

[236] Sobre la base de la información proporcionada durante la visita *in situ* el Comité expresa asimismo que desde por lo menos 2010 la Comisión no había funcionado en forma plena: uno de sus integrantes había renunciado ese año y otro falleció un año más tarde. El Presidente fue, durante cierto tiempo, el único Comisionado en funciones de la Comisión de Integridad; más tarde se enfermó gravemente y no pudo cumplir sus funciones. A esto se agrega que los otros dos miembros de la Comisión no fueron sustituidos y, debido a un error involuntario, el mandato del Presidente se vio incluso prorrogado un año más de su trienio correspondiente. Finalmente se tomó juramento a los nuevos comisionados el 1 de octubre de 2014.⁹⁶

[237] A la luz de lo anterior y teniendo en cuenta la importancia de este órgano de control superior, el Comité observa que el país analizado debería considerar el fortalecimiento de su marco institucional e independencia, además de proporcionarle a la Comisión de Integridad la infraestructura y los recursos presupuestarios y financieros necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones, dentro de los recursos disponibles. El Comité formulará recomendaciones al respecto (véase las recomendaciones 1.4.1 y 1.4.2 en la sección 1.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[238] En segundo lugar, conforme lo señalado en la sección 2.2 del Capítulo II (A), el Comité observa que la Comisión de Integridad carece de competencia para imponer sanciones administrativas a los funcionarios públicos que incumplan las disposiciones de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004.⁹⁷

[239] Por ejemplo, con respecto a las violaciones del Código de Conducta, el artículo 25 de la citada ley prevé que, al término de una investigación por incumplimiento de dicho código la Comisión de Integridad presente un informe al Gobernador General y al Director del Ministerio Público si opina que las pruebas que posee ameritan que el Director tome medidas en contra de la persona en cuestión. En este sentido la Comisión está limitada a la investigación de los incumplimientos del Código y a la remisión de los resultados de sus investigaciones a las mencionadas autoridades, careciendo de facultades para imponer sanciones.

[240] Asimismo, no existe el requisito de que el resultado de las investigaciones se comunique a la correspondiente cámara parlamentaria, comisión de servicio, junta u otra autoridad a efectos de que tomen las medidas disciplinarias adecuadas e informen a la Comisión de Integridad.

[241] El Comité estima que la utilización de sanciones disciplinarias sería un mecanismo útil que coadyuvaría a asegurar que los funcionarios públicos cumplieran con la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004. El Comité cree asimismo que el país analizado debería considerar el requisito de que la

⁹⁶ Los nuevos comisionados son: el abogado Radford Hill (presidente), el contador Neil Coates y Pastor Ivor Davis.

⁹⁷ Véase nota al pie 5 supra.

Comisión de Integridad informe los resultados de sus investigaciones a la correspondiente cámara parlamentaria, comisión de servicio, junta u otra autoridad a efectos de que tomen las medidas disciplinarias adecuadas e informen el resultado a la Comisión de Integridad. El Comité formulará recomendaciones al respecto (véanse las recomendaciones 1.4.3 y 1.4.4 de la sección 1.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[242] En tercer lugar, durante la visita *in situ*, los representantes de la Comisión de Integridad indicaron que nunca se habían promulgado las normas reglamentarias correspondientes a la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004. Al respecto el Comité observa que, por ejemplo, no existen procedimientos escritos que evidencien los mecanismos de iniciación y tramitación de las investigaciones tras la recepción de denuncias, ni tampoco relativos a la forma de recepción de las mismas.

[243] Dada la importancia de la normativa en el funcionamiento de la Comisión, eso ayudaría a fortalecer sus deberes y responsabilidades. El país analizado debería considerar el dictado de las normas reglamentarias de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 1.4.5 en la sección 1.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[244] En cuarto lugar el Comité observa que la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 no le confiere expresamente a la Comisión de Integridad la facultad de oficio de realizar investigaciones por incumplimientos del código de conducta; según los arts. 12(1) (b) y 22 de la citada ley únicamente puede investigar denuncias que le presente el público.

[245] En este sentido el Comité estima que es esencial considerar fortalecer la Comisión de Integridad mediante el otorgamiento de facultades para la realización de investigaciones de oficio de forma que pueda hacer cumplir eficazmente la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 1.4.6 en la sección 1.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[246] En quinto lugar el Comité estima que el artículo 22 de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 impone una carga excesiva al reclamante o denunciante, sin garantías razonables de anonimidad ni de protección de la identidad. El reclamante debe presentar una denuncia por escrito e incluir, entre otros datos, los nombres y domicilios de quienes participaron en el incumplimiento del Código de Conducta, además de proporcionar pruebas que justifiquen la denuncia, como documentos y declaraciones juradas.

[247] En vista de lo anterior el Comité sugiere que el país analizado considere la modificación de la citada ley teniendo en cuenta que, en general, los ciudadanos carecen de los medios suficientes para producir las pruebas adecuadas necesarias. Además, si bien el tema de los sistemas de protección a funcionarios públicos y a ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción se examinará en el Informe de Antigua y Barbuda correspondiente a la Segunda Ronda del MESICIC, el Comité estima que el país analizado podría considerar el análisis de los parámetros previstos en la “*Ley Modelo de la OEA para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a Denunciantes y Testigos*”⁹⁸ aprobada por el Comité de Expertos del MESICIC. El Comité formulará una

⁹⁸ Esta ley modelo fue el resultado de un amplio proceso de consulta realizado en el marco de un programa de cooperación elaborado por la Secretaría General de la OEA mediante el Departamento de Cooperación Jurídica de la Secretaría de Asuntos Jurídicos en su calidad de Secretaría Técnica del MESICIC el cual, con la participación de un consultor internacional que redactó la primera versión, fue debatido en un taller celebrado en Lima en abril de 2011 al que asistieron funcionarios de Perú, Canadá, Chile, México y Estados Unidos. Los resultados de dicho taller se presentaron en la Segunda Conferencia sobre avances y desafíos en la cooperación hemisférica contra la corrupción, celebrada en Cali, Colombia, en junio del mismo año. La ley modelo se puso ulteriormente a consideración de los miembros del Comité de Expertos del MESICIC y de las organizaciones de la sociedad civil en la sesión plenaria del 22 de marzo de 2013 en el marco de la decimoprimer reunión del Comité que tuvo lugar

recomendación al respecto (véase la recomendación 1.4.7 en la sección 1.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[248] En sexto lugar, el Comité toma nota de que el artículo 29(1) de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 exige que la Comisión de Integridad elabore y presente informes anuales de sus actividades. No obstante, durante la visita *in situ* los representantes informaron que debido a la falta de presupuesto hasta la fecha no se había elaborado ningún informe.

[249] Asimismo, en la información adicional proporcionada en la respuesta al cuestionario,⁹⁹ el país analizado deja constancia de que “*Los informes anuales elaborados por la Comisión se hacen públicos después de que el Secretario Permanente o el Ministro de Asuntos Jurídicos los hayan presentado al Parlamento*”.

[250] En vista de lo anterior y teniendo en cuenta la importancia de la transparencia y de la rendición de cuentas, el Comité estima que el país analizado debería considerar la elaboración y publicación de los informes anuales de la Comisión de Integridad en el sitio en Internet de esta última¹⁰⁰ y en el sitio oficial del gobierno¹⁰¹ una vez que se hayan presentado al Parlamento. El Comité estima asimismo que dichos informes deberían consignar detalles de las labores realizadas por la Comisión relativas a las funciones que desempeña en virtud de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004, tales como las de cumplimiento, investigación y educación pública, así como todas las cuestiones de índole jurídica de que se ocupa. El Comité formulará recomendaciones al respecto (véanse las recomendación 1.4.8 y 1.4.9 en la sección 1.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[251] En séptimo lugar el Comité observa que aunque el sitio de Internet de la Comisión se encuentra en funcionamiento,¹⁰² contiene información de carácter muy limitado y no parece ser actualizado (por ejemplo, aún consigna los nombres de los tres miembros originales de la Comisión). A pesar de que se proporciona información de contacto, no se brindan indicaciones ni orientaciones respecto de la forma de presentar denuncias o de alegaciones de corrupción ante la Comisión. Tampoco hay información de las tareas que realiza la Comisión.

[252] Además, salvo que se proporcione la dirección electrónica del sitio en Internet de la Comisión, no resulta de fácil acceso ya que no hay vínculos a él en el Directorio Oficial de Sitios en Internet del Gobierno (*Official Government Websites Directory*).¹⁰³

[253] En vista de lo anterior y teniendo en cuenta la importancia de hacer público el sitio en Internet de la Comisión de Integridad, así como los demás canales para las denuncias de incumplimientos del código de Conducta y de la Ley de Prevención de la Corrupción de 2004, y a efectos de incentivar su uso y de brindar orientación en cuanto a la forma de presentar dichas denuncias, el Comité formulará recomendaciones al respecto (véanse las recomendaciones 1.4.10 y 1.4.11 en la sección 1.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[254] En octavo lugar, durante la visita *in situ* los representantes informaron que desde 2007 no se han realizado capacitaciones ni campañas de sensibilización para funcionarios públicos relativas a las tareas de la Comisión ni a la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 ni a la Ley de Prevención de la

en la sede de la OEA en Washington, D.C., del 18 al 22 de marzo de 2013. Para más información, ver: http://www.oas.org/juridico/PDFs/model_law_reporting.pdf

⁹⁹ Respuesta de Antigua y Barbuda al cuestionario en el marco de la Cuarta Ronda, pág. 58.

¹⁰⁰ <http://integritycommission.gov.ag/>

¹⁰¹ <http://www.ab.gov.ag/>

¹⁰² <http://integritycommission.gov.ag/>

¹⁰³ http://www.ab.gov.ag/article_details.php?id=359

Corrupción de 2004. Al respecto Antigua y Barbuda manifestó lo siguiente en la información adicional proporcionada en la respuesta al cuestionario:¹⁰⁴

[255] *“No hay campañas en curso para sensibilizar (sic) al público sobre las funciones de la Comisión, salvo en la respuesta que se brinda a quienes llaman a efectos de obtener aclaraciones para elaborar y presentar declaraciones. Sin embargo (sic) en 2007 hubo programas radiales y televisivos en el Servicio Público de Información (Government Information Service) a fin de que los funcionarios públicos a quienes se les aplica el primer anexo de la citada ley se familiaricen con ella y con las obligaciones que les impone (...)*

[256] *(...) se han impreso afiches con el código de conducta del segundo anexo de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004, los cuales se enviaron a las oficinas públicas para ser exhibidos (...)*”.

[257] Dada la importancia de las campañas de concientización y capacitación de los servidores públicos y de la ciudadanía en general, el Comité estima que el país analizado debería considerar capacitar a los funcionarios públicos de manera permanente y constante en lo relativo a sus responsabilidades de cumplimiento de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004, además de contar con programas de extensión al público acerca de su labor. El Comité formulará recomendaciones al respecto (véanse las recomendaciones 1.4.12 y 1.4.13 en la sección 1.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[258] Por último, con respecto a los manuales de descripción de puestos y clasificación de puestos de su personal, el Comité considera que, a pesar del hecho de que a los empleados nuevos se les entrega una carta de puesto en la que se indican sus funciones, no existe un sistema adecuado de descripciones de puestos o clasificación de puestos. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 1.4.14 en la sección 1.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

1.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas.

[259] En la información adicional proporcionada en la respuesta al cuestionario,¹⁰⁵ el país analizado ha indicado lo siguiente en cuanto a la labor de la Comisión de Integridad.

[260] *“Si bien la Comisión no tiene investigaciones en curso, en 2008 hubo una denuncia que fue investigada aunque no se había cometido ilícito alguno ni se había configurado un incumplimiento del código de ética. Se recibieron otras dos denuncias durante el año pasado pero no hubo fundamentos para la realización de una investigación plena ni para la formulación de una acusación después de efectuarse las indagaciones preliminares (...)*

[261] *No se dispone de datos estadísticos dado que no se han realizado investigaciones ni presentado cargos contra nadie”.*

[262] Teniendo en cuenta que la Comisión de Integridad se constituyó en 2006, el Comité estima que la inexistencia de resultados revela que la falta de recursos humanos y financieros adecuados le ha impedido funcionar según el mandato que le confiere la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004.

[263] Al respecto el Comité reitera lo expresado en la sección 2.2. supra y en la recomendación g) de la sección 2.4 del Capítulo II (A) del presente informe en lo relativo a la necesidad de que el país analizado considere dotar a la Comisión de Integridad de auditores e investigadores que puedan asistirle en la tarea de verificar adecuadamente la exactitud de las declaraciones de ingresos, activos y pasivos que se presenten en virtud de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004.

¹⁰⁴ Respuesta de Antigua y Barbuda al cuestionario en el marco de la Cuarta Ronda, págs. 55 y 59.

¹⁰⁵ *Ibíd.*, pág. 60.

[264] Asimismo, conforme lo dispuesto en el artículo 12(1) (e) de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004, el Comité estima que la Comisión de Integridad se beneficiaría de la asistencia de investigadores y analistas de fraude certificados a efectos de investigar las irregularidades financieras que surjan de incumplimientos del código de conducta o de las disposiciones de la Ley de Prevención de la Corrupción de 2004.

[265] El Comité deja constancia de que debido a la falta de fondos y de recursos humanos la Comisión no está desempeñando sus funciones de análisis de las prácticas y procedimientos de las empresas públicas y de los departamentos del gobierno a fin de determinar la existencia de actos de corrupción y de brindarles asesoramiento relativo a los cambios en las prácticas o procedimientos que puedan ser necesarios para eliminar dichos actos.¹⁰⁶

[266] En vista de lo anterior el Comité formulará recomendaciones al respecto (véanse las recomendaciones 1.4.15, 1.4.16 y 1.4.17 en la sección 1.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

1.4. Conclusiones y recomendaciones

[267] Con base en el análisis integral de la Comisión de Integridad que ha sido realizado, el Comité ofrece las siguientes conclusiones y recomendaciones.

[268] Antigua y Barbuda no ha adoptado medidas dirigidas a mantener y fortalecer a la Comisión de Integridad como órgano de control superior, conforme lo indicado en la sección 1 del literal “B” del Capítulo II del presente informe.

[269] En vista de los comentarios formulados en la sección indicada precedentemente el Comité sugiere que el país analizado considere las siguientes recomendaciones.

- 1.4.1 Brindar a la Comisión de Integridad los correspondientes recursos presupuestarios, humanos y de infraestructura necesarios para el desempeño adecuado de su función con aseguramiento de su independencia, dentro de los recursos disponibles (véase la sección 1.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 1.4.2 Asegurarse de que la Comisión de Integridad cuente con independencia presupuestaria (véase la sección 1.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 1.4.3 Considerar otorgar a la Comisión de Integridad, con sujeción a la Constitución del país y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, competencia para imponer sanciones administrativas por incumplimientos de la Ley de Integridad en la Función Pública, además de conservar los resultados de dichas sanciones que permitan una evaluación integral de su efectividad (véase la sección 1.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 1.4.4 Considerar la modificación de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 a efectos de que exija que la Comisión de Integridad presente también informes de sus investigaciones a la correspondiente cámara parlamentaria, comisión de servicio, junta u otra autoridad a efectos de que puedan tomar las medidas disciplinarias adecuadas y comunicar el resultado a dicha comisión (véase la sección 1.2 del Capítulo II (B) del presente informe).

¹⁰⁶ Artículo 12(1) (f) and (g) de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004.

- 1.4.5 Dictar normas regulatorias de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 a efectos de, entre otros elementos, establecer procedimientos escritos sobre los mecanismos de recepción de denuncias por parte de la Comisión y sobre las formas de iniciar y tramitar las investigaciones (véase la sección 1.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 1.4.6 Considerar otorgar a la Comisión de Integridad la autoridad para realizar investigaciones de oficio de forma tal de que pueda hacer cumplir en forma efectiva la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 (véase la sección 1.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 1.4.7 Considerar la modificación del artículo 22 de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 a fin de reducir la carga de la prueba exigida para presentar denuncias ante la Comisión de Integridad, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la “*Ley Modelo de la OEA para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a Denunciantes y Testigos*”¹⁰⁷ (véase la sección 1.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 1.4.8 Asegurarse de que la Comisión de Integridad elabore sus informes anuales y los publique en su sitio en Internet y en el sitio oficial del gobierno una vez que se presenten al Parlamento (véase la sección 1.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 1.4.9 Asegurarse de que los informes anuales de la Comisión de Integridad consignen los detalles de las labores realizadas respecto de todas sus funciones en virtud de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004, tales como las de cumplimiento, investigación y educación pública, así como todas las cuestiones de índole jurídica de que se ocupa (véase la sección 1.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 1.4.10 Actualizar y mejorar el sitio de la Comisión de Integridad en Internet, entre otros aspectos, mediante información sobre su labor, sus informes anuales y los informes de los auditores. Asimismo, proporcionar orientación en el sitio sobre los mecanismos para la presentación a la Comisión de denuncias, así como sobre la forma en que los interesados pueden hacer un seguimiento de la tramitación de las mismas (véase la sección 1.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 1.4.11 Publicitar ampliamente la información de contacto y el sitio Web de la Comisión de Integridad en el sitio oficial en Internet del Gobierno de Antigua y Barbuda¹⁰⁸ (véase la sección 1.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 1.4.12 Establecer e implementar campañas de sensibilización al público a efectos de publicitar la labor que realiza la Comisión de Integridad para fomentar la integridad en la función pública y combatir la corrupción, incluyéndose un programa de información de los mecanismos por los cuales pueden presentarse denuncias relativas a presuntos incumplimientos del código de conducta y a actos de corrupción (véase la sección 1.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 1.4.13 Establecer un programa de la Comisión de Integridad a fin de asegurar que se brinde capacitación permanente y constante a los empleados públicos en lo relativo a sus deberes

¹⁰⁷ Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/model_law_reporting.pdf

¹⁰⁸ <http://www.ab.gov.ag/>

y obligaciones en virtud de la Ley de Integridad Pública de 2004, además de asegurarse de la puesta en práctica de programas de extensión (véase la sección 1.2 del Capítulo II (B) del presente informe).

- 1.4.14 Implementar un manual de descripción de puestos y clasificación de puestos para el personal de la Comisión de Integridad (véase la sección 1.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 1.4.15 Dotar a la Comisión de Integridad de investigadores y analistas de fraude certificados a efectos de investigar las irregularidades financieras que surjan de incumplimientos del código de conducta o de la Ley de Prevención de la Corrupción de 2004 (véase la sección 1.3 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 1.4.16 Asegurarse de que la Comisión de Integridad cuente con los recursos adecuados para cumplir sus funciones de análisis de prácticas y procedimientos de empresas públicas y departamentos del gobierno a fin de determinar si existen actos de corrupción, además de brindarles asesoramiento relativo a los cambios en las prácticas o procedimientos que puedan ser necesarios para eliminar dichos actos (véase la sección 1.3 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 1.4.17 Mediante la coordinación con los órganos correspondientes y en los casos en que sea aplicable, conservar y publicar los resultados del número de investigaciones iniciadas, así como de las que se hallan en curso, de las suspendidas por el motivo que fuere, de las archivadas por estar prescritas, de las archivadas sin que se haya llegado a una decisión sobre el fondo del caso investigado, de las que se encuentren en estado de dictar la decisión sobre el fondo del caso investigado y de las que se hayan remitido al órgano competente a efectos de que se tome dicha decisión (véase la sección 1.3 del Capítulo II (B) del presente informe).

2. LA COMISION DEL SERVICIO PÚBLICO (PSC)

2.1. Existencia de disposiciones en el marco jurídico y/o de otras medidas

[270] La Comisión del Servicio Público (*Public Service Commission; PSC*) tiene un conjunto de disposiciones en su marco jurídico, además de otras medidas, que se refieren, entre otros aspectos, a lo siguiente.

[271] La Comisión del Servicio Público (PSC) fue creada por la Constitución de Antigua y Barbuda.¹⁰⁹ La PSC es responsable del nombramiento, ascenso, transferencia y separación del cargo de los funcionarios públicos que se hallan en su esfera de competencia, además de ejercer el control disciplinario respecto de ellos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la Constitución.¹¹⁰

¹⁰⁹ Artículo 99(1) de la Constitución.

¹¹⁰ El artículo 100 (3) de la Constitución establece la siguiente excepción: a. todo cargo al que se le apliquen las disposiciones del artículo 101 de la Constitución (como Secretario de Gabinete, Secretario Permanente, jefe o subjefe de un departamento de gobierno); b. el puesto de Director del Ministerio Público; c. el puesto de Director de Auditoría; d. el puesto de Procurador General; e. el puesto de Supervisor de Elecciones; f. todo cargo al que se le apliquen las disposiciones del artículo 103 de la Constitución (aquellos que se encuentren bajo la égida de la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos (*Judicial and Legal Services Commission*)); g. todo cargo en la fuerza policíaca.

[272] La independencia de la PSC se prevé en el artículo 99(11) de la Constitución en los siguientes términos: “*La Comisión, en el ejercicio de las funciones que le confiere la presente Constitución, no estará sujeta a la dirección ni al control de ninguna otra persona ni autoridad.*” Además, el artículo 99(12) de dicha norma dispone que la PSC tiene facultades de regulación de sus propios procedimientos. Al respecto, la PSC ha aprobado el Reglamento del Servicio Público de 1967,¹¹¹ así como las Directivas del Servicio Público de 1967.¹¹²

[273] Con respecto a la composición de la PSC, el artículo 99(1) de la Constitución dispone que estará integrada por un presidente y vocales, que serán al menos dos pero no más de seis,¹¹³ y serán designados por el Gobernador General con el asesoramiento del Primer Ministro tras consultas con el líder de la oposición.

[274] Los miembros de la PSC podrán ser separados de sus cargos únicamente ante la incapacidad de desempeño de sus funciones (ya sea por motivos de enfermedad física o mental o por alguna otra causa) o por inconducta.¹¹⁴ La separación del cargo de un miembro de la Comisión podrá efectuarse ante la solicitud al efecto presentada por el Primer Ministro al Gobernador General, quien nombrará un tribunal para que se encargue de la investigación correspondiente y le comunicará si procede la dimisión del comisionado.¹¹⁵

[275] Con arreglo a los artículos 9 (1) y (2) del Reglamento N° 13 de 1967 de la Comisión del Servicio Público,¹¹⁶ sus decisiones se tomarán por mayoría de sus integrantes, debiéndose registrar las disidencias.

[276] Al respecto, y según el artículo 107 de la Constitución, las decisiones de la PSC relativas a los procesos disciplinarios podrán apelarse ante la Junta de Apelaciones del Servicio Público¹¹⁷ o ante el sistema judicial.

[277] Durante la visita *in situ* los representantes de la Comisión del Servicio Público informaron que además del presidente y los seis vocales la PSC cuenta con 5 empleados administrativos: un secretario, un oficial ejecutivo, un auxiliar principal, un auxiliar subalterno y un suboficial clase III.

[278] En materia de capacitación los representantes de la PSC informaron durante la visita *in situ* que la Comisión no la brindaba. La capacitación es proporcionada por el Departamento de Capacitación del Gobierno de Antigua y Barbuda.

[279] Con respecto a los manuales, en la información adicional proporcionada en la respuesta al cuestionario,¹¹⁸ el país analizado manifestó que “*no existen manuales que detallen las funciones del personal, aunque todo aquel designado para ocupar un puesto en el sector público recibe una nota en la que se consignan sus funciones laborales. Es posible que se introduzcan dichos manuales durante el proceso de transformación del sector público, que se encuentra en sus etapas iniciales*”.

[280] Con respecto a los mecanismos de coordinación, en la información adicional proporcionada en la respuesta al cuestionario¹¹⁹ se deja constancia de que “*la Comisión del Servicio Público ejerce sus*

¹¹¹ Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_pub_serv_comm_reg_1967.pdf

¹¹² Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_pub_serv_direc.pdf

¹¹³ Según el artículo 99(2) de la Constitución, no estarán habilitados para ser designados miembros de la comisión: a) los funcionarios públicos; b) los miembros de cualquiera de las dos cámaras parlamentarias; c) los menores de 25 años o d) los no residentes de Antigua y Barbuda.

¹¹⁴ Artículo 99(4) de la Constitución.

¹¹⁵ Artículo 99(5) and (6) de la Constitución.

¹¹⁶ Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_pub_serv_comm_reg_1967.pdf

¹¹⁷ Véanse los artículos 106 a 108 de la Constitución y el Reglamento de 1999 de la Junta de Apelaciones del Servicio Público.

¹¹⁸ Respuesta de Antigua y Barbuda al cuestionario en el marco de la Cuarta Ronda, pág. 53.

¹¹⁹ *Ibíd.*, p. 43.

funciones con arreglo al artículo 100 (1) de la Constitución, conforme lo señalado precedentemente, junto con el Jefe de Establecimientos (Chief Establishment Officer), quien es el principal funcionario de enlace entre los Secretarios Permanentes de los diversos departamentos públicos, el gobierno y la Comisión (artículo 4 de las Directivas N° 12 de 1967 del Servicio Público). Entre otros, los deberes del Jefe de Establecimientos son asistir a las reuniones de la Comisión del Servicio Público y mantenerla plenamente informada de los requisitos de dicho servicio (artículo 5 del Reglamento N° 13 de 1967 del Servicio Público)”.

[281] Los procedimientos disciplinarios aplicables a los funcionarios públicos se consignan en el segundo anexo del Reglamento N° 13 de 1967 de la Comisión del Servicio Público. El artículo 9 de dicho anexo faculta al Secretario Permanente a entablar procedimientos disciplinarios contra un funcionario público por faltas de conducta, que si resulta comprobada sería causal de su separación del cargo. El Secretario Permanente ordenará una investigación preliminar tras la cual, y conforme los resultados que se obtengan, consultará al Jefe de Establecimientos.¹²⁰

[282] Si el Jefe de Establecimientos considera que se han configurado cargos en contra del funcionario público y tras consultar al Procurador General en cuanto a los términos de los mismos, remitirá al funcionario acusado un documento en el que se consignent los cargos que se le formulan y un sumario de los alegatos, si los cargos no resultan claros. El acusado presentará por escrito con anterioridad a la fecha indicada los motivos exculpatorios que esgrime.¹²¹

[283] Según la información presentada durante la visita *in situ*,¹²² la PSC celebra una audiencia en la que el acusado podrá contar con representación letrada y presentar pruebas y testigos a efectos de respaldar sus argumentos. El Ministerio de Asuntos Jurídicos representará, respectivamente, al Secretario Permanente o al Jefe de Departamento en la audiencia, y podrá también presentar pruebas y testigos para justificar los cargos formulados en contra del funcionario público acusado. Tras ello la Comisión tomará una decisión basada en lo presentado. La Comisión podrá dimitir o degradar de categoría al funcionario, o bien aplicarle alguna otra forma de sanción, como la reducción de su rango y/o de su salario; la suspensión, aplazamiento o retención de aumentos; o amonestación.¹²³ La decisión se comunica al Secretario Permanente a través del Oficial de Establecimientos, quien la pondrá en práctica.

[284] El artículo 2 del segundo anexo del Reglamento N° 13 de 1967 de la Comisión del Servicio Público dispone que si un tribunal incoa procesos penales en contra de un funcionario público, no se realizará la tramitación de su dimisión por las causales consagradas en el cargo penal hasta tanto se produzca la conclusión del proceso penal y la determinación de las apelaciones del mismo.

[285] El artículo 3 del citado anexo segundo dispone que, una vez absuelto judicialmente del cargo penal el funcionario público no podrá ser dimitido ni sancionado por el cargo del que fue absuelto, aunque podrá separárselo del cargo o penalizárselo por cargos que surjan de su conducta en el asunto, salvo que los cargos planteen esencialmente los mismos asuntos por los cuales fue absuelto.

[286] Con respecto a la forma en que se aseguran los recursos presupuestarios para sus operaciones, durante la visita *in situ* los representantes de la PSC explicaron que los recursos presupuestarios que

¹²⁰ Con arreglo artículos 14 y 15 de la Ley del Servicio Público (*Civil Service Act*), el Jefe de Establecimientos es el Jefe del Departamento de Establecimientos quien, entre otras, tiene las siguientes responsabilidades: a) llevar la clasificación de los puestos del servicio público, b) administrar la normativa correspondiente al servicio público y c) disponer y establecer procedimientos de consulta y negociación entre el Departamento de Establecimientos y la correspondiente asociación reconocida relativos a: i) la clasificación de funcionarios públicos, ii) laborales, iii) remuneraciones y iv) los términos y condiciones del empleo.

¹²¹ Artículo 9 del Reglamento N° 13 de 1967 de la Comisión del Servicio Público.

¹²² Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_pub_ser_com_bri_pre_pur_fct_stru.pdf

¹²³ Artículo 8(1) del Reglamento N° 13 de 1967 de la Comisión del Servicio Público.

necesita la Comisión se aseguran mediante la presentación de estimados anuales a la Oficina de Presupuestos del Ministerio de Finanzas. Los montos de los fondos asignados se fijan mediante asignaciones presupuestarias que realiza el Ministerio de Finanzas y son determinados por la situación fiscal del gobierno y por las tendencias de gastos de la oficina a lo largo de los años. Se espera que las oficinas no superen las asignaciones presupuestarias. Los montos finales que se asignan son establecidos por el Ministerio de Finanzas. Los estimados anuales se presentan en octubre del año anterior a efectos de ser implementados una vez aprobado el presupuesto para el año siguiente.

[287] Según la información solicitada y recibida durante la visita *in situ*, el presupuesto total anual aprobado y asignado a la PSC durante el quinquenio pasado es el siguiente: (en dólares del Caribe oriental¹²⁴): EC\$390.793 (2010); EC\$406.845 (2011); EC\$409.583 (2012); EC\$ 423.591 (2013) y EC\$ 419.499 (2014).¹²⁵

[288] En lo relativo a cuestiones de transparencia y rendición de cuentas, el artículo 99(15) de la Constitución exige que la PSC elabore un informe anual de sus actividades que enviará al Gobernador General, quien a su vez lo remitirá para su presentación ante ambas cámaras del Parlamento.¹²⁶

2.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[289] La Comisión del Servicio Público cuenta con un conjunto de disposiciones y/o de otras medidas que son pertinentes para la promoción de los propósitos de la Convención, algunas de las cuales se describieron brevemente en la sección 2.1. No obstante, el Comité considera adecuado formular ciertas observaciones al respecto.

[290] En primer lugar el Comité observa que, según el Reglamento de la Comisión del Servicio Público de 1967 la responsabilidad administrativa y disciplinaria no es plenamente independiente de la responsabilidad penal.

[291] Por ejemplo, según el artículo 2 del segundo anexo del Reglamento N° 13 de 1967 de la Comisión del Servicio Público, cuando un tribunal formule cargos en contra de un funcionario público, no podrán entablarse procesos administrativos basados en la misma causal hasta tanto se produzca la conclusión del proceso penal y la determinación de las apelaciones del mismo. Asimismo, el artículo 3 no permite la dimisión ni la sanción administrativa del funcionario público si el cargo penal es esencialmente el mismo por el que recibió su absolución judicial.

[292] Al respecto, durante la visita *in situ*, los representantes de la Comisión mencionaron que en situaciones en las que el Secretario Permanente ha convocado a la policía y tramita ante los tribunales una causa penal relativa a un funcionario la Comisión no puede adoptar medida alguna hasta la conclusión del proceso penal, que puede llevar años.¹²⁷

¹²⁴ 1 dólar estadounidense = aproximadamente 2,7 dólares del Caribe oriental (al 17 de octubre de 2014).

¹²⁵ Puede consultarse la información completa del presupuesto de la PSC para cada uno de estos años: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_atg.htm

¹²⁶ Durante la visita *in situ* la PSC puso a disposición copias de sus informes anuales para los años 2010, 2011 y 2012. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_atg.htm

¹²⁷ Véase, por ejemplo, “The Public Service Commission - Brief Presentation on its Purpose, Functions, and Structure” (*La Comisión del Servicio Público: breve presentación de su propósito, funciones y estructura*), disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_pub_ser_com_bri_pre_pur_fct_stru.pdf

[293] Asimismo, durante la vista *in situ* uno de los comisionados de la PSC expresó que muchas de las normas legales y regulatorias de aquélla eran arcaicas y debían ser actualizadas a la brevedad posible.¹²⁸

[294] En vista de lo anterior el Comité considera que el país analizado debería considerar las medidas necesarias para que los procedimientos disciplinarios y administrativos derivados de actos que pudieran generar responsabilidades penales no se encuentren subordinados a los procesos penales. El Comité considera asimismo que debería modificarse el Reglamento de 1967 de la Comisión del Servicio Público a efectos de prever expresamente que no podrá impedirse la formulación de procedimientos administrativos en contra de un funcionario público absuelto de cargos penales respecto de un presunto acto de inconducta implícito en dichos cargos.

[295] El Comité estima que el condicionamiento pleno de los procedimientos administrativos y disciplinarios y de la responsabilidad a las normas de prescripción y a los resultados de los procesos penales puede generar la ineficacia de dichos procedimientos. En otras palabras, si los procesos penales prescriben, son anulados o brindan una exoneración, la responsabilidad administrativa y disciplinaria dejaría de existir. El Comité formulará recomendaciones al respecto (véanse las recomendaciones 2.4.1 y 2.4.2 en la sección 2.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[296] En segundo lugar, el Comité deja constancia de lo siguiente, expresado en la información adicional proporcionada en la respuesta al cuestionario:¹²⁹ *“Las denuncias relativas a los funcionarios públicos se presentan ante el Secretario Permanente y, dependiendo de su gravedad, se transmiten a su vez a la Comisión del Servicio Público conforme lo indicado precedentemente. Asimismo, los Secretarios Permanentes pueden, por sí, tratar internamente las denuncias”*.

[297] Durante la visita *in situ* los representantes de la PSC informaron que la Comisión constató que los Secretarios Permanentes no estaban siguiendo el procedimiento relativo a los funcionarios acusados de actos de robo; en otras palabras, algunos de ellos permitían que los servidores públicos reintegraran las sumas sustraídas en lugar de convocar a la policía o denunciar el hecho al Jefe de Establecimientos, quien a su vez debería comunicarse con el Departamento de Asuntos Jurídicos para formular cargos.¹³⁰

[298] En vista de esta situación el Comité observa que deberían existir controles y reglas más claras respecto de las facultades discrecionales que poseen los Secretarios Permanentes para decidir cuándo denunciar ante la Comisión del Servicio Público un asunto de carácter penal o disciplinario. El Comité estima asimismo que debería prohibirse que los Secretarios Permanentes traten internamente las denuncias de presuntos delitos, especialmente actos de corrupción, fraude o malversación de fondos. En lugar de ello debería exigírseles la pronta denuncia de tales actos a los órganos correspondientes, como el Departamento de Establecimientos, la Comisión del Servicio Público, la Comisión de Integridad o la policía. El Comité formulará recomendaciones al respecto (véanse las recomendaciones 2.4.3 y 2.4.4 en la sección 2.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[299] En tercer lugar, el Comité deja constancia de que una de las dificultades señaladas durante la visita *in situ* fue la de las demoras en la Procuraduría General antes de la formulación de los cargos para que la Comisión pueda celebrar la audiencia sobre cuestiones disciplinarias.

¹²⁸ Véase, por ejemplo, “Concerns Given by the Acting Chairman at OAS Seminar on 9th October, 2014” (*Inquietudes presentadas por el presidente interino en seminario de la OEA del 9 de octubre de 2014*), disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_con_act_chair_psc.pdf

¹²⁹ Respuesta de Antigua y Barbuda al cuestionario en el marco de la Cuarta Ronda, pág. 55.

¹³⁰ Véase “The Public Service Commission - Brief Presentation on its Purpose, Functions, and Structure” (*La Comisión del Servicio Público: breve presentación de su propósito, funciones y estructura*), disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_pub_ser_com_bri_pre_pur_fct_stru.pdf

[300] Al respecto, los representantes de la Comisión del Servicio Público explicaron que *“la Comisión se enfrenta a instancias en las que se han formulado acusaciones en contra de funcionarios y el Secretario Permanente los ha declarado en situación de interdicción. El proceso de investigación preliminar para la formulación de cargos en contra del funcionario, de ameritarse, puede resultar extremadamente largo y prolongado. La Comisión no puede actuar hasta tanto se formulen los mencionados cargos. En ocasiones los funcionarios son objeto de interdicciones durante varios años antes de la conclusión del asunto”*.¹³¹

[301] Los representantes de la Comisión del Servicio Público explicaron además que, durante el período en que la investigación se halle pendiente, los funcionarios públicos objeto de la interdicción pueden sufrir un recorte de hasta el 50% en sus salarios. Destacaron asimismo que esta situación puede durar más de dos años, dado que no hay límites al plazo de duración de una investigación disciplinaria en la Procuraduría General. No obstante, informaron que si el funcionario no es declarado culpable de los actos de que se le acusa en materia disciplinaria, los salarios retenidos se le reintegran en forma retroactiva.

[302] En vista de lo anterior, el Comité estima que redundaría en el interés superior del país analizado y del funcionario público acusado del ilícito contar con una investigación y con los procesos disciplinarios afines que se realicen en forma oportuna. El acusado recibe la mitad de su salario, en tanto que el país analizado le está abonando esa suma a una persona suspendida que, consecuentemente, no está trabajando.

[303] Al respecto, el Comité estima que el país analizado debería considerar la constitución de una unidad dentro de la Comisión del Servicio Público a fin de que se ocupe en forma oportuna de las investigaciones de cuestiones disciplinarias. El Comité estima asimismo que el país analizado debería considerar la fijación de un plazo razonable para la conclusión de las investigaciones disciplinarias y su presentación ante la Comisión del Servicio Público para que ésta tome la decisión del caso. El Comité formulará recomendaciones al respecto (véanse las recomendaciones 2.4.5 y 2.4.6 en la sección 2.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[304] En cuarto lugar, y como complemento de las recomendaciones indicadas precedentemente, el Comité cree que sería beneficioso que la PSC contara con mecanismos de coordinación, cuando corresponda, con la Procuraduría General, con la Oficina del Director del Ministerio Público y con la Fuerza de la Policía Real de Antigua y Barbuda respecto de temas relativos a la investigación de ilícitos cometidos por servidores públicos que puedan implicar responsabilidades disciplinarias y penales. El Comité formulará recomendaciones al respecto (véase la recomendación 2.4.7 en la sección 2.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[305] Con respecto al párrafo anterior, el Comité considera que la implementación de mecanismos de coordinación, de corresponder, tales como acuerdos entre los mencionados órganos, podría resultar de suma utilidad para el logro de una coordinación eficaz.

[306] Asimismo, el Comité estima conveniente que la PSC apruebe mecanismos de coordinación con la Comisión de Integridad a efectos de un desempeño armonioso de sus funciones (véase la recomendación 2.4.8 en la sección 2.4 del Capítulo II (B) del presente informe)

[307] En quinto lugar, otra dificultad mencionada durante la visita *in situ* fue la necesidad de que los Secretarios Permanentes realicen evaluaciones más frecuentes de los funcionarios públicos. Los representantes de la Comisión informaron que la mayoría de los funcionarios son evaluados únicamente cuando existe una recomendación a efectos de su confirmación para un puesto. En su opinión, las

¹³¹ *Ibíd.*

evaluaciones deben realizarse anualmente a fin de que la Comisión pueda contar con una imagen más veraz de la conducta del funcionario. De esta forma se evitaría que los servidores públicos se vieran victimizados porque podrían consultarse sus evaluaciones anuales ante un “conflicto de personalidades” entre el funcionario y su supervisor.¹³² El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 2.4.9 en la sección 2.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[308] En sexto lugar, con respecto a los manuales de descripción de puestos y clasificación de puestos de su personal, el Comité considera que, a pesar del hecho de que a los empleados nuevos se les entrega una carta de puesto en la que se indican sus funciones, no existe un sistema adecuado de descripciones de puestos o clasificación de puestos para los funcionarios públicos. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 2.4.10 en la sección 2.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[309] En octavo lugar, en lo relativo a los mecanismos de rendición de cuentas el Comité observa que si bien la Comisión del Servicio Público elabora informes anuales no tiene obligación legal alguna de publicitarlos.

[310] El Comité deja constancia de que la Comisión del Servicio Público no cuenta con un sitio en Internet que le permita al público en general acceder a los trabajos que realiza y consultarlos. Observa asimismo que la Comisión no aparece cuando se realiza una búsqueda en el sitio en Internet del gobierno de Antigua y Barbuda, lo que hace que este órgano de control superior carezca de presencia en línea. El país analizado debería considerar el establecimiento de un sitio en Internet para la Comisión del Servicio Público con información básica, tal como su mandato, sus integrantes, la legislación pertinente y la información de contacto. Debería contener, entre otros elementos, sus decisiones, formularios, informes anuales y datos estadísticos relativos a su labor. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 2.4.11 en la sección 2.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[311] Por último, si bien toma nota de que la capacitación de los servidores públicos es responsabilidad del Departamento de Capacitación y no de la Comisión del Servicio Público, el Comité estima que el país analizado debería considerar la capacitación de los funcionarios públicos en materia de ética y de mecanismos para prevenir y combatir el fraude y la corrupción en el sector público. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 2.4.12 en la sección 2.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

2.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[312] Conforme lo solicitado durante la visita *in situ*, la PSC proporcionó información relativa a los resultados del ejercicio de control disciplinario de los funcionarios públicos asignado a ella por el artículo 99 (1) de la Constitución.¹³³

[313] El documento proporcionado tiene tres secciones. La primera muestra dos casos disciplinarios que tramitan ante la Procuraduría General desde 2012 y 2013 respectivamente; la segunda suministra información de los casos disciplinarios que se han suscitado en los últimos cinco (5) años y la forma en

¹³² Véase, “Concerns Given by the Acting Chairman at OAS Seminar on 9th October, 2014” (*Inquietudes presentadas por el presidente interino en seminario de la OEA del 9 de octubre de 2014*), disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_con_act_chair_psc.pdf

¹³³ Véase “Disciplinary Matters that have come before the Public Service Commission, Antigua y Barbuda. Compiled October, 2014” (*Asuntos disciplinarios presentados ante la Comisión del Servicio Público de Antigua y Barbuda. Recopilación de octubre de 2014*), disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_dis_mat.pdf

que concluyeron y la tercera presenta información de un caso en el que la audiencia preliminar estaba pendiente debido a que aún tramitaba ante los tribunales una causa penal en contra del funcionario.¹³⁴

[314] Con respecto a la información sobre los resultados de los casos disciplinarios que tuvieron lugar en los últimos cinco (5) años, el Comité observa que se realizó un total de once (11) audiencias disciplinarias durante ese período (una en 2009, una en 2011, cuatro en 2012 y cinco en 2014). Ocho (8) de ellas fueron por fraude, distracción de fondos, conflictos de intereses u otros actos de corrupción.

[315] El Comité observa que en uno de esos casos el servidor público en cuestión renunció y no se le aplicaron otras acciones, en otro caso se reintegraron tres funcionarios debido a la falta de pruebas suficientes para acusarlos de fraude y en dos casos se separó a los funcionarios de su servicio público, en uno de ellos tras una condena penal por fraude.

[316] No obstante, el Comité deja constancia de que en la mitad de las ocho audiencias disciplinarias relativas a casos de fraude, distracción de fondos u otros actos de corrupción, los funcionarios en cuestión no fueron separados de sus cargos a pesar de que uno de ellos sustrajo un total de EC\$95.052,10 del Ministerio de Deportes y otro malversó un total de EC\$25.478.00 del Servicio de Administración Tributaria (*Inland Revenue Service*). En estos casos los servidores públicos en cuestión fueron obligados a reintegrar la totalidad de las sumas sustraídas, fueron transferidos a otra institución y suspendidos y/o degradados de categoría, además de inhabilitárselos para ocupar puestos en los que tuvieran que manejar o acceder a fondos públicos. Asimismo, las resoluciones disciplinarias de la PSC en estos casos indicaban que la reiteración de esas conductas produciría la dimisión del funcionario en cuestión.

[317] En relación con la información precedente el Comité estima que el país analizado debería considerar la revisión de los criterios correspondientes a las sanciones administrativas en casos de fraude, distracción de fondos u otros actos de corrupción a fin de asegurar de que ellas sean lo suficientemente disuasivas. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 2.4.13 en la sección 2.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[318] Considerando que el Comité no tiene más información que la indicada precedentemente para realizar una evaluación integral de los resultados de este tema, en particular información sobre los casos disciplinarios que fueron tratados en forma interna por los Secretarios Permanentes, formulará una recomendación al país analizado a fin de que considere mantener y publicar datos estadísticos conforme lo consignado en el cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis. Este tipo de información le sería de utilidad al Comité para realizar una evaluación integral de los resultados objetivos obtenidos en la aplicación del marco jurídico y de otras medidas vigentes en lo atinente a la implementación del artículo III, párrafo 9, de la Convención. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 2.4.14 en la sección 2.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

2.4. Conclusiones y recomendaciones

[319] Con base en el análisis integral de la Comisión del Servicio Público efectuado en las secciones precedentes, el Comité ofrece las siguientes conclusiones y recomendaciones.

[320] **Antigua y Barbuda ha considerado y adoptado medidas dirigidas a mantener y fortalecer a la Comisión del Servicio Público como órgano de control superior, conforme lo indicado en la sección 2 del literal “B” del Capítulo II del presente informe.**

¹³⁴ El país analizado informó que este caso, relativo a una funcionaria ejecutiva superior de la Fuerza de Defensa de Antigua y Barbuda, fue tramitado ante la sala penal del Alto Tribunal (*High Court*). El 24 de octubre de 2014 fue declarada culpable de los cargos formulados y se encuentra a la espera de la imposición de la pena. Es sumamente probable que se la separe de su cargo en el servicio público.

[321] En vista de los comentarios formulados en la sección indicada precedentemente, el Comité sugiere que el país analizado considere las siguientes recomendaciones.

- 2.4.1 Modificar el reglamento de la Comisión del Servicio Público, de acuerdo con los principios fundamentales del sistema jurídico del país, a efectos de que no pueda impedirse la incoación de procesos disciplinarios en contra de un funcionario público absuelto de cargos penales respecto de un presunto acto de inconducta implícito en dichos cargos (véase la sección 2.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 2.4.2 Tomar las medidas necesarias, de acuerdo con los principios fundamentales del sistema jurídico del país, para que los procesos administrativos disciplinarios por actos que puedan generar responsabilidad penal no se hallen subordinados a los procesos penales, de forma tal que ambos puedan tramitar en forma simultánea sin que uno deba depender del resultado del otro (véase la sección 2.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 2.4.3 Considerar el establecimiento de normas claras relativas a la facultad discrecional de los Secretarios Permanentes para decidir cuándo denunciar ante la Comisión del Servicio Público un asunto de carácter disciplinario o penal, así como mecanismos de control superior para asegurar el cumplimiento (véase la sección 2.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 2.4.4 Tomar las medidas necesarias para hacer que los Secretarios Permanentes comuniquen a la brevedad a los órganos correspondientes, como el Departamento de Establecimientos, la Comisión del Servicio Público, la Comisión de Integridad y la policía, las denuncias de presuntos delitos, especialmente actos de corrupción, fraude y malversación; además de prohibir que dichos secretarios traten dichos casos en forma interna (véase la sección 2.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 2.4.5 Establecer una unidad de investigaciones dentro de la Comisión del Servicio Público para que se ocupe oportunamente de las investigaciones de asuntos disciplinarios (véase la sección 2.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 2.4.6 Fijar un plazo razonable para la conclusión de las investigaciones disciplinarias y para su presentación ante la Comisión del Servicio Público a efectos de que esta última emita su decisión al respecto (véase la sección 2.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 2.4.7 Establecer mecanismos de coordinación, cuando corresponda, con la Procuraduría General, con la Oficina del Director del Ministerio Público y con la policía en materia de investigación de ilícitos cometidos por servidores públicos que impliquen responsabilidades disciplinarias y penales (véase la sección 2.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 2.4.8 Adoptar mecanismos de coordinación con la Comisión de Integridad que le permitan desempeñar su función de ejercer el control disciplinario de los servidores públicos que el artículo 99 (1) de la Constitución le asigna a la Comisión del Servicio Público, en armonía con la función investigativa que posee la Comisión de Integridad en virtud del artículo 12 (1) (b) y (c) de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 (véase la sección 2.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 2.4.9 Tomar las medidas necesarias para evaluar anualmente el desempeño de los funcionarios públicos a efectos de que la Comisión del Servicio Público pueda contar con una imagen

más veraz de dicho desempeño además de ayudar a la Comisión a individualizar posibles instancias de represalias (véase la sección 2.2 del Capítulo II (B) del presente informe).

- 2.4.10 Implementar un manual de descripción de puestos y clasificación de puestos para los funcionarios públicos (véase la sección 2.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 2.4.11 Establecer y mantener actualizados sitios de Internet para la Comisión del Servicio Público a efectos de permitir que el público tenga un acceso fácil a la información relativa a su labor. Asegurarse de que el sitio contenga, entre otros elementos, información básica de la Comisión, tal como su mandato, sus integrantes, la legislación pertinente y la información de contacto, además de sus decisiones, formularios, informes anuales y datos estadísticos relativos a los resultados de su labor (véase la sección 2.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 2.4.12 Proporcionar capacitación para los funcionarios públicos en materia de ética y de mecanismos para prevenir y combatir el fraude y la corrupción en el sector público (véase la sección 2.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 2.4.13 Revisar los criterios correspondientes a las sanciones administrativas en casos de fraude, distracción de fondos u otros actos de corrupción a fin de asegurar de que ellas sean lo suficientemente disuasivas (véase la sección 2.3 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 2.4.14 Mantener y hacer públicos datos estadísticos que proporcionen información del origen y resultados de todos los tipos de procesos disciplinarios que lleven adelante los Secretarios Permanentes por actos de fraude y de corrupción, tal como información de los motivos para incoar (o no) acciones disciplinarias, las razones por las cuales el asunto no se denunció a la Comisión del Servicio Público, a la Comisión de Integridad y/o a la policía, sus resultados, la sanción impuesta y las causales de retiro, todo ello a efectos de individualizar desafíos y recomendar medidas correctivas (véase la sección 2.3 del Capítulo II (B) del presente informe).

3. LA PROCURADURÍA GENERAL

3.1 Existencia de disposiciones en el marco legal y/o de otras medidas

[322] La Procuraduría General posee una serie de disposiciones que conforman su marco jurídico, así como diversas medidas que, entre otros aspectos, hacen referencia a lo siguiente.

[323] En su carácter de asesor principal del gobierno, de conformidad con el artículo 82(1) de la Constitución, el Procurador General se encarga de asesorar a las distintas dependencias gubernamentales que carezcan de un departamento propio de asuntos jurídicos o de un equipo de abogados que brinden asesoría en asuntos jurídicos. En general se procura la asesoría jurídica en casos en los que existen dudas de la legalidad o suficiencia constitucional de actos o normas legales administrativas, o cuando existe la necesidad de interpretación y aplicación de obligaciones nacionales, regionales e internacionales, o cuando el asunto planteado presente cuestiones jurídicas de índole nueva, así como en los casos en los que deban negociarse y supervisarse acuerdos entre el gobierno y terceros. Asimismo, los abogados que se desempeñan en la Procuraduría General representan al Procurador General en causas judiciales entabladas contra el gobierno o incoadas por este último. La Procuraduría es responsable de la prestación de servicios de redacción eficiente de textos legislativos, entre los que se encuentran los servicios afines de asesoría legislativa al gobierno de Antigua y Barbuda.

[324] El artículo 82 (1) y (2) dispone que el Procurador General será nombrado por el Gobernador General. Debe ser ciudadano con habilitación para ejercer como abogado procurador judicial (*barrister*) en Antigua y Barbuda.

[325] Durante la visita *in situ* los representantes de la Procuraduría informaron que el Procurador General se desempeña asimismo como Ministro de Justicia y Asuntos Jurídicos, Seguridad Pública, Inmigración y Trabajo. Es responsable de las siguientes divisiones: Procuraduría General y sede del ministerio, Oficina del Director del Ministerio Público (*Office of the Director of Public Prosecutions; DPP*), Oficina de Publicaciones del Gobierno (*Government Printing Office*); Catastro (*Land Registry*), Tribunal de Asuntos Laborales (*Industrial Court*), Secretaría y Jefatura de la Policía Militar (*Registrar and Provost Marshall*), División de Judicaturas de Primera Instancia (*Magistrate's Division*), Centro de Asesoría y Consultoría Jurídica, así como Propiedad Industrial y Comercio.

[326] En el transcurso de la visita *in situ* el Procurador General informó que estaba constituyéndose una unidad anticorrupción dentro de la Procuraduría, que entraría en funciones en enero de 2015.

[327] Con respecto a la forma en que se proveen los recursos humanos necesarios para el funcionamiento de la Procuraduría General, el artículo 103 (incisos 1 y 2) de la Constitución dispone que el Gobernador General será el facultado para designarlos, dimitirlos y ejercer el control disciplinario respecto de ellos, actuando de conformidad con la asesoría que le brinde al efecto la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos de acuerdo con las disposiciones correspondientes de la Orden de la Corte Suprema de 1967.

[328] Durante la visita *in situ* los representantes informaron que la Procuraduría General cuenta con un total de diecinueve puestos de personal, incluido el Procurador Fiscal, el Subprocurador Fiscal, el Projectista de Textos Jurídicos (*Legal Draftsman*), Asesores de la Corona (*Crown Counsels*) y Procuradores de la Corona (*Crown Solicitors*). Siete de estos puestos son plenamente permanentes, uno es permanente (por contrato), dos son no permanentes (por contrato) y nueve se hallan vacantes.

[329] En materia de capacitación los representantes informaron que en los últimos tres años algunos de los integrantes de su personal jurídico participaron en actividades de formación profesional. No obstante, señalaron que dichas actividades no estuvieron relacionadas con la anticorrupción.

[330] En cuanto a la forma en la que proporciona información al público, los representantes de la Procuraduría General informaron que se encontraban trabajando en el establecimiento de un sitio en Internet para el órgano y en la publicación de una versión en línea de la Gaceta Oficial. Asimismo, destacaron la existencia de un sitio oficial con la legislación de Antigua y Barbuda (disponible en <http://laws.gov.ag/>) que contiene los textos completos de los proyectos de ley que tramitan ante el Parlamento del país, así como las leyes y normas legales promulgadas y aplicadas.¹³⁵

[331] Con respecto a la forma en la que se aseguran los recursos presupuestarios necesarios para su funcionamiento, durante la visita *in situ* los representantes de la Procuraduría General explicaron que dichos recursos se aseguran mediante un proceso idéntico al indicado en la sección 2.1 del Capítulo II (B) del presente informe.

[332] Según la información recibida tras la visita *in situ*, el presupuesto anual total asignado para cada uno de los últimos cuatro años a la Procuraduría General y a la sede del Ministerio de Asuntos Jurídicos

¹³⁵ Al respecto, Antigua y Barbuda informó que el sitio web ha sido establecido y está funcionando al final de enero de 2015 www.legalaffairs.gov.ag y fue puesto en funcionamiento oficialmente el 9 de enero de 2015.

es el siguiente (cifras originales en dólares del Caribe oriental¹³⁶): EC\$4.144.362 (2011); EC\$3.328.671 (2012); EC\$ 2.914.380 (2013) y EC\$ 2.883.044 (2014).¹³⁷

3.2 Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[333] La Procuraduría General cuenta con una serie de disposiciones y/o de otras medidas que son pertinentes para la promoción de los fines de la Convención, algunas de las cuales se han descrito brevemente en la sección 3.1. No obstante, el Comité considera adecuado formular algunas observaciones al respecto.

[334] En primer lugar, el Comité toma nota del importante anuncio que efectuó el Procurador General durante la visita *in situ* relativo al establecimiento en enero de 2005 de una unidad anticorrupción dentro de la procuraduría.

[335] El Procurador General informó además que la unidad contaría con una partida presupuestaria independiente y colaboraría con los órganos de control superior existentes, tales como la Oficina del Director del Ministerio Público y la Comisión de Integridad, entre otros.¹³⁸

[336] Asimismo, los representantes de la Procuraduría General mencionaron que se encontraban revisando la legislación vigente en el país en materia de anticorrupción a efectos de realizar mejoras, de ser necesarias, tales como el establecimiento de un marco jurídico para la nueva unidad en la materia.

[337] En vista de lo anterior, el Comité desea expresar su apoyo a la unidad especializada en materia de anticorrupción que se constituirá en el seno de la Procuraduría General, además de felicitar al país analizado por esta importante iniciativa. El Comité estima que la unidad podría fortalecer la capacidad de la procuraduría para proporcionar asesoría jurídica oportuna en este ámbito de especialización, así como actuar como mecanismo de coordinación con los otros órganos de control superior existentes. El Comité cree que el propósito de la unidad no es reemplazar las labores de la Oficina del Director del Ministerio Público y de la Comisión de Integridad, entre otras entidades, sino suplementarlas y colaborar con ellas. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 3.4.1 en la sección 3.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[338] En segundo lugar, durante la visita *in situ* los representantes de la Procuraduría destacaron algunas dificultades generadas por el limitado presupuesto de la entidad, el cual se vio reducido en los últimos tres años. Al respecto, informaron que carecen del presupuesto suficiente como para capacitar al personal o promover campañas de concientización, en particular en áreas especializadas como la anticorrupción.

[339] El Comité señala asimismo que se hallan vacantes nueve de los diecinueve puestos existentes para personal de servicios jurídicos de la procuraduría.

[340] En vista de lo anterior, el Comité destaca la importancia de fortalecer la Procuraduría General y en especial su unidad de anticorrupción, de próxima constitución, al garantizar los recursos humanos, financieros y tecnológicos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos (véase la recomendación 3.4.2 en la sección 3.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

¹³⁶ 1 dólar estadounidense = aproximadamente 2,7 dólares del Caribe oriental (al 17 de octubre de 2014).

¹³⁷ Puede consultarse la información completa del presupuesto para cada uno de estos años en http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_atg.htm

¹³⁸ Al respecto, Antigua y Barbuda informó que el Organismo Anticorrupción que se propone establecer en el país será una entidad independiente, ya que se prevé que tenga cometidos de elaboración de políticas e investigación de actos de corrupción y que ya se ha presentado un proyecto de ley a ese respecto.

[341] El Comité subraya asimismo la importancia de asegurarse de que los miembros del personal de la Procuraduría General tengan acceso a la capacitación como un medio óptimo para fortalecer los conocimientos y aptitudes que necesitan para el desempeño adecuado de sus funciones públicas, por lo cual formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 3.4.3 en la sección 3.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[342] En tercer lugar, otra de las dificultades que se mencionó durante la visita *in situ* fue que la Procuraduría carece de una biblioteca jurídica adecuada para sus investigaciones y que su personal no tiene acceso a las bases de datos ni a información de índole jurídica en Internet. Dada la utilidad de la tecnología en la facilitación de las labores de los órganos de control superior, el Comité estima que correspondería que la Procuraduría contara con sistemas informáticos y tecnologías modernas que permitieran que su personal realizase investigaciones jurídicas computarizadas, además de habilitarlo para desempeñar funciones, como la creación y mantenimiento de bancos de datos actualizados de sus resoluciones y la facilitación y racionalización de las acciones de coordinación y cooperación interinstitucional para la recepción y prestación oportunas de los servicios de asesoría jurídica de los que es responsable. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 3.4.4 en la sección 3.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[343] En cuarto lugar, el Comité no logró identificar la existencia de procedimientos documentados correspondientes al desempeño de las funciones del personal jurídico y administrativo de la Procuraduría. En consecuencia, estima que sería útil que el estado analizado contara con documentación de ese tipo, considerando el carácter específico de las funciones realizadas por su personal. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 3.4.5 en la sección 3.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[344] En quinto lugar, y en materia de mecanismos de rendición de cuentas, el Comité observa que no hay normas legales vigentes que ordenen la elaboración de un informe anual de las actividades de la Procuraduría General. El Comité subraya la importancia de tales informes anuales a efectos de destacar la transparencia y la rendición de cuentas de dicho órgano. Estima que los informes anuales deberían incluir, entre otros elementos, información relativa a las actividades de este órgano de control superior, sus recursos humanos, su organigrama, su asignación presupuestaria, sus gastos, la capacitación que brinda así como datos estadísticos de su labor. El Comité formulará recomendaciones al respecto (véanse las recomendaciones 3.4.6 y 3.4.7 en la sección 3.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[345] En sexto lugar, el Comité deja constancia de la existencia de un sitio en Internet con los textos completos de los proyectos de ley que tramitan ante el Parlamento de Antigua y Barbuda y de las leyes o normas legales promulgadas y aplicadas.¹³⁹ No obstante, el Comité señala que dicho sitio contiene legislación solo hasta 2013.

[346] El Comité indica asimismo que la Procuraduría General no cuenta con un sitio en Internet, aunque durante la visita *in situ* los representantes del órgano informaron que estaban trabajando en pos del establecimiento de dicho sitio.

[347] En vista de lo anterior, el Comité formulará una recomendación al país analizado a efectos de que considere el establecimiento y mantenimiento de un sitio actualizado en Internet para la Procuraduría General a fin de que el público cuente con un fácil acceso a la información relativa a sus labores y a las formas de comunicarse con el órgano (véanse las recomendaciones 3.4.8 y 3.4.9 en la sección 3.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

¹³⁹ <http://laws.gov.ag/>

[348] Por último, el Comité señala que no existe una unidad de auditoría interna en el seno de la Procuraduría General. Teniendo en cuenta las responsabilidades de la Procuraduría y del Ministerio de Asuntos Jurídicos, el Comité estima que sería beneficioso que el país analizado considerara el establecimiento de una unidad para establecer criterios, lineamientos, instrucciones, así como procedimientos relativos a las actividades de auditoría, además de proporcionar una evaluación del desempeño de las políticas, programas y operaciones del gobierno. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 3.4.10 en la sección 3.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

3.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[349] La respuesta de Antigua y Barbuda al cuestionario no proporciona resultados correspondientes a la forma en la que desempeña sus funciones y responsabilidades la Procuraduría General en materia de prevención de actos de corrupción, en particular en lo que respecta a los controles a efectos de que los funcionarios públicos realicen sus labores de acuerdo con la ley.

[350] No obstante, según lo señalado en la sección 2.2 del Capítulo II (B) del presente, el Comité observa que existen demoras en la Procuraduría General en lo tocante a la formulación de cargos a efectos de que la Comisión del Servicio Público (PSC) pueda celebrar las audiencias disciplinarias. Al respecto, el Comité reitera las recomendaciones efectuadas en la sección 2.4 del Capítulo II (B) del presente informe relativas a la necesidad de que el país analizado considere, cuando corresponda, el establecimiento de mecanismos de coordinación, entre la PSC y la Procuraduría General, además de considerar la fijación de un plazo razonable para la conclusión de las investigaciones disciplinarias y su presentación ante la PSC (véanse las recomendaciones 2.4.6 y 2.4.7 en la sección 2.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[351] El país analizado proporcionó información relativa al decomiso de bienes provenientes de causas de lavado de dinero tramitadas judicialmente según la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 1996 (se decomisó un total de US\$80.616, €\$19.430 y EC\$300). No se proporcionó información sobre la recuperación de sumas correspondientes a casos de corrupción.

[352] El Comité no cuenta con información adicional a la consignada precedentemente que le pueda permitir una evaluación integral de los resultados en esta área, en particular en lo que se refiere a la labor de la Procuraduría General de suministro de asesoría jurídica a otros entes y órganos, tales como la Oficina del Director de Auditoría, el Contador General y el Departamento de Administración Tributaria, entre otros, en materia de recuperación de sobrepagos o de sumas sustraídas fraudulentamente al estado. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 3.4.11 en la sección 3.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

3.4. Conclusiones y recomendaciones

[353] Con base en el análisis integral de la Procuraduría General efectuado en las secciones precedentes, el Comité ofrece las siguientes conclusiones y recomendaciones.

[354] Antigua y Barbuda ha considerado y adoptado medidas dirigidas a mantener y fortalecer la Procuraduría General como órgano de control superior, conforme lo indicado en la sección 3 del literal “B” del Capítulo II del presente informe.

[355] En vista de los comentarios formulados en la sección antes mencionada, el Comité sugiere que el país analizado considere las siguientes recomendaciones.

- 3.4.1. Tomar las medidas necesarias para establecer la unidad de anticorrupción en el seno de la Procuraduría General y examinar el marco jurídico vigente en la materia a fin de

asegurarse de que dicha unidad funcione en forma coordinada con los órganos de control superior existentes, como la Oficina del Director del Ministerio Público y la Comisión de Integridad (véase la sección 3.2 del Capítulo II (B) del presente informe).

- 3.4.2. Fortalecer la Procuraduría General y en especial su unidad de anticorrupción, de próxima constitución, al garantizar los recursos humanos, financieros y tecnológicos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos (véase la sección 3.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 3.4.3. Brindar a la Procuraduría General los recursos financieros necesarios para asegurar la capacitación periódica de sus funcionarios para las tareas que desempeñan, teniendo en cuenta la disponibilidad de dichos recursos (véase la sección 3.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 3.4.4. Brindar a la Procuraduría General los sistemas informáticos y tecnologías modernas que permitan que su personal realice investigaciones jurídicas computarizadas, además de habilitarlo para desempeñar funciones, como la creación y mantenimiento de bancos de datos actualizados de sus resoluciones y la facilitación y racionalización de las acciones de coordinación y cooperación interinstitucional para la recepción y prestación oportunas de los servicios de asesoría jurídica de los que es responsable (véase la sección 3.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 3.4.5. Adoptar manuales, guías u otros tipos de procedimientos documentados relativos a las tareas que debe desempeñar el personal jurídico y administrativo de la Procuraduría General (véase la sección 3.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 3.4.6. Considerar la imposición de una obligación legal a la Procuraduría General a fin de que rinda cuentas y publique informes anuales, con divulgación de sus actividades y de los resultados obtenidos, así como el nivel de desempeño interno de la institución y sus objetivos, desafíos y logros (véase la sección 3.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 3.4.7. Asegurarse de que los informes anuales de las actividades de la Procuraduría General presenten al público información pertinente relativa a la tarea de este órgano de control superior, tal como sus recursos humanos, su organigrama, su asignación presupuestaria, sus gastos y la capacitación que brinda, así como datos estadísticos de su labor (véase la sección 3.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 3.4.8. Establecer y mantener un sitio institucional actualizado en Internet para la Procuraduría General a fin de que el público cuente con un fácil acceso a la información relativa a sus labores y a las formas de comunicarse con el órgano. Asegurarse de que dicho sitio, entre otros elementos, contenga los informes anuales indicados en la recomendación precedente, así como planes estratégicos, legislación pertinente y descripciones y especificaciones de los puestos de trabajo (véase la sección 3.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 3.4.9. Mantener actualizado el sitio <http://laws.gov.ag/>, que contiene los textos completos de los proyectos de ley que tramitan ante el Parlamento de Antigua y Barbuda y de las leyes o normas legales promulgadas y aplicadas, así como el estado de la tramitación de los proyectos de ley, además de la publicación de los tratados internacionales que se encuentren vigentes (véase la sección 3.2 del Capítulo II (B) del presente informe).

- 3.4.10. Constituir una unidad de auditoría interna en el seno de la Procuraduría General (véase la sección 3.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 3.4.11. Mantener y publicar datos estadísticos relativos a la asesoría jurídica prestada por la Procuraduría General a los diversos órganos y entes en materia de recuperación de sobrepagos o de sumas sustraídas fraudulentamente al estado (véase la sección 3.3 del Capítulo II (B) del presente informe).

4. OFICINA DEL DIRECTOR DEL MINISTERIO PÚBLICO (DPP)

4.1. Existencia de disposiciones en el marco jurídico y/o de otras medidas

[356] El marco jurídico de la Oficina del Director del Ministerio Público (*Office of the Director of Public Prosecutions; DPP*) posee un conjunto de disposiciones y otras medidas relativas, entre otros aspectos, a los siguientes.

[357] Con respecto a los objetivos y funciones de la DPP, el artículo 88 (1) de la Constitución prevé que, con sujeción al artículo 89 de dicha norma legal, el Director del Ministerio Público, cuando lo considere conveniente, estará facultado para: a) entablar y emprender procesos penales en contra de una persona ante un tribunal del tipo que fuere (con excepción de los tribunales militares) relativos a delitos violatorios de la legislación;¹⁴⁰ b) hacerse cargo de cualquiera de dichos procesos penales y continuar con ellos, según hayan sido entablados o emprendidos por otra persona o autoridad y c) interrumpir, en cualquier momento antes de que se dicte sentencia, un proceso penal entablado o emprendido por él o por cualquier otra persona o autoridad.

[358] El artículo 88 (2) confiere a la DPP, en forma exclusiva, la facultad de hacerse cargo y de continuar o suspender un proceso penal entablado por cualquier persona o autoridad, con sujeción a lo dispuesto por el artículo 89 de la Constitución.

[359] Asimismo, el artículo 88 (3) dispone que los procesos penales incluyen las apelaciones a decisiones judiciales en acciones penales o en cualquier causa, en tanto que el artículo 88 (4) prevé que las funciones de la DPP pueden ser desempeñadas por terceros que actúen de acuerdo con las instrucciones generales o específicas del Director del Ministerio Público.

[360] El Director del Ministerio Público cuenta con las atribuciones que le confiere el artículo 45 de la Constitución en cuanto a la judicialización de personas inhabilitadas que sesionen o voten en cualquiera de las dos cámaras parlamentarias.

[361] Con respecto a la forma en que la DPP toma decisiones, tras la visita *in situ* los representantes del órgano proporcionaron un ejemplar de la Guía y Código para los Fiscales de Antigua y Barbuda¹⁴¹ la cual, en su Capítulo 6, presenta el procedimiento de toma de decisiones, principalmente en lo relativo a la iniciación de procesos penales.

[362] Con respecto a la independencia de la DPP, el artículo 88 (5) de la Constitución establece que, con sujeción al artículo 89 de dicha norma legal, en el ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 88 (1) y 45 de la carta magna, el Director del Ministerio Público no estará sujeto a la dirección ni al control de ninguna otra persona o autoridad.

¹⁴⁰ El artículo 31 de la Ley de la Fuerza Policiaca autoriza a dicha fuerza a judicializar ilícitos menores en juzgados de primera instancia o en tribunales inferiores.

¹⁴¹ Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_gui_pro.pdf

[363] El artículo 89 de la Constitución prevé una excepción al principio de independencia de la DPP en el caso de violaciones a las leyes en materia de secretos oficiales, motines o incitación al amotinamiento, así como a aquellas relativas a los derechos u obligaciones de derecho internacional que posee Antigua y Barbuda. En estos casos la Procuraduría General puede impartir instrucciones generales o especiales a la DPP, que esta última deberá acatar, relativas al ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 88 de la Constitución.

[364] El artículo 87 (2) de la Constitución dispone que corresponderá al Gobernador General nombrar al Director del Ministerio Público con el asesoramiento de la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos. El artículo 87 (4) dispone que únicamente podrán ser nombrados para ocupar el puesto o desempeñarse como Director del Ministerio Público quienes (a) estén habilitados para ejercer la profesión de abogado procurador litigante (*barrister*) en un tribunal con competencia irrestricta en asuntos civiles y penales en algún lugar del Commonwealth y (b) hayan ejercido en esa calidad en dicho tribunal por un plazo no inferior a los siete años.

[365] El artículo 87, incisos 6 y 11, dispone que el Director del Ministerio Público dejará su puesto cuando cumpla los cincuenta y cinco años o la edad que disponga el Parlamento. De igual modo, el artículo 87 (7) de la Constitución dispone que únicamente podrá separarse del cargo al director en caso de incapacidad para el desempeño de las funciones del puesto (ya sea por enfermedad física o psicológica o por cualquier otro motivo) o en el caso de mala conducta. El artículo 87, incisos 8 a 10, dispone el procedimiento según el cual, después de que la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos manifieste al Gobernador General que es necesario que el director sea separado de su cargo, el Gobernador General designará a un tribunal para que investigue el asunto y le informe si procede o no la dimisión de dicho director.

[366] En lo relativo a los recursos humanos y a las normas que lo rigen, el artículo 103 de la Constitución dispone que el Gobernador General, con el asesoramiento de la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos, tendrá la facultad de designar a los oficiales jurídicos de la DPP y de ejercer el control disciplinario respecto de ellos, pudiendo asimismo dimitirlos.

[367] Durante la visita *in situ* los representantes informaron que la Oficina del Director del Ministerio Público cuenta con un total de diez puestos de personal: tres abogados (dos asesores de la Corona de nivel 1 y uno de nivel 2), cinco empleados administrativos y dos puestos vacantes (asesor principal de la Corona y asesor de la Corona nivel 1). Nueve de los puestos son plenamente permanentes y uno es de permanencia simple (por contrato).¹⁴²

[368] Con respecto a la capacitación, durante la visita *in situ* la DPP proporcionó una lista de las actividades de capacitación de 2012 a 2014 en las que participó el personal las cuales, entre otras, incluyen foros y talleres relativos a la investigación y judicialización de delitos transnacionales complejos, prevención de ilícitos financieros y recuperación de activos y productos de actos delictivos.¹⁴³

[369] En cuanto a manuales o procedimientos documentados para el ejercicio de sus funciones, la DPP cuenta con una Guía para Fiscales vigente al 1 de enero de 2013,¹⁴⁴ que, entre otros aspectos, se refiere al papel, ética e imparcialidad del director, a sus relaciones con la policía y con otros investigadores, a la toma de decisiones sobre cargos formulados durante la etapa de sentencia en los procedimientos y apelaciones, así como a sus relaciones con los medios.

¹⁴² Véase el documento “Information requested from the DPP during on-site visit” (“Información solicitada a la DPP durante la visita *in situ*”), disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_oas.pdf

¹⁴³ Para una lista completa de las actividades de capacitación, véase el documento “Information requested from the DPP during on-site visit” (“Información solicitada a la DPP durante la visita *in situ*”), disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_oas.pdf

¹⁴⁴ Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_gui_pro.pdf

[370] Con respecto a sus mecanismos de control interno, durante la visita *in situ* los representantes de la DPP indicaron que el órgano no contaba con una unidad de auditoría interna. Asimismo, en lo tocante a reclamaciones, quejas o alegaciones que puedan presentarse en relación con los actos de su personal jurídico, además de las acciones disciplinarias que puedan llevarse ante la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos, las denuncias de inconducta profesional de los abogados pueden presentarse al Comité Disciplinario constituido en virtud de la Ley de la Profesión Jurídica de 2008, que prevé asimismo un código de conducta para dichos profesionales así como las acciones disciplinarias en caso de incumplimiento de sus disposiciones.

[371] En cuanto a sus recursos presupuestarios, según la información proporcionada por el país analizado durante la visita *in situ* y a pesar de contar con una partida presupuestaria específica, el presupuesto de la DPP no es independiente del de la Procuraduría General y del Ministerio de Asuntos Jurídicos. Además, según información recibida tras dicha visita, el presupuesto total anual asignado a la DPP para cada uno de los últimos cuatro años es el siguiente (cifras originales en dólares del Caribe oriental¹⁴⁵): EC\$913.815 (2011); EC\$624.689 (2012); EC\$ 952.143 (2013); and EC\$ 768.427 (2014).¹⁴⁶

[372] Con respecto a los mecanismos de coordinación para armonizar las funciones de la DPP con las de otros órganos de control superior u autoridades gubernamentales, durante la visita *in situ* dicha entidad informó que poseía una muy buena relación de trabajo con la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas y Lavado de Dinero (ONDCP) y con la Fuerza de la Policía Real de Antigua y Barbuda. Informó asimismo que la DPP nunca había recibido solicitudes de asesoría jurídica de parte de la Comisión de Integridad.

4.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[373] La Oficina del Director del Ministerio Público cuenta con un conjunto de disposiciones y/o de otras medidas pertinentes para la promoción de los fines de la Convención, algunas de las cuales se describen brevemente en la sección 4.1. No obstante, el Comité considera adecuado formular algunas observaciones al respecto.

[374] En primer lugar, y teniendo en cuenta que, según la información proporcionada por la DPP durante la visita *in situ*, el órgano depende administrativamente (y, en consecuencia, financieramente) de la Procuraduría General y Ministerio de Asuntos Jurídicos, y considerando además que con arreglo al artículo 88 (5) de la Constitución, con sujeción al artículo 89 de dicha norma descrito precedentemente, el Director de la Oficina del Ministerio Público, al ejercer sus funciones, no estará sujeto a la dirección ni al control de ninguna otra persona o autoridad, el Comité recomendará que el país analizado considere la adopción de las medidas necesarias para asegurarse de que la autonomía de la DPP no quede afectada por dicha dependencia (véanse las recomendaciones 4.4.1 y 4.4.2 en la sección 4.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[375] En segundo lugar, y teniendo en cuenta la información proporcionada por la DPP durante la visita *in situ* en la que se señaló que era preciso contar con más fiscales principales (al menos tres puestos nuevos), así como el hecho de que al momento de la visita dos de los diez puestos en el órgano se hallaban vacantes (incluido el de asesor principal de la Corona), el Comité ofrecerá al país analizado una recomendación al respecto (véase la recomendación 4.4.3 en la sección 4.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

¹⁴⁵ 1 dólar estadounidense = aproximadamente 2,7 dólares del Caribe oriental (al 17 de octubre de 2014)

¹⁴⁶ Puede consultarse la información completa del presupuesto para cada uno de estos años en http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_atg.htm

[376] En tercer lugar, aunque tras la visita *in situ* los representantes de la DPP proporcionaron copias de dos documentos prácticamente idénticos, el Código y la Guía para Fiscales de Antigua y Barbuda, a los que se ha hecho referencia en la sección precedente, el Comité observa que los mismos no constituyen en sí manuales o conjuntos de instrucciones que describan las funciones de los fiscales de la DPP según lo indican los términos de la sección 2.2 de ambos documentos. Teniendo en cuenta la utilidad de contar con instrumentos, manuales y/o guías directrices para los fiscales que participen en los procesos penales que surjan de la comisión de actos de corrupción, el Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 4.4.4 en la sección 4.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[377] En relación con dicha situación se nota el hecho de que durante la visita *in situ* el director destacó la necesidad de que la DPP contara con un presupuesto para actividades de capacitación a fin de asegurar que sus fiscales tuvieran los entrenamientos periódicos necesarios para mantener y mejorar sus conocimientos y aptitudes en materia de judicialización de actos de corrupción. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 4.4.5 en la sección 4.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[378] En cuarto lugar, teniendo en cuenta que el Director mencionó durante la visita *in situ* las dificultades de la DPP en el desempeño de sus funciones en el sentido de que le eran necesarios más recursos financieros, y dejando constancia de que en el último año ha sufrido una reducción de su asignación presupuestaria, el Comité le recomendará al país analizado que considere la adopción de medidas adecuadas para asegurarse de que la DPP reciba oportunamente los recursos presupuestarios que necesita para desempeñar sus funciones (véase la recomendación 4.4.6 en la sección 4.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[379] En quinto lugar, el Comité observa la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas que hagan pública la labor de la DPP o que comuniquen al público los resultados del desempeño de sus funciones. En este sentido los representantes del órgano observaron que la DPP no elabora un informe anual que resuma sus actividades; los únicos informes anuales que prepara son los relativos al número de causas que tramitan ante el tribunal y eso es lo que se envían al tribunal. El Comité deja constancia de que no existe la obligación legal de que la DPP elabore tales informes. Ante esta circunstancia y ante la importancia de mejorar la rendición de cuentas de la DPP, el Comité formulará las recomendaciones correspondientes (véanse las recomendaciones 4.4.7 y 4.4.8 en la sección 4.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[380] En sexto lugar el Comité observa que la DPP no cuenta con un sitio institucional en Internet que le permitiría al público tener conocimiento de sus objetivos y funciones, así como los procedimientos establecidos para el desempeño de su labor, entre otros aspectos.

[381] En vista de lo anterior, el Comité formulará una recomendación al país analizado a fin de que considere el establecimiento y mantenimiento de un sitio actualizado en Internet para la Oficina del Director del Ministerio Público a efectos de permitir un fácil acceso del público a la información relativa a su labor y a los medios para comunicarse con ella (véase la recomendación 4.4.9 en la sección 4.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[382] Por último, si bien los representantes de la DPP manifestaron que mantenían una coordinación permanente con la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas y Lavado de Dinero (ONDCP) y con la Fuerza de la Policía Real de Antigua y Barbuda, principalmente en lo relativo a investigaciones policíacas de sospechas de actos punibles para su ulterior tramitación judicial, el Comité estima que sería útil que el estado analizado considerara el fortalecimiento de dicha relación mediante mecanismos de coordinación efectivos entre los actores que participan en la investigación y judicialización de actos de corrupción que generen responsabilidad penal, tales como la Comisión de Integridad, la Fuerza de la Policía Real de Antigua y Barbuda, la Procuraduría General (y su futura Unidad Anticorrupción), la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas y Lavado de Dinero (ONDCP) a fin de establecer

procedimientos y/o directrices efectivas y oportunas para los intercambios de información y de asesoramiento jurídico para la presentación correcta ante los tribunales de procedimientos penales relativos a actos de corrupción. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 4.4.10 en la sección 4.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[383] Al respecto vale la pena mencionar que durante la visita *in situ* la DPP informó que la Procuraduría General se encontraba elaborando una propuesta para modificar la Ley de la Fuerza Policiaca (*Police Act*) que exigiría que antes de que la policía formule cargos deberá presentar una copia del expediente a la DPP.

4.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[384] Tras la visita *in situ* el Director del Ministerio Público suministró los siguientes datos correspondientes a los resultados obtenidos por la DPP sobre el porcentaje de casos concluidos.¹⁴⁷

[385] “2012: índice de disposición de casos (78%), tribunal de apelaciones (100%), índice de condenas en el Alto Tribunal (*High Court*) (90%)

[386] 2013: índice de disposición de casos (78%), tribunal de apelaciones (80%), índice de condenas en el Alto Tribunal (*High Court*) (93%)

[387] 2014: (*pendiente*)”

[388] Asimismo, tras la visita *in situ*, la DPP proporcionó un documento con 31 casos (concluidos entre 2009 y el 21 de enero de 2014) relativos a diversos tipos de conducta penal, tales como falsificación de cuentas, falsificación, asociación ilícita con intención de defraudar, apropiación fraudulenta, hurto y malversación, para los años 2009 a 2014 (con fecha de corte de 21 de enero de 2014) con indicación del nombre del acusado, la conducta penal de que se le acusó, los abogados, el veredicto y la condena. No obstante, el Comité deja constancia de que aparentemente la gran mayoría de estos casos no tiene que ver con fraude en contra del gobierno ni con fondos públicos, sino con empresas privadas. Además, en el único caso de malversación que se presentó el acusado fue sobreesido.

[389] El país analizado informó que en octubre de 2004 un ex alto oficial ejecutivo de la Fuerza de Defensa de Antigua y Barbuda (*Antigua & Barbuda Defence Force; ABDF*) fue la primera persona en ser judicializada en virtud de la Ley de Prevención de la Corrupción de 2004. El oficial fue acusado de la comisión de 26 cargos delictivos por circulación, falsificación y obtención de dinero falso en relación con la apropiación ilícita de cerca de EC\$350.000.

[390] En cuanto a la información precedente, el Comité observa que, aunque es evidente que la DPP ejerció sus funciones de acuerdo con el artículo 88 (1) de la Constitución en lo relativo a la judicialización de conductas penales, la información no de halla desglosada de forma tal de consignar los resultados específicamente correspondientes a los actos de corrupción tipificados como delitos por el Código Penal, la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004, la Ley de Prevención de la Corrupción de 2004 y otras normas legales pertinente.

[391] Asimismo, el Comité deja constancia del muy alto índice de condenas de la DPP. No obstante, no se proporcionó información sobre la cantidad de causas rechazadas en comparación con las investigadas y efectivamente llevadas ante los tribunales.

¹⁴⁷ Véase el documento “Information requested from the DPP during on-site visit” (“Información solicitada a la DPP durante la visita *in situ*”), disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_oas.pdf

[392] En este sentido, y teniendo en cuenta que no posee información adicional a la indicada precedentemente que le pueda permitir efectuar una evaluación integral de los resultados en la materia, el Comité estima útil que el país analizado considere la recopilación y publicación de datos estadísticos de las investigaciones, efectuadas por las autoridades competentes, relativas a actos de corrupción tipificados en el Código Penal, en la Ley de Hurtos, en la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 y en la Ley de Prevención de la Corrupción de 2004, incluidos los datos que, a efectos de individualizar desafíos y recomendar acciones correctivas, cuando corresponda, indiquen claramente cuántas investigaciones se hallan en curso, cuántas han sido suspendidas o desestimadas por el motivo que fuere, cuántas han sido cerradas por haber prescrito el plazo legal, cuántas han sido remitidas para su judicialización penal (y la disposición final que se les ha conferido) y cuántas han sido transmitidas a las autoridades competentes para ser objeto de medidas disciplinarias (es decir, sin carácter penal). El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 4.4.11 en la sección 4.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[393] El Comité estima asimismo que sería útil que el país analizado considere la recopilación y publicación de datos estadísticos relativos a judicializaciones iniciadas por actos de corrupción tipificados en el Código Penal, en la Ley de Hurtos, en la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 y en la Ley de Prevención de la Corrupción de 2004, incluidos los datos que, a efectos de individualizar desafíos y recomendar acciones correctivas, cuando corresponda, indiquen claramente cuántas investigaciones se hallan en curso, cuántas han sido suspendidas o desestimadas por el motivo que fuere, cuántas han sido cerradas por haber prescrito el plazo legal, cuántas han finiquitado por declaración del acriminado, cuántas han pasado a la etapa de juicio (y el resultado de dicho juicio), cuántas han sido transmitidas a las autoridades competentes para la aplicación de medidas disciplinarias (es decir, sin carácter penal). El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 4.4.12 en la sección 4.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

4.4. Conclusiones y recomendaciones

[394] Con base en el análisis integral de la Oficina del Director del Ministerio Público (DPP) efectuado en las secciones precedentes, el Comité ofrece las siguientes conclusiones y recomendaciones.

[395] Antigua y Barbuda ha considerado y adoptado medidas dirigidas a mantener y fortalecer la Oficina del Director del Ministerio Público (DPP) como órgano de control superior, conforme lo indicado en la sección 4 del literal “B” del Capítulo II del presente informe.

[396] En vista de los comentarios formulados en la sección antes mencionada, el Comité sugiere que el país analizado considere las siguientes recomendaciones.

- 4.4.1. Asegurar que la autonomía de la Oficina del Director del Ministerio Público, prevista en el artículo 88 (5) de la Constitución, no quede afectada por su dependencia administrativa de la Procuraduría General y Ministerio de Asuntos Jurídicos (véase la sección 4.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 4.4.2. Asegurar que la Oficina del Director del Ministerio Público cuente con una mayor independencia presupuestaria (véase la sección 4.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 4.4.3. Adoptar, en el marco de los recursos disponibles, las medidas adecuadas para asegurarse de que la Oficina del Director del Ministerio Público cuente con los fiscales principales, los oficiales jurídicos y el personal de apoyo que necesite para desempeñar sus funciones (véase la sección 4.2 del Capítulo II (B) del presente informe).

- 4.4.4. Elaborar instrumentos, manuales y/o guías que instruyan a los fiscales a iniciar y tramitar efectiva y correctamente los procesos penales por actos de corrupción (véase la sección 4.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 4.4.5. Proporcionar a la Oficina del Director del Ministerio Público los recursos financieros necesarios para asegurar que sus fiscales reciban la capacitación periódica que precisan para mantener y mejorar sus conocimientos y aptitudes en materia de judicialización de actos de corrupción, teniendo en cuenta la disponibilidad de dichos recursos (véase la sección 4.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 4.4.6. Adoptar las medidas adecuadas para asegurar que la Oficina del Director del Ministerio Público cuente en forma oportuna con los recursos presupuestarios que necesita para desempeñar sus funciones (véase la sección 4.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 4.4.7. Considerar la imposición de una obligación legal a la Oficina del Director del Ministerio Público a fin de que rinda cuentas y publique informes anuales, con divulgación de sus actividades y de los resultados obtenidos, así como el nivel de desempeño interno de la institución y sus objetivos, desafíos y logros (véase la sección 4.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 4.4.8. Asegurarse de que el informe anual de las actividades de la Oficina del Director del Ministerio Público presente al público información pertinente relativa a la tarea de este órgano de control superior, tal como sus recursos humanos, su organigrama, su asignación presupuestaria, sus gastos, la capacitación que brinda y datos estadísticos de su labor (véase la sección 4.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 4.4.9. Crear y mantener un sitio institucional actualizado en Internet para la Oficina del Director del Ministerio Público a fin de que el público cuente con un fácil acceso a la información relativa a sus labores y a las formas de comunicarse con el órgano. Asegurarse de que dicho sitio, entre otros elementos, contenga los informes anuales indicados en la recomendación precedente, así como planes estratégicos y legislación pertinente y descripciones y especificaciones de los puestos de trabajo (véase la sección 4.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 4.4.10. Implementar mecanismos de coordinación entre Oficina del Director del Ministerio Público, la Comisión de Integridad, la Fuerza de la Policía Real de Antigua y Barbuda, la Procuraduría General (y su futura Unidad Anticorrupción), la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas y Lavado de Dinero (ONDCP) a fin de establecer procedimientos y/o directrices efectivas y oportunas para los intercambios de información y de asesoramiento jurídico para la presentación correcta ante los tribunales de procedimientos penales relativos a actos de corrupción (véase la sección 4.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 4.4.11. Recopilar y publicar datos estadísticos de las investigaciones, efectuadas por las autoridades competentes, relativas a actos de corrupción tipificados en el Código Penal, en la Ley de Hurtos, en la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 y en la Ley de Prevención de la Corrupción de 2004, incluidos los datos que indiquen claramente cuántas investigaciones se hallan en curso, cuántas han sido suspendidas o desestimadas por el motivo que fuere, cuántas han sido cerradas por haber prescrito el plazo legal, cuántas han sido remitidas para su judicialización penal (y la disposición final que se les ha conferido) y cuántas han sido transmitidas a las autoridades

competentes para la aplicación de medidas disciplinarias (es decir, sin carácter penal) a efectos de individualizar desafíos y recomendar acciones correctivas, cuando corresponda (véase la sección 4.3 del Capítulo II (B) del presente informe).

- 4.4.12. Recopilar y publicar datos estadísticos relativos a judicializaciones iniciadas por actos de corrupción tipificados en el Código Penal, en la Ley de Hurtos, en la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 y en la Ley de Prevención de la Corrupción de 2004, incluidos los datos que indiquen claramente cuántas investigaciones se hallan en curso, cuántas han sido suspendidas o desestimadas por el motivo que fuere, cuántas han sido cerradas por haber prescrito el plazo legal, cuántas han finiquitado por declaración del acriminado, cuántas han pasado a la etapa de juicio (y el resultado de dicho juicio), cuántas han sido transmitidas a las autoridades competentes para la aplicación de medidas disciplinarias (es decir, sin carácter penal) a efectos de individualizar desafíos y recomendar acciones correctivas, cuando corresponda (véase la sección 4.3 del Capítulo II (B) del presente informe).

5. OFICINA DEL DIRECTOR DE AUDITORÍAS

5.1 Existencia de un marco legal y/o de otras medidas

[397] La Oficina del Director de Auditorías (*Office of the Director of Audit, ODA*) posee una serie de disposiciones en su marco jurídico y otras medidas relativas, entre otros, a los siguientes aspectos.

[398] Con respecto a sus objetivos y funciones, el artículo 90(2) de la Constitución de Antigua y Barbuda establece que al menos una vez por año el Director de Auditorías auditará y presentará informes relativos a las cuentas públicas del país, así como a las de todos los funcionarios y autoridades gubernamentales, de los tribunales judiciales del país (incluidas las cuentas de la Corte Suprema mantenidas en Antigua y Barbuda), las de todas las comisiones establecidas por la Constitución, las del Secretario de la Cámara de Representantes y las del Secretario del Senado.¹⁴⁸

[399] El artículo 97 (3) de la Constitución faculta al Director de Auditorías a auditar las cuentas, balances y demás estados financieros de las empresas de propiedad de Antigua y Barbuda o controladas por dicho país o administradas en su nombre.¹⁴⁹

[400] El artículo 97(7) de la Constitución dispone que el Director de Auditorías ejercerá las demás funciones prescritas por la legislación sancionada por el Parlamento en relación con las cuentas del Gobierno, las de otras autoridades u órganos establecidos por ley a efectos públicos o las de empresas de propiedad de Antigua y Barbuda o controladas por dicho país o administradas en su nombre.

[401] El artículo 97(5) de la Constitución prevé que el Director de Auditorías presente todos los informes que elabore en virtud de dicha disposición constitucional al Ministro que en el momento sea responsable de las finanzas quien, tras su recepción, los presentará ante la Cámara de Representantes a más tardar dentro de los siete días de la próxima sesión de dicha cámara. No obstante, el artículo 97(6) establece que si el Ministro no los presenta a la cámara baja dentro del mencionado plazo el Director de Auditorías remitirá copias al presidente de la cámara el cual, a la brevedad posible, lo presentará a ella.

[402] El artículo 9(1)(3) de la Ley de la Oficina del Director de Auditorías de 2014 prevé que el director del órgano deberá cerciorarse de que a) se hallan tomado todas las precauciones razonables para

¹⁴⁸ Véase asimismo el artículo 9(1)(b) de la Ley de la Oficina del Director de Auditorías de 2014, disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ant_dir_aud.pdf

¹⁴⁹ Véase asimismo el artículo 9(2) de la Ley de la Oficina del Director de Auditorías de 2014.

salvaguardar la recaudación y custodia de ingresos y de que se respeten debidamente todas las normas legales, directivas e instrucciones relativas a dichas acciones; b) las erogaciones se efectúen teniendo en cuenta los aspectos económicos y el valor obtenido; c) los dineros públicos distintos de los asignados se manejen de conformidad con las autorizaciones correspondientes; d) se tomen todas las precauciones razonables para proteger la recepción, custodia, emisión y uso adecuado del metálico, timbres, títulos valores y pertrechos y se respeten las correspondientes normas, directivas e instrucciones; así como de que existan reglamentos, directrices o instrucciones adecuadas para la orientación del funcionario de rendición de cuentas.

[403] El artículo 21(1) amplía las facultades del Director de Auditorías a efectos de que realice un análisis de la economía, eficiencia y eficacia con las que un ente u órgano ha utilizado en el año de que se trate los recursos del gobierno en el desempeño de sus funciones. ¹⁵⁰

[404] Respecto de su independencia y según el artículo 97 (8) de la Constitución, en el ejercicio de sus funciones el Director de Auditorías no está sujeto a la dirección ni al control de ninguna persona o autoridad.

[405] El artículo 97(4) dispone asimismo que el Director de Auditorías y el funcionario autorizado por él podrán acceder a los libros, registros, declaraciones impositivas, informes y demás documentos que a su criterio estén relacionados con cualquiera de las cuentas. El artículo 17 de la Ley de la Oficina del Director de Auditorías de 2014 amplía aún más las atribuciones del Director al respecto. Por ejemplo, a efectos del análisis de una cuenta, el Director de Auditorías está facultado para acceder en todo momento conveniente a los registros, libros, comprobantes, datos electrónicos, otros documentos, dineros, timbres, títulos valores, pertrechos, equipamientos y demás bienes del gobierno o de un órgano u organización públicos que se hallen en manos o bajo el control de una persona, así como de interrogar a una persona bajo juramento respecto de cualquier asunto relativo a una cuenta que esté auditando.

[406] Asimismo el artículo 11 de la Ley de la Oficina del Director de Auditorías de 2014 dispone que *“con sujeción al deber que le imponen la Constitución y la presente ley, el Director de Auditorías (a) contará con discreción plena en el desempeño de sus funciones y, en particular, en la decisión de realizar un examen de cuentas conforme lo previsto en la presente ley y la manera en la cual efectuarlo; salvo que en su decisión de realizar dicho examen podrá tener en cuenta las solicitudes presentadas por el Comité de Cuentas Públicas y (b) tendrá el deber de hacer un seguimiento de las recomendaciones y de presentar al Comité de Cuentas Públicas los resultados que obtenga”*.

[407] El artículo 26(1) de la Ley de la Oficina del Director de Auditorías de 2014 dispone asimismo que no podrán incoarse acciones penales ni civiles en contra del Director de Auditorías, ni contra la persona que actúe en su nombre o bajo su dirección, por actos, informes o manifestaciones que se efectúen de buena fe en el curso del desempeño por sí o por su mandatario de las atribuciones, obligaciones o funciones previstas en dicha ley o en cualquier otra.

[408] El artículo 102(1) de la Constitución dispone que el Director de Auditorías será designado por el Gobernador General con el asesoramiento de la Comisión del Servicio Público, después de que ésta haya hecho las consultas del caso con el Primer Ministro y obtenido su acuerdo. ¹⁵¹

¹⁵⁰ El artículo 21(3) de la Ley de la Oficina del Director de Auditorías de 2014 dispone que dicho director consultará a la autoridad u órgano y al correspondiente ministerio a fin de determinar si debido a los ingresos de dicha autoridad u órgano debe incluírselos en la categoría prevista en el artículo 21(1). Asimismo, el artículo 21(4) dispone que a los efectos de la presente sección se entiende que se han recibido dineros públicos si (a) provienen de fondos establecidos por asignaciones del parlamento o (b) provienen de una autoridad u órgano que entra en la categoría prevista en el artículo 21(1), incluidas las autoridades u órganos que queden incluidos en dicho inciso en virtud de las disposiciones del presente acápite.

¹⁵¹ Véase asimismo el artículo 4 de la Ley de la Oficina del Director de Auditorías de 2014.

[409] El artículo 102(3) de la Constitución prevé que se le aplicarán al Director de Auditorías las disposiciones de los incisos (5) a (11) inclusive de su artículo 87 (relativo al nombramiento y dimisión del Director del Ministerio Público) conforme se aplican al Director del Ministerio Público, salvo que en los incisos (9) y (10) las referencias a la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos se interpretarán como referencias a la Comisión de Servicios Públicos.¹⁵²

[410] Respecto de su personal, el artículo 3(2) de la Ley de la Oficina del Director de Auditorías de 2014 dispone que la Comisión del Servicio Público deberá consultar al Director de Auditorías antes de realizar nombramientos de personal. Dado su carácter de funcionarios públicos, los miembros del personal de la ODA están sujetos a las normas sobre designaciones, dimisiones y disciplina de la Ley del Servicio Público, del Reglamento del Servicio Público de 1993 y del Reglamento del Servicio Público de 1967, entre otras. Dicho personal debe acatar las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), incluidas dos de importancia: la ISSAI 10 (Independencia) y la ISSAI 30 (Código de Ética). Además, se le aplican al Director y al Subdirector de Auditorías las disposiciones de la Ley de Integridad en la Función Pública de 2004 y del Código de Conducta previsto en su anexo segundo.

[411] Según la información proporcionada por los representantes de la ODA durante la visita *in situ*,¹⁵³ los cargos del órgano se cubren después de que el director haya actualizado la descripción del puesto respectivo y la haya enviado a la Comisión del Servicio Público a través del Departamento de Establecimiento. En la actualidad los miembros del personal de la ODA son 19. Cuatro (4) de ellos se hallan adscriptos a diversos departamentos y uno (1) está de licencia por estudios. Todos son empleados permanentes; ninguno se desempeña por contrato. Hay dieciséis (16) puestos vacantes en el órgano: un (1) gerente de auditoría, seis (6) auditores, un (1) auditor asistente, cinco (5) analistas de cuentas de nivel II y tres (3) analistas de cuentas de nivel I.

[412] Respecto de la existencia de manuales o documentos relativos al desempeño de sus tareas y la descripción de sus funciones, en la información adicional proporcionada en la Respuesta al Cuestionario¹⁵⁴ y durante la visita *in situ*,¹⁵⁵ el país analizado informó que la ODA utiliza el Manual de Auditoría Armonizado de la OECO elaborado en 2009 por CRC Sogema para el Centro del Caribe de Administración del Desarrollo (CARICAD).¹⁵⁶ Asimismo, indica lo siguiente en su Respuesta al Cuestionario: “*el Departamento de Auditoría no se halla aun dando pleno cumplimiento a dichas normas, aunque trabaja en pos del logro de dicho objetivo. Por ejemplo, todos los viernes se realiza un curso interno de capacitación sobre las normas de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). Además, generalmente una vez por año se realizan cursos de capacitación regionales relativos a dichas normas*”.

[413] Durante la visita *in situ* el director de la ODA proporcionó un ejemplar del programa de auditoría (gastos) que consigna una lista de los procedimientos exigidos en estos tipos de auditoría,¹⁵⁷ así como los

¹⁵² Véase asimismo el artículo 7 de la Ley de la Oficina del Director de Auditorías de 2014.

¹⁵³ Ver páginas 2 y 3 del documento “OEA. Reunión con el Depto. de Auditoría, oct., 2014”, disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_oas_mee_aud_dep_2014.pdf

¹⁵⁴ Respuesta de Antigua y Barbuda al cuestionario en el marco de la Cuarta Ronda, pág. 52, disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_que_resp_track.pdf

¹⁵⁵ Ver páginas 2 y 4 del documento “OEA. Reunión con el Depto. de Auditoría, oct., 2014”, disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_oas_mee_aud_dep_2014.pdf

¹⁵⁶ Este manual presenta las normas de la organización de auditoría, los estándares y procesos, así como las políticas generales de realización de auditorías. Está disponible en:

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_har_aud_man_fin_24_mar_2010.pdf

¹⁵⁷ Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_aud_prog_exp.pdf

planes de auditoría que detallan la función, objetivo y pasos del proceso, además de subrayar el desempeño de los miembros del personal del órgano.¹⁵⁸

[414] En materia de capacitación, durante la visita *in situ* el Director de Auditorías presentó información relativa a las actividades de formación en las que participó su personal en los últimos tres (3) años, incluidos talleres y reuniones sobre diversos temas organizados por las Instituciones de Auditoría Superior del Caribe (CAROSAI), así como varios cursos de informática, algunos de los cuales fueron brindados por el Departamento de Capacitación de Antigua y Barbuda.¹⁵⁹

[415] Con respecto al desarrollo institucional, durante la visita *in situ* el Director de Auditorías informó que se estaba implementando el plan estratégico 2013-2017,¹⁶⁰ el cual, entre otros elementos, contiene la visión de la ODA, su misión, sus valores y cinco (5) objetivos estratégicos individualizados como prioridades actuales del órgano. Cada uno de dichos objetivos está respaldado por acciones específicas que realizará la ODA.

[416] El Director de Auditorías comunicó también que la ODA había concluido una (1) de las tres secciones del programa de las 3i del INTOSAI,¹⁶¹ relativa a la autoevaluación de la oficina respecto de auditorías de cumplimiento de normas, financieras y de desempeño.¹⁶²

[417] Respecto de la forma en que se aseguran los recursos financieros para sus operaciones, en la información adicional proporcionada en la Respuesta al Cuestionario el país analizado manifiesta lo siguiente:¹⁶³ “*Antes de la sanción de la Ley de la Oficina del Director de Auditorías de 2014, el Departamento de Auditoría elaboraba un presupuesto y un plan de actividades que se enviaban al Ministro responsable de finanzas y generalmente se efectuaban cambios a dicho presupuesto. El presupuesto se remitía a su vez al Gabinete para ser deliberado por el ministro y tras ello al Parlamento a efectos de su aprobación. Una vez aprobado se realizaban los pagos con dineros del Fondo Consolidado, según el presupuesto aprobado.*

[418] *No obstante, el artículo 12 de la mencionada ley dispone las fuentes de fondos de la Oficina del Director de Auditorías y el 13 deja en claro que los asuntos financieros de dicho órgano se ajustarán al presupuesto y plan de actividades elaborado por su director y presentado al Ministro responsable de finanzas a efectos de su inclusión en el presupuesto nacional.*”

[419] Durante la visita *in situ* el Director de Auditorías proporcionó la siguiente información¹⁶⁴ relativa al presupuesto de la ODA (en dólares del Caribe oriental¹⁶⁵):

Año	Presupuesto	Actual	Presupuesto anual del
-----	-------------	--------	-----------------------

¹⁵⁸ Se suministraron dos de estos planes de auditoría que se encuentran disponibles, respectivamente, en:

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_aud_pla_2014_2.pdf y

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_aud_pla_2014.pdf

¹⁵⁹ Las páginas 3 y 4 del documento “OEA. Reunión con el Depto. de Auditoría, oct., 2014” presentan una lista completa de las actividades de capacitación. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_oas_mee_aud_dep_2014.pdf

¹⁶⁰ Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_str_pla_2013_2017.pdf

¹⁶¹ Ver página 4 del documento “OEA. Reunión con el Depto. de Auditoría, oct., 2014”, disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_oas_mee_aud_dep_2014.pdf

¹⁶² Para más información sobre las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) y su iniciativa de implementación (Programa 3I de la INTOSAI) consúltese: <http://www.idicommunity.org/3i/index.php/3i-programme/about-the-3i-programme>

¹⁶³ Respuesta de Antigua y Barbuda al cuestionario en el marco de la Cuarta Ronda, pág. 56. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_que_resp_track.pdf

¹⁶⁴ Ver página 6 del documento “OEA. Reunión con el Depto. de Auditoría, oct., 2014”, disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_oas_mee_aud_dep_2014.pdf

¹⁶⁵ 1 dólar estadounidense = aproximadamente 2,7 dólares del Caribe oriental (al 17 de octubre de 2014).

			país
2009	\$1.490.341,00	\$931.694,10	\$974.768.630,00
2010	\$1.505.790,00	\$895.742,07	\$886.478.273,00
2011	\$1.205.816,00	\$1.010.361,1	\$824.900.972,00
2012	\$1.051.330,00	\$920.799,06	\$752.591.253,00
2013	\$1.107.368,00	\$1.030.265,11	\$1.086.239.200,00
2014	\$1.109.434,00	N/C	\$874.824.842,00

[420] En cuanto a la forma en que el órgano le proporciona al público información relativa a sus objetivos y funciones, el Director de Auditorías comunicó lo siguiente durante la visita *in situ*:¹⁶⁶ *En la actualidad la Oficina del Director de Auditorías presenta sus informes al Ministro de Finanzas y Gobernanza Corporativa, a efectos de su remisión al Parlamento. Estos informes se hacen públicos después de que el Comité de Cuentas Públicas (PAC) ha celebrado reuniones para deliberarlos. No obstante, de conformidad con el artículo 25(6) de la Ley de la Oficina del Director de Auditorías de 2014, una vez que el Director de Auditorías ha presentado el informe ante la Cámara de Representantes lo publicará en el sitio del gobierno en internet y ejecutará todo otro acto razonable para asegurarse de que las conclusiones de la auditoría se hagan públicas.*”

[421] El Director de Auditorías informó asimismo que el último informe anual de la ODA de elaboró para el año 2012¹⁶⁷ y que, tras la entrada en vigencia en 2014 de la Ley de la Oficina del Director de Auditorías, el informe de auditoría interna no debía presentarse sino hasta 2105.¹⁶⁸

[422] En la información adicional proporcionada en la Respuesta al Cuestionario el país analizado comunicó que¹⁶⁹ si bien el Departamento de Auditoría no posee un sitio en Internet, un mes después de la presentación de los informes de auditoría al Comité de Cuentas Públicas puede colocárselos en el sitio del gobierno (<http://www.ab.gov.ag>).

[423] En cuanto a los mecanismos de coordinación para la armonización de funciones, el artículo 22 (3) de la Ley de la Oficina del Director de Auditorías de 2014 dispone que ante instancias de fraude o error el Director de Auditorías enviará inmediatamente un aviso escrito de dicha irregularidad al correspondiente funcionario de rendición de cuentas (Secretario Permanente) con copia al Secretario de Finanzas. Durante la visita *in situ* el Director de Auditorías informó que se remite asimismo un ejemplar del aviso al Procurador General, al Ministro de Finanzas y al ministro responsable de dicha cartera.¹⁷⁰

[424] Respecto de los mecanismos de control interno y de manejo de reclamos, denuncias o alegatos correspondientes a la consecución de sus objetivos y al desempeño de su personal, durante la visita *in situ* se manifestó que la ODA no posee una unidad de auditoría interna. No obstante, en lo relativo al control externo, el artículo 14(1) de la Ley de la Oficina del Director de Auditorías de 2014 prevé que “*anualmente cualquier auditor cualificado, facultado para ejercer como contador profesional en Antigua y Barbuda, designado por el Ministro [de Finanzas] tras consulta con el Comité de Cuentas Públicas y aprobación de la Cámara de Representantes mediante resolución al efecto, examinará y auditará las cuentas de la Oficina del Director de Auditorías y elaborará un informe de sus conclusiones*”.

¹⁶⁶ Ver página 5 del documento “OEA. Reunión con el Depto. de Auditoría, oct., 2014”, disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_oas_mee_aud_dep_2014.pdf

¹⁶⁷ Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_off_dir_aud_ann_mgmt_rep_12.pdf

¹⁶⁸ Ver página 5 del documento “OEA. Reunión con el Depto. de Auditoría, oct., 2014”, disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_oas_mee_aud_dep_2014.pdf

¹⁶⁹ Respuesta de Antigua y Barbuda al cuestionario en el marco de la Cuarta Ronda, pág. 54. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_que_resp_track.pdf

¹⁷⁰ Ver página 1 del documento “OEA. Reunión con el Depto. de Auditoría, oct., 2014”, disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_oas_mee_aud_dep_2014.pdf

[425] Durante la visita *in situ* el Director de Auditorías informó también que la evaluación de los miembros del personal se plasma en informes que se envían a la Comisión del Servicio Público a través del Departamento de Establecimientos.¹⁷¹ Se proporcionó asimismo un ejemplar de la Lista de Confirmación de Cumplimiento del Personal (Declaración de Independencia).¹⁷²

5.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[426] La Oficina del Director de Auditorías (ODA) posee una serie de disposiciones y/o de otras medidas pertinentes para la promoción de los propósitos de la Convención, algunas de las cuales se describieron brevemente en la sección 5.1. No obstante, el Comité considera adecuado formular algunas observaciones relativas a tales disposiciones y/o medidas.

[427] En primer lugar, teniendo en cuenta que aunque el artículo 97(8) de la Constitución dispone que en el ejercicio de sus funciones el Director de Auditorías no estará sujeto a la dirección ni al control de ninguna persona o autoridad, el Comité observa que el cláusula 97(5) de dicha norma establece que deberá presentar al Ministro de Finanzas los informes elaborados con arreglo a las funciones que le asigna el artículo 97 de la Carta Magna, el cual los remitirá a la Cámara de Representantes. El Comité considera que dicha disposición constituye una restricción a la autonomía funcional propia de un órgano de control superior como la ODA. El Comité es consciente de que dicha restricción tiene rango constitucional, al igual que la autonomía del Director de Auditorías. Por ese motivo, no se emite una recomendación al respecto.

[428] En relación con lo anterior, cabe notar que en el plan estratégico 2013-2017 se indica que una de las cinco acciones programadas para cumplir el objetivo estratégico de lograr una mayor independencia institucional es “*obtener autorización legislativa para presentar informes directamente al Parlamento en lugar de hacerlo mediante el Ministro de Finanzas*”.¹⁷³

[429] En segundo lugar, durante la visita *in situ* el Director de Auditorías informó que el órgano no posee una unidad de fraude ni de auditoría forense. Manifestó asimismo que no existe obligación legal alguna de que la ODA envíe solicitudes en materia de fraude a la Comisión de Integridad, a la del Servicio Público, a la policía ni a la DPP.¹⁷⁴

[430] El único fundamento legal con base en el cual el Director de Auditorías puede denunciar una irregularidad, tal como alguna actividad fraudulenta, se encuentra en el artículo 22, inciso 3, de la Ley de la Oficina del Director de Auditorías de 2014. Dicho inciso dispone que si a criterio del Director de Auditorías se ha suscitado alguna irregularidad a) relativa a la recepción, custodia, emisión o gasto de fondos públicos; b) con respecto a la recepción, custodia, emisión, venta, transferencia o entrega de timbres, títulos valores, pertrechos u otros bienes del gobierno o c) en la rendición de cuentas de los procedimientos previstos en los acápites a) y b), deberá enviar inmediatamente un aviso escrito de tal irregularidad al correspondiente funcionario de rendición de cuentas con copia al Secretario de Finanzas.

[431] Al respecto el Comité estima que el país analizado debería considerar imponer la exigencia de que la ODA comunique los incumplimientos o las sospechas de actividades fraudulentas a otras autoridades correspondientes, como la Comisión de Integridad, la Fuerza de la Policía Real de Antigua y Barbuda, la Oficina del Director del Ministerio Público (DPP), la Comisión del Servicio Público, la Procuraduría General (incluida su futura Unidad de Anticorrupción), la Oficina del Contador general y/o la Oficina de

¹⁷¹ *Ibid.*, pág. 5.

¹⁷² Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_sta_com_con_check.pdf

¹⁷³ Ver página 8 del documento “*Strategic Plan 2013 - 2017*” (Plan estratégico 2013-2017), disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_str_pla_2013_2017.pdf

¹⁷⁴ Ver página 1 del documento “OEA. Reunión con el Depto. de Auditoría, oct., 2014”, disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_oas_mee_aud_dep_2014.pdf

Políticas Nacionales de Control de Drogas y Lavado de Dinero (ONDCP) a efectos de que se tomen medidas correspondientes. El Comité cree que de esta forma se facilitaría el apoyo recíproco entre la ODA y los mencionados entes, lográndose una mayor efectividad en la detección, investigación y sanción de actos de corrupción. El Comité formulará recomendaciones al respecto (véanse las recomendaciones 5.4.1 y 5.4.2 en la sección 5.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[432] En relación con lo anterior cabe notar que durante la visita *in situ* el Director de Auditorías informó que *“la Oficina del Director de Auditorías ha detectado prácticas que pueden considerarse fraudulentas. La información necesaria se ha remitido a los respectivos funcionarios de rendición de cuentas (Secretarios Permanentes), a la Fuerza de la Policía Real de Antigua y Barbuda y al Procurador General. No obstante, hubo una falta de seguimiento en la mayoría de estos casos por parte de las mencionadas entidades. Es necesaria una mayor cooperación.”*¹⁷⁵

[433] En tercer lugar, el Comité observa la ausencia de mecanismos para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la ODA en sus informes de auditoría. En la información adicional proporcionada en la Respuesta al Cuestionario¹⁷⁶ el país analizado resalta lo siguiente: *“Respecto del fortalecimiento institucional, pocas veces se concluye el ciclo de informes que lo haría posible. El mecanismo requiere que los informes de auditoría concluidos se remitan al Ministro responsable de finanzas para ser presentados al Comité de Cuentas Públicas a efectos de que formule recomendaciones para la promoción del fortalecimiento institucional. Sin embargo, una vez que los informes se transmiten a dicho comité no existe seguimiento alguno y no se efectúan recomendaciones. Otro dato es que el Comité de Cuentas Públicas se ha reunido dos veces en casi tres (3) años.”*

[434] En la visita *in situ* el Director de Auditorías subrayó que *“el Comité de Cuentas Públicas no se ha reunido durante el año calendario 2014 y celebró una (1) sesión en febrero de 2013, en la cual se examinaron los papeles y responsabilidades de los integrantes de la Comisión de Cuentas Públicas (PAC). En consecuencia, el mecanismo de rendición de cuentas y desempeño no se encuentra implementado respecto de los objetivos de la Oficina del Director de Auditorías.”*¹⁷⁷

[435] El Comité observa que la falta de reuniones habituales del Comité de Cuentas Públicas a efectos de revisar los informes de la ODA parece privar al país analizado de un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones emitidas por ella en los mismos. El Comité de Cuentas Públicas (PAC) contaría presumiblemente con esa capacidad de seguimiento de las recomendaciones de la ODA una vez que fueran presentadas ante la Cámara de Representantes con arreglo al artículo 98 de la Constitución. No obstante, si el PAC no sesiona es posible que el cumplimiento de tales recomendaciones quede sin abordar ni resolver. En consecuencia no se está utilizando eficazmente un canal de rendición de cuentas para la implementación de las recomendaciones.¹⁷⁸

[436] El Comité considera que en vista de la significativa labor realizada por la Oficina del Director de Auditorías resulta extremadamente importante que el país analizado considere la adopción de las medidas necesarias para asegurar la implementación de un mecanismo que funcione a fin de garantizar el seguimiento y cumplimiento adecuados de las recomendaciones emitidas por la ODA.

¹⁷⁵ Ver página 8 del documento “OEA. Reunión con el Depto. de Auditoría, oct., 2014”, disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_oas_mee_aud_dep_2014.pdf

¹⁷⁶ Respuesta de Antigua y Barbuda al cuestionario en el marco de la Cuarta Ronda, pág.54. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_que_resp_track.pdf

¹⁷⁷ Ver página 6 del documento “OEA. Reunión con el Depto. de Auditoría, oct., 2014”, disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_oas_mee_aud_dep_2014.pdf

¹⁷⁸ Al respecto, Antigua y Barbuda informó que se ha designado un nuevo Comité de Cuentas Públicas, presidido por el Jefe de la Oposición. El PAC es otro mecanismo de seguimiento y fiscalización del uso y la gestión de las finanzas públicas.

[437] En vista de lo anterior y teniendo en cuenta que las recomendaciones de la ODA no son de por sí vinculantes para los ministerios y demás organismos públicos sujetos a su control, el Comité sugiere que el país analizado considere adoptar las medidas necesarias para garantizar que el Comité de Cuentas Públicas (PAC) se reúna en forma periódica y que se revisen las órdenes permanentes del Parlamento y el reglamento del PAC a fin de asegurar que los informes de la ODA presentados al Parlamento se aborden sin demoras a efectos de permitir acciones correctivas expeditivas. El Comité sugiere asimismo que el país analizado considere la adopción de otras medidas que estime necesarias para asegurar que las autoridades y órganos sujetos al control de la ODA cumplan efectivamente las recomendaciones plasmadas en sus informes de auditoría. El Comité formulará recomendaciones al respecto (véanse las recomendaciones 5.4.3 y 5.4.4 en la sección 5.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[438] En relación con lo anterior, cabe notar que en el plan estratégico 2013-2017 se indica que una de las cinco acciones programadas para cumplir el objetivo estratégico de lograr una mayor independencia organizativa es “*colaborar con los parlamentarios y con el personal a fin de lograr un Comité de Cuentas Públicas activo y eficaz*”.¹⁷⁹

[439] En cuarto lugar, en la información adicional proporcionada en la Respuesta al Cuestionario¹⁸⁰ el país analizado comunicó que “*hay una falta de recursos humanos en el Departamento de Auditoría, como otros auditores y personal gerencial de nivel intermedio*”. Durante la visita *in situ* el Director de Auditorías informó al respecto que el órgano contaba con dieciséis (16) puestos vacantes,¹⁸¹ entre los que se encontraba uno de gerente de auditoría y seis de auditores.

[440] El Director de Auditorías informó asimismo que en 2013 comenzó a equipar a la ODA con una moderna red informática y que toda la oficina se hallaba plenamente equipada y conectada en red con computadoras y demás dispositivos auxiliares. No obstante, no se adquirieron los programas informáticos necesarios, *TeamMate* e *IDEA*, que habían sido presupuestados para 2013.

[441] El Director de Auditorías señaló que no se estaba dando cumplimiento al artículo 13 de la Ley de la Oficina del Director de Auditorías de 2014. El artículo 13(2) de dicha norma dispone que, antes del inicio del ejercicio económico, el Director de Auditorías deberá elaborar el presupuesto y plan de actividades de su órgano y presentarlo al Ministro responsable de finanzas a efectos de su inclusión en el presupuesto nacional. El artículo 13(4) establece que el mencionado ministro considerará el presupuesto y plan presentados y, dentro de un mes de su recepción, presentará el presupuesto al Parlamento para su aprobación y para su inclusión en el presupuesto como una partida separada de fondos del Fondo Consolidado. No obstante, el Director de Auditorías informó que el presupuesto de la ODA no se presentó al Parlamento a efectos de su aprobación, sino que el Ministro de Finanzas fue quien tomó la decisión relativa al presupuesto del órgano.

[442] El Comité observa que este incumplimiento de las normas relativas a los fondos que la Ley de la Oficina del Director de Auditorías de 2014 le proporciona a la ODA puede afectar la independencia del Director de Auditorías, dado que el órgano audita las cuentas del Ministerio de Finanzas. Asimismo, el Comité observa que en el periodo 2009 a 2014 el presupuesto de la ODA representó en promedio un 0,15% del presupuesto nacional del país.

[443] El Comité estima que la insuficiencia de presupuesto, personal y recursos tecnológicos adecuados, tales como programas informáticos de auditoría, puede ser un factor limitante del alcance de

¹⁷⁹ Ver página 8 del documento “*Strategic Plan 2013 - 2017*” (Plan estratégico 2013-2017), disponible en:

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_str_pla_2013_2017.pdf

¹⁸⁰ Respuesta de Antigua y Barbuda al cuestionario en el marco de la Cuarta Ronda, pág.49. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_que_resp_track.pdf

¹⁸¹ Ver página 3 del documento “OEA. Reunión con el Depto. de Auditoría, oct., 2014”, disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_oas_mee_aud_dep_2014.pdf

las auditorías y aumentar el riesgo de que durante ellas no se logren identificar actividades fraudulentas o que se produzcan inexactitudes en las cuentas públicas. Asimismo, puede hacer más difícil los otros importantes deberes de la ODA, como las “auditorías de desempeño”, es decir, el examen de los programas, funciones, operaciones y procedimientos de una entidad gubernamental para evaluar si logra la economía, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos disponibles.

[444] En vista de lo anterior el país analizado debería considerar asegurar el cumplimiento del artículo 13 de la Ley de la Oficina del Director de Auditorías de 2014, además de proporcionar a la ODA recursos presupuestarios, humanos y tecnológicos suficientes para que desempeñe adecuadamente sus funciones, en el marco de los recursos disponibles. El Comité formulará recomendaciones al respecto (véanse las recomendaciones 5.4.5 y 5.4.6 en la sección 5.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[445] En quinto lugar, el Comité observa que la Oficina del Director de Auditorías desempeña un papel importante en Antigua y Barbuda al garantizar la transparencia y la rendición de cuentas mediante la correspondiente documentación e informes. A fin de profundizar dicho papel, el Comité considera que el país analizado debería establecer un sitio en internet para este órgano de control superior. El sitio aseguraría el desempeño de sus funciones propias de manera transparente y con rendición de cuentas ante el público en general. Debería contener información básica, tal como su mandato, datos de contacto e informes emitidos por el órgano, además del informe de auditoría interna dispuesto por el artículo 14 de la Ley de la Oficina del Director de Auditorías de 2014, así como datos estadísticos de su labor, planes estratégicos, legislación pertinente y descripciones y especificaciones de sus puestos de trabajo. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 5.4.7 en la sección 5.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[446] En relación con lo anterior, cabe notar que en el plan estratégico 2013-2017 se indica que una de las cinco acciones programadas para cumplir el objetivo estratégico de comunicar clara y directamente al Parlamento y al público su papel de auditoría y sus resultados es “*crear un sitio en internet de la oficina de auditoría que sea informativo para los usuarios, con actualización frecuente de la información publicada en él, incluidos los informes de auditoría.*”¹⁸²

[447] En sexto lugar, el Comité observa la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas que hagan pública la labor de la ODA o que informen al público los resultados del desempeño de sus funciones. En este sentido durante la visita in situ el Director de Auditorías señaló ¹⁸³ que el último informe anual preparado por la ODA en el que se comunicaban sus roles, responsabilidades y funciones y se resumían sus actividades fue el correspondiente al año 2012.¹⁸⁴ En este sentido el Comité observa que aunque se confeccionó un informe anual para 2012 la ODA no tiene la obligación legal de elaborar informes anuales de sus actividades. En vista de esta circunstancia y de la importancia de mejorar la rendición de cuentas de la Oficina del Director de Auditorías el Comité formulará las recomendaciones correspondientes (véanse las recomendaciones 5.4.8 y 5.4.9 en la sección 5.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[448] En relación con lo anterior, cabe notar que en el plan estratégico 2013-2017 se indica que una de las cinco acciones programadas para cumplir el objetivo estratégico de comunicar clara y directamente al Parlamento y al público su papel de auditoría y sus resultados es “*elaborar un informe anual del*

¹⁸² Ver página 11 del documento “*Strategic Plan 2013 - 2017*” (Plan estratégico 2013-2017), disponible en:

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_str_pla_2013_2017.pdf

¹⁸³ Ver página 5 del documento “OEA. Reunión con el Depto. de Auditoría, oct., 2014”, disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_oas_mee_aud_dep_2014.pdf

¹⁸⁴ Ver página 11 del documento “*Strategic Plan 2013 - 2017*” (Plan estratégico 2013-2017), disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_str_pla_2013_2017.pdf

*desempeño de la oficina de auditoría, con inclusión de sus estados financieros auditados, y presentarlo ante el Comité de Cuentas Públicas”.*¹⁸⁵

[449] En séptimo lugar, el Comité deja constancia de que los informes del Director de Auditorías relativos a las cuentas públicas, los cuales deben entregarse al presidente de la Cámara de Representantes para que éste a su vez lo presente a dicho cuerpo sin demoras indebidas, según lo dispuesto en el artículo 97(6) de la Constitución, no se hallan fácilmente disponibles al público en general. Como se indicara precedentemente, la ODA no posee un sitio en internet que permita al público tomar conocimiento de las operaciones y funciones de este órgano de control superior.

[450] De igual modo, a pesar de que el artículo 22(2) de la Ley de la Oficina del Director de Auditorías de 2014 exige que el director publique los informes de auditoría en el sitio del gobierno en internet un mes después de habérselos remitido a la Cámara de Representantes, no se los encuentra en línea; una búsqueda efectuada en dicho sitio tampoco arrojó resultado alguno. Estos informes deberían estar fácilmente disponibles en línea ya que constituyen el medio primordial de control de las finanzas públicas y el mecanismo mediante el cual se señalan irregularidades a la atención de la Cámara de Representantes y, ulteriormente, del público en general. La publicación de tales informes le brinda al público una forma de hacer un seguimiento del uso de las finanzas gubernamentales y de asegurarse de que se utilicen de manera adecuada. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 5.4.10 en la sección 5.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[451] En octavo lugar, durante la visita *in situ* y en el plan estratégico 2012-2017,¹⁸⁶ el Director de Auditorías informó que el Contador General y los órganos que audita no presentan sus cuentas anuales en forma oportuna y que la calidad de la información financiera suministrada es deficiente.

[452] Al respecto el Comité nota con preocupación que algunos órganos públicos y empresas, sociedades u organismos del estado se han negado a suministrarle al Director de Auditorías sus estados financieros auditados (tal es el caso, entre otros, de la Corporación Saint John para el Desarrollo, la Junta de Educación, la Autoridad Central de la Vivienda y la Planificación y la Autoridad de Control del Desarrollo).¹⁸⁷

[453] El Informe del Director de Auditoría sobre las cuentas públicas de Antigua y Barbuda para el ejercicio económico finalizado en 2010 dispone lo siguiente:¹⁸⁸ “19.2. *En mayo de 2012 se envió un pedido por escrito a todos los órganos públicos solicitándoseles sus últimos tres (3) años de estados financieros auditados. Los resultados de mi investigación indicaron que si bien varios de dichos órganos poseen estados financieros auditados al día, por lo cual debe felicitárseles, en otros casos no es así. En efecto, 12 órganos públicos presentaban un rezago de cuatro años, en tanto que 5 registraban un atraso de más de cinco años. Asimismo, cinco (5) órganos públicos no dieron respuesta a mi pedido ni a los diversos seguimientos efectuados.*

[454] 19. 3. *Tales resultados deben ser motivo de preocupación para los parlamentarios. Muchos de estos órganos públicos reciben importantes subvenciones del gobierno. Los estados financieros auditados suministran garantías de que dicho financiamiento se utilizó en la forma prevista. Asimismo, los estados financieros actualizados son necesarios para informar al gobierno de los pasivos contingentes*

¹⁸⁵ *Ibíd.*, página 11.

¹⁸⁶ Ver página 9 del documento “*Strategic Plan 2013 - 2017*” (Plan estratégico 2013-2017), disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_str_pla_2013_2017.pdf

¹⁸⁷ Ver Apéndice H del “*Report of the Director of Audit on the Public Accounts of Antigua y Barbuda for the Financial Year ended 2010*” (Informe del Director de Auditoría sobre las cuentas públicas de Antigua y Barbuda para el ejercicio económico finalizado en 2010), disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_rep_dir_aud_2010.pdf

¹⁸⁸ *Ibíd.*, página 51.

reconocidos por los órganos públicos y que pueden representar una posible responsabilidad para el estado.

[455] 19.4. *Al 31 de diciembre de 2013 todos los órganos públicos deben tener actualizados sus estados financieros y auditorías. Los órganos públicos que no hayan recibido dictámenes de auditoría sin salvedades deben elaborar un plan de acción para sanear a la brevedad posible las deficiencias identificadas en la presentación de información financiera y contable.*

[456] 19.5. *En conclusión, deseo señalar que resulta imperativo que la Cámara de Representantes y el público en general hagan que dichos órganos se responsabilicen de la divulgación de su situación financiera y de la presentación de estados contables auditados.*

[457] 19.6. *El gobierno de Antigua y Barbuda está haciendo todo lo posible para actualizar sus cuentas públicas, por lo que se insta a los órganos públicos a que hagan lo propio.*

[458] 19.7. *Por último, debo mencionar que cuatro (4) órganos públicos se negaron directamente a suministrar estados financieros a esta oficina, incluso tras conversaciones con la Procuraduría General a fin de que se diera cumplimiento a la solicitud al efecto."*

[459] En vista de lo anterior, y a efectos de incentivar el cumplimiento de las normas, el Comité estima que el país analizado debería considerar la aplicación de sanciones a aquellas entidades o personas físicas responsables de la presentación de los mencionados estados financieros. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 5.4.11 en la sección 5.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[460] Asimismo, con respecto a la falta de calidad de la información financiera suministrada a la ODA, el Director de Auditorías señaló lo siguiente en su Informe sobre las cuentas públicas de Antigua y Barbuda para el ejercicio económico finalizado en 2009:¹⁸⁹ *"Aún me preocupa en forma particular que no se haya puesto el esfuerzo suficiente en la elaboración de los diversos estados contables ni en los correspondientes documentos fuente en cuestión. Me preocupa también que la mayoría de los estados financieros que se presentan a la auditoría no sean sometidos a un análisis previo.*

[461] *Para el personal de auditoría resulta efectivamente desalentador hallarse en una situación en la que año tras año encuentra problemas similares, pero en cantidades más grandes, durante la auditoría de los estados financieros elaborados por los empleados del Departamento del Tesoro. Un sistema adecuado de control interno debería ser el requisito previo para el funcionamiento eficaz de un departamento, ya que mejoraría la calidad del trabajo producido. Una vez implementado permitiría la detección de errores con la consecuente reducción del riesgo de inexactitudes sustanciales".*

[462] El Comité nota con preocupación la situación en curso descrita precedentemente y sugiere que el país analizado considere el establecimiento de sistemas apropiados de control interno para garantizar que el Director de Auditorías cuente con información financiera exacta, confiable y oportuna. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 5.4.12 en la sección 5.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[463] Por último, teniendo en cuenta que durante la visita *in situ* el Director de Auditoría señaló que resultaba necesaria la cooperación técnica para la capacitación de su personal a fin de detectar actos de corrupción, así como para la elaboración e implementación de estrategias y procedimientos para que las

¹⁸⁹ Ver página 4 del "Report of the Director of Audit on the Public Accounts of Antigua y Barbuda for the Financial Year ended 2009" (Informe del Director de Auditoría sobre las cuentas públicas de Antigua y Barbuda para el ejercicio económico finalizado en 2009), disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_rep_dir_aud_2009.pdf

partes interesadas se hagan partícipes y denuncien prácticas corruptas, el Comité formulará una recomendación al país analizado a fin de que considere la adopción de medidas adecuadas para solicitar a organizaciones internacionales o a otras naciones que suministren la cooperación técnica que necesita la ODA en este sentido (véase la recomendación 5.4.13 en la sección 5.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

4.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[464] Tras la visita *in situ*,¹⁹⁰ el Director de Auditorías suministró los siguientes datos relativos a sus resultados.

[465] Año	Nº de auditorías concluidas	Presentadas a los funcionarios de rendición de cuentas	Tipos de auditoría
2009	18	Sí	De desempeño: 0 De cumplimiento de normas: 18 Financieras: 0
2010	12	Sí	De desempeño: 0 De cumplimiento de normas: 11 Financieras: 1
2011	14	Sí	De desempeño: 0 De cumplimiento de normas: 13 Financieras: 1
2012	12	Sí	De desempeño: 2 De cumplimiento de normas: 9 Financieras: 1
2013	13	Sí	De desempeño - 4 De cumplimiento de normas: 6 Financieras: 3

¹⁹⁰ Ver páginas 6 y 7 del documento “OEA. Reunión con el Depto. de Auditoría, oct., 2014”, disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_atg_oas_mee_aud_dep_2014.pdf

[466] En primer lugar, con respecto a la información consignada precedentemente, el Comité observa que si bien demuestra que la ODA ha efectuado auditorías, no indica claramente si como resultado de ellas se han detectado conductas que puedan constituir actos de corrupción. Por ese motivo el Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 5.4.14 en la sección 5.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[467] En segundo lugar, el Comité deja constancia de que no hay información disponible relativa a la medida en la que se dio efectivo seguimiento a las recomendaciones formuladas por la ODA. Por ese motivo el Comité considera que sería útil que dicho órgano cuente con un sistema de seguimiento para determinar la atención que se presta a sus recomendaciones, con vistas a la individualización de desafíos y a la recomendación (cuando corresponda) de medidas correctivas (véase la recomendación 5.4.15 en la sección 5.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[468] En tercer lugar, y de conformidad con las recomendaciones 5.4.2 y 5.4.3 del Capítulo II (B) del presente informe, el Comité estima que resultaría útil que la ODA cuente con un sistema de seguimiento de aquellas conductas detectadas durante las auditorías que pudieran constituir actos de corrupción y que dicho órgano informe a los entes competentes a efectos de su investigación y de la aplicación de las medidas correspondientes. Dicho sistema le permitiría conocer los mecanismos de tramitación de tales informes y sus resultados, por lo que podría hacerlos públicos, cuando corresponda, a fin de que la ciudadanía logre apreciar que sus labores coadyuvan a la detección de la corrupción y cuente con un mejor fundamento para evaluar el desempeño del órgano. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 5.4.16 en la sección 5.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

[469] En cuarto lugar, el Comité estima que es útil que el país analizado considere la elaboración de información sobre las sumas reembolsadas al estado que se hayan ordenado y acreditado efectivamente a las arcas públicas a fin de individualizar desafíos en los procesos de cobro de las mismas y, de corresponder, de adoptar medidas correctivas (véase la recomendación 5.4.17 en la sección 5.4 del Capítulo II (B) del presente informe).

5.4. Conclusiones y recomendaciones

[470] Con base en el análisis integral de la Oficina del Director de Auditorías (ODA) efectuado en las secciones precedentes, el Comité ofrece las siguientes conclusiones y recomendaciones.

[471] Antigua y Barbuda ha considerado y adoptado medidas dirigidas a mantener y fortalecer la Oficina del Director de Auditorías (ODA) como órgano de control superior, conforme lo indicado en la sección 5 del Capítulo II (B) del presente informe.

[472] En vista de los comentarios formulados en la sección antes mencionada, el Comité sugiere que el país analizado considere las siguientes recomendaciones.

- 5.4.1 Considerar otorgar a la Oficina del Director de Auditorías la obligación legal de comunicar irregularidades, tales como actividades fraudulentas, a las autoridades que correspondan, como la Comisión de Integridad, Fuerza de la Policía Real de Antigua y Barbuda, la Oficina del Director del Ministerio Público (DPP), la Comisión del Servicio Público, la Procuraduría General (incluida su futura Unidad de Anticorrupción) y/o la Oficina de Políticas Nacionales de Control de Drogas y Lavado de Dinero (ONDCP) (véase la sección 5.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 5.4.2 Adoptar mecanismos de coordinación y cooperación que permitan que la Oficina del Director de Auditorías (ODA) envíe a la Comisión de Integridad, a la Fuerza de la Policía Real de Antigua y Barbuda, a la Oficina del Director del Ministerio Público (DPP), a la Comisión del

Servicio Público, a la Procuraduría General (incluida su futura Unidad de Anticorrupción), a la Oficina del Contador general y/o a la Oficina de Políticas Nacionales de Control de Drogas y Lavado de Dinero (ONDCP), según corresponda, avisos oportunos de las pruebas de los actos de corrupción que detecte en las auditorías que realiza (véase la sección 5.2 del Capítulo II (B) del presente informe).

- 5.4.3 Adoptar las medidas necesarias para garantizar que el Comité de Cuentas Públicas (PAC) se reúna en forma periódica y considerar la revisión de las órdenes permanentes del Parlamento y del reglamento del PAC a fin de asegurar que los informes de la ODA presentados al Parlamento se aborden sin demoras a efectos de permitir acciones correctivas expeditivas (véase la sección 5.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 5.4.4 Establecer mecanismos para asegurar que las autoridades y órganos sujetos al control de la ODA cumplan efectivamente las recomendaciones formuladas en sus informes de auditoría (véase la sección 5.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 5.4.5 Adoptar las medidas correspondientes para asegurar el cumplimiento del artículo 13 de la Ley de la Oficina del Director de Auditorías de 2014 a efectos de garantizar que la ODA sea presupuestariamente independiente del Ministerio de Finanzas (véase la sección 5.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 5.4.6 Proporcionar a la Oficina del Director de Auditorías los recursos presupuestarios, humanos y tecnológicos necesarios para que desempeñe adecuadamente sus funciones, dentro de los recursos disponibles (véase la sección 5.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 5.4.7 Crear y mantener un sitio institucional en internet para la Oficina del Director de Auditorías a fin de permitir que el público tenga fácil acceso a la información relativa a sus objetivos y funciones, a los procedimientos establecidos para desempeñarlas y a las formas de comunicarse con dicho órgano. Asegurarse de que contenga, entre otros datos, los informes emitidos por la ODA, el informe de auditoría interna dispuesto por el artículo 14 de la Ley de la Oficina del Director de Auditorías de 2014, así como datos estadísticos de su labor, planes estratégicos, legislación pertinente y descripciones y especificaciones de sus puestos de trabajo (véase la sección 5.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 5.4.8 Considerar imponer a la Oficina del Director de Auditorías la obligación legal de rendir cuentas y publicar informes anuales, así como divulgar sus actividades y los resultados obtenidos, el rendimiento interno de la institución, sus objetivos, desafíos y logros (véase la sección 5.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 5.4.9 Asegurarse de que el informe anual de las actividades de la Oficina del Director de Auditorías presente al público información pertinente relativa a la tarea de este órgano de control superior, tal como sus recursos humanos, su organigrama, su asignación presupuestaria, sus gastos, la capacitación que brinda y datos estadísticos de su labor (véase la sección 5.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 5.4.10 Hacer públicos en línea todos los informes elaborados por la Oficina del Director de Auditorías de forma tal que resulten de fácil acceso para el público en general (véase la sección 5.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 5.4.11 Otorgar al Director de Auditorías la competencia para imponer sanciones administrativas a los entes gubernamentales y a otros órganos públicos (incluidas las empresas y sociedades de

propiedad del estado) que no presenten en los plazos fijados los estados contables del ejercicio económico correspondiente, así como a las personas físicas dentro de dichos entes y órganos que sean responsables de la elaboración y presentación de los mismos en nombre de aquéllos (véase la sección 5.2 del Capítulo II (B) del presente informe).

- 5.4.12 Establecer sistemas apropiados de control interno para que el gobierno pueda asegurarse de que el Director de Auditorías cuente con información financiera exacta, confiable y oportuna (véase la sección 5.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 5.4.13 Adoptar las medidas correspondientes para solicitar a organizaciones internacionales o a otras naciones el suministro de la cooperación técnica que necesita la Oficina del Director de Auditorías para capacitar a su personal en la detección de actos de corrupción y para coadyuvar en la elaboración e implementación de estrategias y procedimientos para que las partes interesadas se hagan partícipes y denuncien las prácticas corruptas (véase la sección 5.2 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 5.4.14 Recopilar y publicar datos estadísticos que demuestren claramente si de las auditorías realizadas se han detectado conductas que puedan constituir actos de corrupción, a efectos de individualizar desafíos y recomendar medidas correctivas (véase la sección 5.3 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 5.4.15 Adoptar un sistema de seguimiento que permita que la Oficina del Director de Auditorías vea en qué medida cumple sus recomendaciones cada uno de los órganos auditados, a fin de individualizar desafíos y, cuando corresponda, recomendar medidas correctivas (véase la sección 5.3 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 5.4.16 Adoptar un sistema de seguimiento de aquellas conductas que se detecten durante las auditorías efectuadas por la Oficina del Director de Auditorías que puedan constituir actos de corrupción y que dicho órgano comunique a los entes competentes a efectos de su investigación y de la aplicación de las medidas correspondientes, lo cual le permitirá conocer la forma en que se tramitan sus conclusiones y los resultados de las mismas, además de hacer pública dicha información cuando corresponda, a fin de que la ciudadanía logre apreciar que sus labores coadyuvan a la detección de la corrupción y cuente con un mejor fundamento para evaluar el desempeño del órgano (véase la sección 5.3 del Capítulo II (B) del presente informe).
- 5.4.17 Elaborar información sobre las sumas reembolsadas al estado que se hayan ordenado y acreditado efectivamente a las arcas públicas a fin de individualizar desafíos en los procesos de cobro de las mismas y, de corresponder, de adoptar medidas correctivas (véase la sección 5.3 del Capítulo II (B) del presente informe).

ANEXO I

AGENDA DE LA VISITA *IN SITU* A ANTIGUA Y BARBUDA

<u>Lunes, 6 de octubre de 2014</u>	
16:00 hrs. – 17:00 hrs. <i>Hotel City View</i> <i>Newgate St, St John's</i>	Reunión de coordinación entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
17:00 hrs. – 18:00 hrs. <i>Hotel City View</i>	Reunión de coordinación entre los representantes del Estado analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
<u>Martes, 7 de octubre de 2014</u>	
09:00 hrs. – 12:30 hrs. <i>Hotel City View</i>	Reunión con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores.
	<u>Temas:</u> Órganos de Control Superior <ul style="list-style-type: none">• La perspectiva de la sociedad civil sobre el rol de los órganos de control en materia de prevención, detección, sanción y erradicación de las prácticas corruptas. Temas de la Primera Ronda de Análisis <ul style="list-style-type: none">• Conflictos of Intereses.• Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos.• Acceso a la Información Pública.
	<u>Participantes:</u> <i>La Asociación de Abogados de Antigua y Barbuda</i> <i>Sr. Arthur G B Thomas, Presidente</i> <i>Sra. Marian Hesse, Miembro</i> <i>La Cámara de Industria y Comercio de Antigua y Barbuda</i> <i>Sra. Bernadette David, Vicepresidenta</i> <i>Sr. Everett Christian, Director Ejecutivo Interino</i> <i>El Sindicato de los Trabajadores de Antigua (The Antigua Trades and Labour Union)</i> <i>Sr. Wigley George, Presidente</i> <i>Sr. Alrick Daniel, Secretario General</i> <i>El Congreso de Medios de Antigua y Barbuda (Antigua y Barbuda Media Congress)</i> <i>Sra. Martina Johnson, Presidenta</i>

	<i>La Asociación de Banqueros de Antigua y Barbuda</i> <i>Sr. Gordon Julien, Miembro</i>
12:30 hrs. – 14:00 hrs.	Almuerzo
14:00 hrs. – 17:30 hrs. <i>Hotel City View</i>	Comisión de Integridad <i>Integrity Commission</i>
14:00 hrs. – 15:45 hrs.	<p><u>Panel 1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Breve presentación sobre su propósito, funciones y estructura (10 minutos). • Régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional. • Adopción de decisiones. • Régimen jurídico y administrativo de los recursos humanos y acciones de capacitación. • Normativa interna para el cumplimiento de sus responsabilidades y fortalecimiento institucional. • Difusión de sus objetivos y funciones. <p><u>Participantes:</u> <i>Sr. Radford Hill, Presidente</i> <i>Pastor Ivor Davis, Miembro</i> <i>Sra. Roslyn Yearwood, Secretaria</i></p>
16:00 hrs. – 17:30 hrs.	<p><u>Panel 2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos de control interno y de rendición de cuentas. • Régimen presupuestario. • Resultados con relación al cumplimiento de sus responsabilidades y su difusión. • Dificultades para el cumplimiento de sus responsabilidades y necesidades de cooperación técnica. <p><u>Participantes:</u> <i>Sr. Radford Hill, Presidente</i> <i>Pastor Ivor Davis, Miembro</i> <i>Sra. Roslyn Yearwood, Secretaria</i></p>
17:30 hrs. – 18:00 hrs. <i>Hotel City View</i>	Reunión informal^{191/} entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
<u>Miércoles, 8 de octubre de 2014</u>	
08:30 hrs. – 10:30 hrs. <i>Hotel City View</i>	Procuraduría General <i>Office of the Attorney General</i>

¹⁹¹. El segundo párrafo de la disposición 20 de la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ* señala: “...Al concluir las reuniones en cada día de la visita in situ, la Secretaría Técnica propiciará una reunión informal con los miembros del Subgrupo para intercambiar puntos de vista preliminares sobre los temas tratados en ellas...”

<p>08:30 hrs. – 19:30 hrs.</p>	<p><u>Panel 3:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Breve presentación sobre su propósito, funciones y estructura (10 minutos). • Régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional. • Régimen jurídico y administrativo de los recursos humanos y acciones de capacitación. • Normativa interna para el cumplimiento de sus responsabilidades y fortalecimiento institucional. • Difusión de sus objetivos y funciones. <p><u>Participantes:</u></p> <p><i>Sr. Steadroy Benjamin, Procurador General y Ministro de Asuntos Jurídicos y Justicia</i></p> <p><i>Sr. Lebrecht Hesse, Subprocurador General</i></p> <p><i>Sr. Martin Camacho, Subprocurador General Adjunto</i></p> <p><i>Sr. Colin Hodge, Redactor Jurídico</i></p> <p><i>Sra. Vanessa Moe, Abogada de la Corona II</i></p> <p><i>Sra. Rose-Anne Kim, Abogada de la Corona II</i></p> <p><i>Sra. Carla Brookes-Harris, Abogada de la Corona</i></p>
<p>09:40 hrs. – 10:30 hrs.</p>	<p><u>Panel 4:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos de control interno y de rendición de cuentas. • Régimen presupuestario. • Resultados con relación al cumplimiento de sus responsabilidades y su difusión. • Dificultades para el cumplimiento de sus responsabilidades y necesidades de cooperación técnica. <p>Temas de la Primera Ronda de Análisis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asistencia y cooperación • Autoridades Centrales <p><u>Participantes:</u></p> <p><i>Sr. Steadroy Benjamin, Procurador General y Ministro de Asuntos Jurídicos y Justicia</i></p> <p><i>Sr. Lebrecht Hesse, Subprocurador General</i></p> <p><i>Sr. Martin Camacho, Subprocurador General Adjunto</i></p> <p><i>Sr. Colin Hodge, Redactor Jurídico</i></p> <p><i>Sra. Vanessa Moe, Abogada de la Corona II</i></p> <p><i>Sra. Rose-Anne Kim, Abogada de la Corona II</i></p> <p><i>Sra. Carla Brookes-Harris, Abogada de la Corona</i></p>
<p>10:40 hrs. – 13:00 hrs. <i>Hotel City View</i></p>	<p>Fiscalía General <i>Office of the Director of Public Prosecutions</i></p>

10:40 hrs. – 11:45 hrs.	<p><u>Panel 5:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Breve presentación sobre su propósito, funciones y estructura (10 minutos). • Régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional. • Régimen jurídico y administrativo de los recursos humanos y acciones de capacitación. • Normativa interna para el cumplimiento de sus responsabilidades y fortalecimiento institucional. • Difusión de sus objetivos y funciones. <p><u>Participante:</u> Sr. Anthony Armstrong, Fiscal General</p>
11:50 hrs. – 13:00 hrs.	<p><u>Panel 6:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos de control interno y de rendición de cuentas. • Régimen presupuestario. • Resultados con relación al cumplimiento de sus responsabilidades y su difusión. • Dificultades para el cumplimiento de sus responsabilidades y necesidades de cooperación técnica. <p><u>Participante:</u> Sr. Anthony Armstrong, Fiscal General</p>
13:00 hrs. – 14:00 hrs.	Almuerzo
14:00 hrs. – 17:30 hrs. <i>Hotel City View</i>	<p>Oficina del Director de Auditoria <i>Office of the Director of Audit</i></p>
14:00 hrs. – 15:30 hrs.	<p><u>Panel 7:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Breve presentación sobre su propósito, funciones y estructura (10 minutos). • Régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional. • Régimen jurídico y administrativo de los recursos humanos y acciones de capacitación. • Normativa interna para el cumplimiento de sus responsabilidades y fortalecimiento institucional. • Difusión de sus objetivos y funciones. <p><u>Participantes:</u> Sr. Dean Evanson, Director de Auditoria Sra. Denise Hunte, Subdirectora de Auditoria</p>
15:40 hrs. – 17:30 hrs.	<u>Panel 8:</u>

	<ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos de control interno y de rendición de cuentas. • Régimen presupuestario. • Resultados con relación al cumplimiento de sus responsabilidades y su difusión. • Dificultades para el cumplimiento de sus responsabilidades y necesidades de cooperación técnica.
	<p><u>Participantes:</u></p> <p><i>Sr. Dean Evanson, Director de Auditoria</i></p> <p><i>Sra. Denise Hunte, Subdirectora de Auditoria</i></p>
17:30 hrs. – 18:00 hrs. <i>Hotel City View</i>	Reunión informal entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
Jueves, 9 de octubre de 2014	
09:00 hrs. – 12:30 hrs. <i>Hotel City View</i>	Comisión del Servicio Público <i>Public Service Commission</i>
09:00 hrs. – 10:30 hrs.	<p><u>Panel 9:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Breve presentación sobre su propósito, funciones y estructura (10 minutos). • Régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional. • Adopción de decisiones. • Régimen jurídico y administrativo de los recursos humanos y acciones de capacitación. • Normativa interna para el cumplimiento de sus responsabilidades y fortalecimiento institucional. • Difusión de sus objetivos y funciones.
	<p><u>Participantes:</u></p> <p><i>Sra. Ineta Wallace, Presidente Interina</i></p> <p><i>Sra. Luann De Costa-Eduardo, Miembro</i></p> <p><i>Sr. Alec Tomlinson, Miembro</i></p> <p><i>Sra. Annetta Harris, Secretaria</i></p>
10:45 hrs. – 12:30 hrs.	<p><u>Panel 10:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos de control interno y de rendición de cuentas. • Régimen presupuestario. • Resultados con relación al cumplimiento de sus responsabilidades y su difusión. • Dificultades para el cumplimiento de sus responsabilidades y necesidades de cooperación técnica.
	<p><u>Participantes:</u></p> <p><i>Sra. Ineta Wallace, Presidente Interina</i></p> <p><i>Sra. Luann De Costa-Eduardo, Miembro</i></p>

	<i>Sr. Alec Tomlinson, Miembro</i> <i>Sra. Annetta Harris, Secretaria</i>
12:30 hrs. – 14:00 hrs.	Almuerzo
14:00 hrs. – 16:00 hrs. <i>Hotel City View</i>	Oficina del Comisionado de Información
	<p><u>Panel 11:</u></p> <p>Tema de la Primera Ronda de Análisis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acceso a la Información Pública
	<p><u>Participante:</u></p> <p><i>Sr. Alister Thomas, Comisionado de Información</i></p>
16:15 hrs. – 16:45 hrs. <i>Hotel City View</i>	Reunión informal entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
16:45 hrs. – 17:15 hrs. <i>Hotel City View</i>	Reunión final^{192/} entre los representantes del Estado analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.

¹⁹². El tercer párrafo de la disposición 20 de la *Metodología para la realización de las Visitas In Situ* señala: “...Al final de la visita in situ se realizará una reunión en que participarán los Expertos del Subgrupo, la Secretaría Técnica y el Experto Titular del Estado analizado y/o el funcionario que éste haya designado para apoyarlo de acuerdo con lo previsto en la disposición 10, segundo párrafo, de la presente Metodología. En dicha reunión se precisará, si fuere el caso, la información que excepcionalmente quede aún pendiente de suministrar el Estado analizado por conducto de la Secretaría Técnica y el término en que lo hará y se coordinará cualquier otro tema pendiente que resulte de la visita in situ.”

**AUTORIDADES QUE SIRVIERON DE CONTACTO EN EL ESTADO ANALIZADO PARA LA
COORDINACIÓN DE LA VISITA *IN SITU*, Y REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS
MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR Y DE LA SECRETARÍA
TÉCNICA DEL MESICIC QUE PARTICIPARON EN LA MISMA**

ESTADO ANALIZADO:

ANTIGUA Y BARBUDA

Hon. Steadroy Benjamin

Experto Titular ante el Comité de Expertos del MESICIC
Procurador General y Ministro de Asuntos Jurídicos

Annette Mark

Experta Alternante ante el Comité de Expertos del MESICIC
Oficial Jurídico, Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas y Lavado de Activos (ONDCP)

ESTADOS MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR:

BAHAMAS

Franklyn Williams

Director Adjunto
Fiscalía General

CHILE

Luis Felipe Sepúlveda

Abogado Asesor, Empresas Públicas y Convenios Internacionales
Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno

Maria Loreto Gutiérrez Alvear

Fiscal Judicial I
Corte de Apelaciones de Santiago

Felipe Aliaga Hernández

Abogado, Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales
Contraloría General de la República

María Isabel Mercadal

Abogada, Dirección de Asuntos Jurídicos
Ministerio de Relaciones Exteriores

SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC

Luiz Marcelo Azevedo

Oficial Jurídico del Departamento de Cooperación Jurídica
Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA